

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  
SEDE ECUADOR  
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS  
CONVOCATORIA 2012-2014**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS**

**LA POLÍTICA DE LA INFLUENCIA DE LAS COMUNIDADES  
AFROCOLOMBIANAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE 1991**

**MÓNICA JOHANNA MORALES ALONSO**

**MAYO 2015**

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES  
SEDE ECUADOR**

**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS  
CONVOCATORIA 2012-2014**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS**

**LA POLÍTICA DE LA INFLUENCIA DE LAS COMUNIDADES  
AFROCOLOMBIANAS EN EL PROCESO CONSTITUYENTE DE 1991**

**MÓNICA JOHANNA MORALES ALONSO**

**ASESOR DE TESIS: FRANKLIN VINICIO RAMÍREZ GALLEGOS**

**LECTORES: AGUSTIN LAO MONTES  
SOLEDAD STOESSEL**

**MAYO 2015**

## **DEDICATORIA**

A mi madre Leonor Alonso Valbuena, quien es la razón más importante de mi existencia, a ella toda mi admiración y mi amor por darme la vida, cuidarme y amarme.

A mis hermanas Yeimy y Andrea y a mi cuñado Fernando Bohórquez por su gran apoyo incondicional para cumplir con esta meta.

A mis sobrinos Santiago y Nicolás por ser luz y vida para mi ser.

## AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es producto de la participación y el apoyo de un conjunto de actores, instituciones, familiares y amigos que de manera directa e indirecta aportaron y apoyaron la culminación de esta. Un gran agradecimiento a FLACSO- Ecuador por apoyar con su componente humano, académico y económico el desarrollo de este trabajo de investigación.

Especial agradecimiento al asesor Franklin Ramírez, por su invaluable orientación, apoyo y enriquecedores debates que dieron las pautas para fundamentar la investigación desde una perspectiva teórico -metodológica. De igual forma un sentido agradecimiento al Profesor Agustín Lao Montes por sus valiosos aportes sobre el debate teórico y por compartir el amplio y profundo conocimiento sobre las luchas y las reivindicaciones del Movimiento Social Afrodescendiente de Colombia, de igual forma a los profesores Jaime Arocha, Eduardo Restrepo por compartirme sus conocimientos.

Especial agradecimiento al Movimiento Social Afrodescendiente de Colombia por su participación en la historia y en la configuración de procesos democratizantes en Colombia. Un sentido reconocimiento y agradecimiento a los intelectuales y militantes Carlos Rosero, Libia Grueso, Mario Angulo, Jair Mena, Luzmila Gutiérrez, Carlos Cardona, quienes fueron parte esencial para la reconstrucción de la memoria, la historia y el análisis de este trabajo.

A mi familia por sus arduos esfuerzos y por el inmenso y valioso apoyo psicológico, espiritual y económico para cumplir con esta meta, sin ellos y por ellos este esfuerzo académico no hubiese sido posible. A mis amigos Yohana Nieto, Sergio Ramos, Paola Montoya quienes desde la distancia estuvieron apoyándome. A mis amigos en FLACSO, Andrés Vargas por su compañía en las largas jornadas de escritura, a Luis Carlos Erazo por sus valiosas palabras de aliento para lograr cumplir esta meta y a Jean Ronald por tener paciencia durante toda la maestría.

A la vida por permitirme conocer al mismo tiempo un gran conjunto de personas valiosas que me apoyaron, cambiaron mi forma de pensar, sentir y comprender el mundo.

## ÍNDICE

Contenido	Páginas
<b>RESUMEN</b> .....	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>8</b>
<b>CAPÍTULO I</b> .....	<b>21</b>
<b>ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS, SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA DE LA INFLUENCIA: APROXIMACIONES TEÓRICAS.</b> .....	<b>21</b>
1.1 La estructura de oportunidad política: antecedentes.....	22
1.1.1. La estructura de oportunidades políticas: conceptualización .....	23
1.2 La Sociedad Civil: debate teórico.....	26
1.2.1 La sociedad civil: argumentos para afinar su conceptualización. ....	30
1.3. La política de la Influencia. ....	31
1.3.1 Origen del debate de la Política de la Influencia. ....	32
1.3.2 Asociacionismo civil: un componente fundamental en la política de la influencia. ..	37
1.4 La política de la influencia: su relación con la sociedad civil. ....	38
1.5 Esfera pública: una aproximación al debate teórico. ....	39
1.6 La política del poder .....	41
1.7 A modo de conclusión. ....	41
<b>CAPÍTULO II</b> .....	<b>43</b>
<b>EL PROCESO CONSTITUYENTE DE 1991 COMO CONTEXTO DE OPORTUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS.</b> .....	<b>43</b>
2.1 El estallido de la política y la crisis orgánica del Estado Colombiano en la década .... de los 80.....	44
2.2 Inestabilidad del régimen político. ....	48
2.3 Movimientos y actores sociales en el marco de la violencia de los años 80. ....	50
2.4. La constituyente y la apertura de oportunidades para las organizaciones sociales. ....	52
2.4.1 Apertura a la participación política en el proceso constituyente. ....	52
2.4.2. Élités divididas y alineamientos inestables. ....	59
2. 4. 3 Aliados influyentes.....	63
2.4.4. Represión.....	65
2.5 A modo de conclusión. ....	66

<b>CAPÍTULO III .....</b>	<b>68</b>
<b>COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS: ENTRE LA POLÍTICA DE LA INFLUENCIA Y LA POLÍTICA DEL PODER. ....</b>	<b>68</b>
3.1 El Pacífico: escenario de lucha territorial identitaria de las comunidades afrodescendientes. ....	69
3.2 La sociedad civil y la asociatividad de las comunidades afrocolombianas. ....	71
a) De movimientos cívicos a organizaciones locales: el proceso de asociatividad de las comunidades negras. ....	75
b) El movimiento Cimarrón: una lucha étnico-racial que los diferenció culturalmente del proceso de territorial e identitario de las comunidades negras. ....	79
3.2.1 La política de la influencia: de la heterogeneidad asociativa al escenario pre constituyente. ....	82
3.2.2 Redes comunicativas. ....	85
3.2.3 Influencia de las comunidades afrodescendientes en la esfera pública y en la opinión pública: el salto de lo local-regional. ....	88
3.3 La incidencia política en el proceso constituyente. ....	90
3.3.1 Alianzas político electorales previas a la Asamblea Nacional Constituyente. ....	93
3.3.3 Lobby y persuasión a los constituyentes de otras fuerzas políticas en la ANC. ....	97
3.4 A modo de conclusión. ....	99
 <b>CAPÍTULO IV.....</b>	 <b>102</b>
<b>CONCLUSIONES. ....</b>	<b>102</b>
 <b>BIBLIOGRAFÍA. ....</b>	 <b>111</b>
<b>PERIÓDICOS. ....</b>	<b>113</b>
<b>ÍNDICE DE ENTREVISTAS. ....</b>	<b>114</b>

## RESUMEN

La presente investigación da cuenta de la participación del Movimiento Social Afrodescendiente en el proceso constituyente de 1991 en Colombia. Este proceso de participación en la política institucional se abordó con dos niveles de análisis, el primero corresponde al campo de las Estructuras de Oportunidades Políticas (EOP) con esta categoría se analizó el grado de apertura y cierre del acceso político de los actores, las condiciones de apertura a la participación, la división de las élites, las alineaciones inestables del sistema político y los aliados influyentes a fin de incidir con sus demandas en la esfera pública y en la política institucional.

El segundo nivel de indagación tomó como referente analítico la sociedad civil en estrecha articulación con la EOP. Se examinó la incidencia del Movimiento Social Afrodescendiente en la política institucional, a partir de estudiar cuáles fueron sus mecanismos de expresión, participación e influencia que les permitió la defensa de sus reivindicaciones y la propuesta de nuevos derechos en la esfera pública e institucional. Para ubicar estas variables, se recurrió al estudio de la “Política de la Influencia” teorizada como referente para dar cuenta de los modos en que la sociedad civil ha incidido con sus demandas en la esfera de la política institucional en Colombia.

Esta investigación reconstruyó la forma en cómo participó el Movimiento Social Afrodescendiente en el proceso constituyente de 1991 en términos históricos y desde una perspectiva de la sociología política analizó cómo se formó la política de la influencia de este movimiento, examinando los logros y los obstáculos presentes en el proceso constituyente, de esta forma se da cuenta de cómo fue el desarrollo de la política de la influencia y del poder del movimiento en la esfera de la política institucional en la constituyente de 1991.

## INTRODUCCIÓN

La constitución de 1991 en Colombia es resultado del proceso constituyente originado por la organización y movilización de la sociedad civil frente a la crisis socio-política, generada en la década de los 80 por la violencia de paramilitares, narcotráfico y grupos subversivos. En este contexto el Estado enfrentaba dos situaciones complejas: por un lado la crisis de legitimidad institucional causada por la debilidad en el cumplimiento de sus funciones de provisión de seguridad para toda la ciudadanía y por el otro, la negociación entre gobierno y algunas organizaciones guerrilleras que buscaba lograr firmar un pacto de paz que restableciera el orden socio-político en el país.

La respuesta de la sociedad civil a esta crisis fue proponer un proceso constituyente que culminara en una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La puesta en marcha de tal asamblea reunió a múltiples fuerzas tanto civiles como políticas: partidos políticos, empresarios, la iglesia, fuerzas políticas emergentes como la Unión Patriótica y la ADM19<sup>1</sup>, sindicatos, grupos artísticos y culturales, el movimiento campesino, organizaciones de mujeres, el movimiento indígena y las comunidades negras<sup>2</sup> que venían de diversas trayectorias de organización y movilización.

Estos sectores en el año de 1990 robustecieron su interacción entre sí tras conocer la iniciativa de *“la séptima papeleta”* que propuso reformar la Constitución de 1886. Esta iniciativa del movimiento estudiantil denominada la *“séptima papeleta, consistió en incluir una séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990”*, elecciones en donde se elegirían representantes a senado y cámara, escenario que fue aprovechado por los estudiantes para consultar a través de una séptima papeleta, la reforma constitucional para abrir la convocatoria a una Asamblea Constituyente, iniciativa que después de tener aceptación por gran parte de la sociedad civil, se aprobó normativamente con el Decreto 927 del 3 de mayo de 1990. De esta forma se empezó a dar apertura a la participación política en un contexto que fue propicio para activar la movilización tanto de los actores tradicionales como de nuevos actores políticos.

---

<sup>1</sup> El partido que formaron los excombatientes del movimiento guerrillero 19 de Abril, después de firmar el pacto de paz en 1990 con el Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo quien gobernó entre 1990 y 1994

<sup>2</sup> Es como se denomina a los grupos humanos afrodescendientes que se establecieron desde la colonia, en territorio, ejerciendo su libertad y sus prácticas tradicionales con una profunda raíz de la africanía.



En el marco de la convocatoria al proceso constituyente de 1991 las organizaciones afrodescendientes participaron activamente a través de diversas estrategias como reuniones locales, protestas rurales-urbanas, paros cívicos y la búsqueda de confluencias con otras fuerzas políticas. En relación a este último aspecto, fueron especialmente relevantes los vínculos tejidos con el movimiento indígena para deliberar y agendar propuestas sobre cuestiones étnicas e identitarias de cara a la Constituyente. Para el efecto buscaron además construir alianzas y coaliciones políticas con sectores afectados por problemas rurales y cívicos originados por el conflicto social y la crisis institucional (Wabgou, et al., 2012:131)

Estas estrategias fueron los ejes centrales para que las organizaciones y comunidades afrodescendientes se movilizaran en función de responder a la convocatoria de crear una nueva constitución política. En este escenario, el principal objetivo político de las comunidades afrodescendientes fue buscar la participación directa, es decir, su auto-representación con curules propias en la Asamblea Nacional Constituyente. Para cumplir este objetivo se produjo una amplia articulación entre diversas organizaciones para la creación de la Conferencia Pre constituyente de las Comunidades afrodescendientes (Grueso y Rosero, 1998:210).

La Conferencia se estableció como un espacio político donde se llevó a cabo un conjunto de deliberaciones en diferentes lugares del país: Cali, Buenaventura y Quibdó que dieron forma a la agenda de los afrocolombianos frente a la Constituyente (Agúdelo, 1999:7). Al mismo tiempo, en torno a la Conferencia se creó un micro espacio pre-electoral que posibilitó la selección de los precandidatos para la Asamblea Nacional Constituyente. Este escenario pre-electoral estuvo atravesado por los debates ideológicos tradicionales enfocados en la defensa de las propuestas en el marco del bipartidismo<sup>3</sup> y por otro lado, de la izquierda marxista, con la lucha del Movimiento de Obreros de Izquierda Revolucionaria<sup>4</sup> (Castillo, 2007:194).

En medio de esta disputa entre las diferentes fuerzas políticas bipartidistas y de la izquierda, se dio la reacción de inconformidad de los líderes de varias organizaciones afrocolombianas. Estos líderes provenían del círculos de estudios que trabajaban con las

---

<sup>3</sup> El bipartidismo es la nominación que históricamente se le ha dado a la presencia del partido conservador y liberal en la política tradicional colombiana.

<sup>4</sup> “Movimiento de Obreros de Izquierda Revolucionaria (MOIR), sus propuestas iban en contraposición al neoliberalismo, la flexibilización laboral y la apertura financiera de los mercados”(Ahumada;1991: 3)

problemáticas de las Comunidades Afrocolombianas –SOWETO-, que surgieron en 1976, en Pereira, Risaralda, y lo integraban estudiantes negros procedentes de diversas regiones del país, liderados por Juan de Dios Mosquera. Posteriormente estos círculos dejaron de existir, fundando en 1982 el Movimiento Cimarrón que tenía como objetivo la lucha de los pueblos africanos por recuperar su libertad. Algunos integrantes de este grupo hicieron parte de la idea de plantear una nueva agenda pública para la ANC y como alternativa, la postulación de un candidato que reivindicara “la identidad negra”.

Con ese criterio, en 1990, las comunidades negras eligieron a Carlos Rosero, “un antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, como el precandidato a la Asamblea Nacional Constituyente” (Castillo, 2007:196). Luego ocupó el rol de cofundador y actualmente es un activista a tiempo completo de la organización de movimiento social denominada Proceso de Comunidades Negras (PCN), destacándose por dirigente de la Coordinadora de Comunidades Negras<sup>5</sup>. Académicamente se ha desempeñado como docente del instituto superior de formación Afro en Montevideo. En los comicios nacionales del 27 de mayo de 1990 se contabilizaron la mayoría de los votos a favor de la ANC, el pre-candidato por las comunidades negras<sup>6</sup> no logró obtener una de las setenta curules<sup>7</sup> de la ANC. La distribución de las curules se registró de la siguiente forma

---

<sup>5</sup> Liderada por Carlos Rosero y Carlos Ramos, entraron a hacer parte de esta coordinadora varios líderes de Cimarrón y los palenqueros como Dionisio, Alfonso Cassiani, Rubén Hernández y Dorina Hernández.

<sup>6</sup> El candidato Juan de Dios Mosquera, líder del Movimiento cimarrón, “no salió elegido a la ANC, porque le asignaron un puesto secundario en la lista de la unión patriótica. La UP solo logra sacar dos delegatarios”(Castillo, 2007:195)

**Tabla N.º 1**  
**Partidos y movimientos políticos: Cantidad de curules en el congreso en 1991**

<b>Partidos y Movimientos Políticos</b>	<b>Cantidad de curules en el Congreso</b>
Partido Liberal	25
Alianza Democrática M-19	19
Movimiento de Salvación Nacional	11
Partido Social Conservador	5
Conservadores Independientes	4
Movimiento Indigenista	2
Movimiento Evangélico	2
Unión Patriótica	2

**Fuente:** Datos tomados de Castillo, Luis Carlos (2007) *Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Cali-Colombia. Editorial@univalle.edu.co.Pág:243

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 5 de febrero de 1991 y sesionó hasta el 4 de julio del mismo año, por un tiempo de cinco meses. “Estuvo compuesta por cinco comisiones: 1) principios, derechos y reforma constitucional, 2) Autonomía regional, 3) Reformas al gobierno y al Congreso, 4) Administración de justicia y ministerio público y 5) temas económicos, sociales y ecológicos” (www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/reglamento)

Como resultado de no contar con sus propios representantes las comunidades negras desplegaron otras estrategias y acciones para influenciar el debate en la ANC, por la vía de la presión en la esfera pública y la búsqueda de influencia en el sistema político: “serenatas interétnicas, marchas en Bogotá, campañas de presión como “el telegrama negro”<sup>8</sup> en todo el país, tomas pacíficas de entidades públicas como el Instituto de Reforma Agraria -Incora- en Quibdó y la toma de la embajada de Haití en Bogotá” (Castillo, 2007:201). En relación al sistema político, las comunidades negras utilizaron específicas estrategias para

---

<sup>8</sup> Fue una amplia movilización que se realizó en Bogotá durante los debates de la comisión de asuntos interétnicos, el fin era hacer presión, a este escenario institucional para que se aprobaran los artículos referentes a las comunidades afrodescendientes.

interactuar con las fuerzas políticas del bipartidismo, de la nueva izquierda: Unión Patriótica<sup>9</sup>, la Alianza Democrática M-19<sup>10</sup> y del movimiento indígena. (Castillo, 2007:201).

Los líderes y las organizaciones afrodescendientes establecieron, entonces, relaciones con diversas fuerzas políticas, como la indígena con la que entablaron diálogo desde dos vías diferentes: por un lado desde la figura de la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN) con Lorenzo Muelas el constituyente que representó, las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y por el otro, “desde las organizaciones de campesinos negros del Chocó con Francisco Rojas Birry representante de la Organización indígena de Colombia (ONIC), quien previamente había tenido acercamientos con organizaciones afrodescendientes en torno a propuestas conjuntas sobre derechos étnicos y territoriales. Esto último los colocó en la posición de representar tanto a las reivindicaciones de pueblos indígenas como de las organizaciones afrodescendientes”, lo que le permitió ser el expositor de las demandas y derechos de la agenda de las comunidades afrodescendientes en los debates constituyentes.

De esta forma, las organizaciones afrocolombianas en poco tiempo se aliaron con otros sectores -sociales y políticos- tratando de contrapesar su débil influencia política en la ANC y a la vez se movilizaron en la esfera pública procurando posicionar su particular agenda política y los nuevos derechos reclamados de cara al proceso constituyente. De ese modo, procuraron llevar sus demandas a la Constituyente a través de diversas formas de participación e influencia política que parecían abrir un escenario favorable para que el movimiento enfrente el dilema<sup>11</sup> de impulsar las demandas afrodescendientes en la ANC a pesar de no contar con sus propios constituyentes. Sin representación política directa, ¿cómo los movimientos sociales procuran incidencia en el sistema político? Esta pregunta, que no ha sido largamente indagada por las ciencias sociales, se coloca en el centro de las

---

<sup>9</sup> “Partido político de izquierda, fundado en 1985 como parte de una propuesta política legal de varios grupos guerrilleros. El Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”

<sup>10</sup> Era un movimiento guerrillero colombiano que surgió de un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. El ganador fue Misael Pastrana Borrero contra el General Rojas Pinilla. En 1990, este grupo se desmovilizó y formó la Alianza Democrática M19

<sup>11</sup> En el lenguaje cotidiano, se entiende al dilema como: “un problema que puede resolverse a través de dos o más soluciones aunque ninguna de las dos resulta completamente aceptable o, por el contrario, que las dos son igualmente aceptables. En otras palabras, al elegir una de las opciones, la persona no queda del todo conforme. Lo que hace un dilema es poner a un individuo en una situación de duda, debatiéndose entre dos alternativas” (www.protogalaxia64.blogspot.com)

preocupaciones de esta tesis a la luz del caso de las organizaciones afrocolombianas en el curso del proceso constituyente de 1991.

En efecto, esta tesis estudiará cómo influyeron las organizaciones afrodescendientes en el proceso constituyente de 1991. Se enfocará así en reconstruir las formas y estrategias con las que el movimiento posicionó desde la sociedad civil y en el sistema político, las demandas de los afrocolombianos a la ANC. Para el efecto, la tesis hace uso de un marco conceptual que combina el análisis de la estructura de oportunidad política de los movimientos sociales, con las teorías de la sociedad civil de impronta Habermasiana y en particular retoma a la categoría de “política de la influencia” utilizada por diversos autores para estudiar las específicas modalidades con que los movimientos sociales inciden en la esfera pública a fin de incidir en el juego democrático.

### **Problematización.**

Sobre el tema de lo afrodescendiente existe abundante producción académica<sup>12</sup> que ha estudiado la configuración de las organizaciones afrodescendientes y su transformación en movimiento social. Inicialmente en la literatura se examinó temas como la construcción del proceso organizativo, las demandas por la etnicidad, la tensión política entre el movimiento y el Estado sobre la ley 70<sup>13</sup> de 1993. En las últimas décadas los estudios se han enfocado en la sistematización de las denuncias nacionales e internacionales de la violación de los derechos humanos por parte de los distintos actores armados<sup>14</sup>, haciendo visible así en la esfera pública las disputas de las organizaciones sociales con el Estado para exigir y hacer efectivas las demandas sobre el tema de las sanciones y las reparaciones a las comunidades.

Partiendo de lo anterior, el aporte de esta investigación se sustenta en señalar que existe un escaso registro documental y analítico sobre el tema de la participación y

---

<sup>12</sup> Ver: Wade Peter (1992), Arocha Jaime (1992) y Miriam Jimeno (1992) entre otros. Desde la ciencia política norteamericana con Van Cott Donna (2000). Desde la historia y el análisis del proceso constituyente encontramos estudios de Ballén Rafael (1991), Uribe Diego (1992), Sachica y Vidal (1991), Zalamea Alberto (1991), Buelvas Jorge (1995) Valencia Alberto (1998) Ladrón de Guevara Andrés (2002) y De la Calle Alberto (2004)

<sup>13</sup> “Ley que reconoce a las comunidades negras que ocupan tierras baldías en las zonas rurales de la Cuenca del Pacífico, a la vez establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y sus derechos como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social para garantizar condiciones de igualdad en la sociedad colombiana” (Castillo, 2007:310)

<sup>14</sup> Ejemplo de estos son: Rodríguez, Cesar (2009). El desplazamiento afro: tierra, violencia y derechos de las comunidades negras; Proceso de comunidades negras -PCN- (2011) Genocidio del pueblo afrocolombiano: caso pacífico.

representación política de las comunidades afrodescendientes en el proceso Constituyente de 1991. Académicos como: Jaime Arocha, Carlos Efrén Agúdelo, Luis Carlos Castillo han abordado este tema desde la perspectiva antropológica y sociológica, describiendo y colocando en el debate académico las debilidades que se presentaron en el proceso constituyente, pero aún falta el estudio del cómo las comunidades afrodescendientes crearon formas y alianzas para influenciar la esfera de la política tanto desde el espacio público como institucional a fin de llevar sus demandas específicas a la ANC.

Por lo tanto, este estudio se centra en analizar *¿Cómo participó e influyó el movimiento afrocolombiano en el curso de la Asamblea Constituyente de 1991?* La relevancia de este estudio radica en que no existe una investigación que de forma puntual haya estudiado la política de las comunidades afrocolombianas en el proceso constituyente. Además pretende innovar en el análisis al situar una perspectiva que combina dos dimensiones teórico-analíticas: la primera proviene del enfoque de la estructura de oportunidad política (EOP)-desde la perspectiva de Sidney Tarrow (1989)- que permite examinar las estructuras que producen las condiciones para que se formen y actúen los movimientos sociales, creando procesos organizativos, participativos, relaciones y alianzas con estructuras e instituciones en donde se obtienen recursos y crean redes de oposición frente a los poderosos (Tarrow,1999:89)

La segunda dimensión proviene de la teoría de la sociedad civil estudiada antes como Lechner (1996), Cohen y Arato (2001), entre otros, que permite analizar el específico desenvolvimiento de las organizaciones de la sociedad civil en la perspectiva de influir en los procesos políticos desde sus particulares lógicas, espacios y dinámicas de acción, en el marco de procesos políticos y sociales asociados con la democratización de la política y la diferenciación entre sociedad y Estado. Desde esta perspectiva a los movimientos se les reconoce por su heterogeneidad, diferenciándose del Estado por su posición anti-autoritaria y por la capacidad de generar diferentes formas de organización y participación, que buscan influenciar con sus demandas la esfera pública (Cohen & Arato, 2000:396), buscan además incidir en el nivel institucional de la política para ser incluidos y tomar parte en la activación de reformas o decisiones que los beneficie.

La política de la sociedad civil y de los movimientos sociales, como lo indica Olvera (2003), se puede entender a partir del estudio de la “política de la influencia” que

desde el enfoque de Habermas hace alusión a “formas simbólicas generalizadas de comunicación que hacen parte de interacciones de convicción razonada o de sugestión retórica que buscan el entendimiento y el anticipo de confianza” (Habermas,2000:443) o como lo señala Olvera, supone “la presión indirecta de la sociedad civil sobre el sistema político, que se ejerce apelando a la crítica, la movilización y el convencimiento (Olvera, 2003:31) lo que le otorga enorme valor a la esfera pública.

El estudio de la política de la influencia está estrechamente articulado con el análisis de cómo las organizaciones y los movimientos sociales participan, de modos directos e indirectos, en las decisiones del gobierno, lo que se conoce como la “política del poder” (Zamocs, 2005:214). Desde la perspectiva de Zamocs, la política del poder se caracteriza porque los actores sociales combinan diferentes formas de lucha, es decir, pueden recurrir tanto a estrategias defensivas u ofensivas. En este sentido, la política del poder puede tomar la forma de participación política directa y de nuevas instituciones públicas germinadas desde la sociedad civil como la creación de consejos, de agencias de control o de participación electoral, etc., para obtener legitimidad y representación en diferentes estancias. También puede canalizarse por la vía de estrategias de movilización, protestas, boicots, entre otras formas de acción contenciosa, que inciden en el espacio público (Zamocs,2005:214).

Finalmente el objetivo de este estudio se centra en analizar: a) Aclarar el nivel estructural de la EOP de largo plazo que posibilita el análisis de la EOP de corto plazo en el proceso constituyente. Como objetivos específicos se estableció indagar a cerca de: a) qué es y cómo se estructuró la política de la influencia de las comunidades afrocolombianas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1991; b) cómo y cuáles son las variables para estudiar la política de la influencia; y c) qué nos permite ver la política de la influencia a propósito de los movimientos sociales en el específico caso de estudio.

### **Estado de la cuestión sobre las organizaciones afrodescendientes.**

El debate sobre la participación de las organizaciones afrodescendientes en el proceso constituyente de 1991 ha sido abordado por intelectuales de la academia colombiana que desde distintas disciplinas han aportado y reflexionado sobre esta cuestión. La primera disciplina que se interesó por abordar este tema fue la antropología que se encargó desde inicios de los años 80 en crear conceptos y explicaciones antropológicas sobre el reconocimiento étnico, el multiculturalismo y el proceso de organización de los afrodescendientes en Colombia.

Estos argumentos fueron posicionados en la esfera académica a través de debates que se recogen en artículos como: *“Violencia y asimetría étnicas. Multiculturalismo, debate antropológico y etnicidad de los afrocolombianos (1980-1990)”*. En este caso Nina S. de Friedemann (1930-1998) y Jaime Arocha se enfocaron en profundizar el concepto de asimetrías étnicas y su incidencia en el ocultamiento de la etnicidad afrocolombiana (Arocha, 1998:354).

Posteriormente en trabajos como *“El aniquilamiento en traje de tolerancia: el plan nacional de rehabilitación en Colombia”* (1989), *“Hacia una Nación para los excluidos”* (1989), *“Mestizaje en Colombia ¿Igualdad, fraternidad y libertad?”* (1989) *“Los negros y la Nueva Constitución Colombiana de 1991”* (1991), *La inclusión de los afrocolombianos. ¿Meta inalcanzable?* (1998), *“etnia y guerra: relación ausente en los estudios sobre las violencias colombianas”* (1998) abrió y reforzó el debate en torno al “reconocimiento, la inclusión, la violencia sobre las minorías étnicas, la etnicidad en la agenda política, los logros alcanzados por la gente negra en la reforma constitucional y la comisión nacional especial para las comunidades negras en la ley 70 de 1993” (Castillo, 2007:310). Fueron estos temas, los que comenzaron a emerger en la esfera pública como debates específicos que apuntaban a entender y exigir la participación de los afrodescendientes en espacios públicos de cara a ganar incidencia en la política institucional.

Simultáneamente la antropología continuó con debates sobre la presencia de los afrodescendientes en diversos escenarios públicos, de donde surgieron análisis como: *“Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e invisibilidad”* de Jaime Arocha y Nina de Friedemann (1984); en 1992 Fals Borda amplió la discusión con el



trabajo: *“Propuesta de articulado. Título especial: de los pueblos indígenas y grupos étnicos”* y Nina Friedemann, aportó con estudios como: *“Negros en Colombia: invisibilidad y legitimidad de su identidad”* (1991) *“La saga del negro”* y *“Antropología colombiana y la imagen del negro”* (1993). Todas estas reflexiones académicas sistematizaron la historia y la acción colectiva de las organizaciones afrocolombianos en diferentes escenarios públicos e institucionales.

A mediados de la década de los 90 el antropólogo Eduardo Restrepo retomó la discusión de la presencia de los afrodescendientes en la década de los 80 con el debate sobre: *“Avatares del negro en la antropología en Colombia”* (1998), posteriormente lo reforzó con el tema de *“Biopolítica y alteridad: dilemas de etnización de las Colombias negras”* (2005) y finalmente analizó el tema: *“Entre arácnidas deidades y leones africanos: contribución a un debate de un enfoque afroamericanista en Colombia”* (2005), donde el propósito fue crear un modelo conceptual y explicativo, que invitó al debate académico sobre las teorías de la cultura y sus articulaciones con el análisis histórico basado en criterios como: “1) un específico modelo conceptual y explicativo; 2) un encuadre metodológico; y, 3) una estrategia narrativa para identificar los aportes y las debilidades específicas del enfoque afroamericano como insumo de análisis de futuras investigaciones” (Restrepo, 2003:87-123)

Paralelo a estos estudios, otros antropólogos como Peter Wade aportaron al debate de lo afrodescendiente, los nexos entre identidad y movimientos sociales con artículos como: *“La Construcción del negro en América Latina”* (1992), *“El movimiento negro en Colombia”* (1993), *“Gente negra, nación mestiza: dinámica de las identidades raciales en Colombia”* (1997) y *“La cultura política de los afrodescendientes en Colombia”* (1998). Todos estos artículos aportaron al análisis de la movilización afrodescendiente desde una perspectiva histórica que analizó el concepto de raza, las huellas de la africanía, el orden racial y la identidad nacional, la adaptación y la resistencia negra, el mestizaje, el blanqueamiento y la nacionalidad colombiana. El propósito global de estas obras fue caracterizar el orden racial en Colombia para entender cómo se configuró el proceso del mestizaje en términos físicos, culturales y morales, analizando sus tipologías y dinámicas (Wade, 1997:17-50)

El Antropólogo Mauricio Pardo, en esta misma línea de discusión aportó con análisis como: “*Movimientos sociales y relaciones interétnicas*” y “*Movimientos sociales y actores no gubernamentales*”. En este trabajo describió los procesos históricos y la situación del movimiento afrodescendiente antes de la ley 70 de 1993, enfocándose en analizar las tensiones que se presentan entre la autonomía de las organizaciones afrodescendientes y las políticas de institucionalización estatal (Pardo, 2002: 60)

Este es el estado de la cuestión acerca de la producción académica existente que se enfocó exclusivamente en las comunidades afrodescendientes, su actuación política y su transición a movimiento social. En correspondencia se observa que no existe un análisis o un trabajo que se encargue puntualmente de investigar a profundidad la “política de la influencia” de las comunidades afrodescendientes en el proceso constituyente, ni mucho menos en las formas en que se establecieron sus relaciones con otras fuerzas políticas como partidos, organizaciones y otros movimientos para lograr colocar sus demandas en la esfera de la política institucional. A partir de esta revisión queda clara la especificidad, originalidad y potencial aporte de la tesis en relación a una mirada política de la acción colectiva del movimiento afrocolombiano en una coyuntura crítica como la Constituyente de 1991.

### **Metodología.**

Esta investigación se realizará desde la sociología política, inscrita en el enfoque teórico de los movimientos sociales, examinando el funcionamiento del sistema político, la capacidad organizativa de los grupos, las variaciones de la acción colectiva y la motivación e incidencia de los actores políticos en contextos de conflicto y cambio institucional (Tarrow; 1999:98)

En esta perspectiva, este estudio combina dos niveles de análisis. En primer lugar el campo de las estructuras de oportunidades políticas (EOP) y el accionar del movimiento social. Se estudia en este nivel el grado de apertura y cierre de acceso político formal de los nuevos actores en el espacio político y la voluntad de los actores centrales del sistema político colombiano de cara a ampliar la participación popular en el proceso constituyente. Se trata de enfocar el estudio del contexto político de 1991 para observar como el movimiento afrocolombiano se insertó en la lucha político-institucional durante el proceso

constituyente, observando las posibles divisiones en las elites y las relaciones que las organizaciones sociales afrodescendientes establecieron con otras fuerzas políticas reconfigurando de esta forma el mapa de alineaciones políticas.

Para efectos de análisis de la EOP el estudio abarca la revisión bibliográfica de textos de historia que analizan los procesos que se recrearon en la década de los 80, el análisis documental sobre la configuración de los partidos políticos y la revisión de las permanentes noticias que se presentaron durante el proceso constituyente sobre temas como la crisis estatal, la inestabilidad del sistema político y la incidencia de la violencia. Para identificar cómo los actores de las comunidades afrodescendientes se analizaron las condiciones de apertura a la participación, la división de las élites, las alineaciones inestables del sistema político y los aliados influyentes a fin de incidir con sus demandas en la esfera pública y en la política institucional.

En tal entorno político, se ubican y analizan los encuentros que realizaron las comunidades afrodescendientes en la década de los 80, donde se gestaron incipientes procesos organizativos a nivel regional en torno a la lucha por el territorio. Dicho rastreo de información fue realizado a través de la literatura y de las noticias del diario “El Tiempo” un periódico nacional, comparándolo con el periódico “El País” un diario con presencia a nivel regional<sup>15</sup> para analizar el impacto de las acciones de las comunidades en la esfera pública, registrada desde la mirada de la prensa.

El segundo nivel de indagación tomará como referente analítico a la sociedad civil en estrecha articulación con la EOP. Se trata de examinar la incidencia de los nuevos actores sociales, estudiando cuáles son sus mecanismos de expresión, participación e influencia que les permitió la defensa de sus reivindicaciones y la propuesta de nuevos derechos en la esfera pública e institucional. Para ubicar estas variables, se recurrirá al estudio de la “política de la influencia” teorizada como referente para dar cuenta de los modos en que la sociedad civil incide con sus demandas en la esfera política de cada nación.

Para rastrear y obtener esta información, en este campo se examinó cuáles fueron las formas de acción, los discursos y las agendas de las organizaciones afrocolombianas, qué

---

<sup>15</sup> El criterio por el cual se toma este periódico para hacer el rastreo de información, es porque a nivel local, este es uno de los diarios más consultados y reconocidos del Valle del Cauca y en donde más se registra las noticias de la región.

estrategias utilizaron para su difusión, cómo se organizaron, se reunieron y se movilizaron para hacer presencia con su acción en la esfera pública. Territorialmente se tendrá en cuenta lugares<sup>16</sup> como Cali y Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) con el proceso de encuentros pre constituyente y Bogotá con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.

Para indagar en los dos niveles se realizaron siete entrevistas<sup>17</sup> a profundidad a los académicos que siguieron de cerca o participaron en el proceso constituyente y a líderes de y cercanos a las comunidades, así como a los militantes de partidos políticos que tuvieron participación en este debate. El fin es reconstruir el proceso en términos históricos e identificar cómo se formó la política de la influencia de las organizaciones afrocolombianas analizando los logros y obstáculos presentes en el proceso constituyente y si las comunidades desarrollaron política identitaria, reformista o del poder en la esfera institucional.

Esta tesis se divide en tres capítulos que dan cuenta de la política de la influencia de las comunidades afrodescendientes como actor de la sociedad civil en unos de los momentos más álgidos de la política colombiana, es decir, el proceso constituyente de 1991. En el primer capítulo se abordará la discusión teórica en torno a la estructura de oportunidades políticas, la sociedad civil, la política de la influencia y la política del poder. En el segundo capítulo se estudiará el proceso constituyente de 1991 como contexto de oportunidad para la participación de las organizaciones afrocolombianas y el tercer capítulo se enfocará en el análisis de la sociedad civil, el movimiento afrocolombiano y la política de la influencia enmarcado en el proceso constituyente de 1991.

---

<sup>16</sup> Estos lugares son los epicentros de la protesta, movilización y paros cívicos desde mediados de la década de 1970, lugares donde se dieron los primeros procesos organizativos afrocolombianos y se logró llegar a acuerdos con el gobierno.

<sup>17</sup> Ver en anexos la respectiva matriz que contiene el listado de entrevistados.

## CAPÍTULO I

### **ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES POLÍTICAS, SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA DE LA INFLUENCIA: APROXIMACIONES TEÓRICAS.**

La estructura de oportunidades políticas (EOP) y la sociedad civil son las dos categorías principales de esta investigación, con ellas se dan fundamento teórico y se abre el debate a la pregunta sobre la influencia de las organizaciones afrocolombianas en el proceso constituyente de 1991.

La forma en cómo se constituyen los espacios políticos en cada régimen de gobierno, tienden a generar cambios en las condiciones de los contextos, esto posibilita la emergencia de estructuras de oportunidades políticas para los actores de la sociedad civil, que colocan nuevos retos al Estado haciendo que los regímenes políticos redefinan y creen mecanismos capaces de responder a las demandas y acciones de estos desafíos. La novedad de este análisis es que en estos escenarios se da la interacción entre actores institucionales y sociales, en donde los actores sociales ejercen su influencia y acción política tanto en espacios de la esfera pública como de la privada, modificando las formas de acción colectiva e incidiendo en las respuestas de lo institucional, que en términos académicos permite adquirir más elementos para ampliar y potencializar el análisis de los movimientos sociales en el nivel teórico.

En esta investigación se encuentran dos tipos de actores con intereses distintos, por un lado los actores institucionales que procuran mantener el control de los aparatos gubernamentales para asegurar estabilidad política, y por el otro los actores sociales que procuran nuevas formas de influenciar en la esfera institucional. Esta convergencia conflictiva de actores con apuestas diferentes obliga a que se combinen enfoques teóricos que hacen posible el análisis de sus formas de interacción y de los mecanismos sociales y estatales que se abren y cierran para dar cabida o impedir la influencia de la sociedad civil.

Este capítulo se enfocará en analizar, por un lado, la noción de ‘estructura de oportunidades políticas’ y, por otro, la categoría de ‘sociedad civil’ como referente teórico

desde donde se busca anclar el estudio de caso sobre los afrocolombianos en la Constituyente de 1991.

### **1.1 La estructura de oportunidad política: antecedentes**

A inicios de los años setenta se abre el debate politológico y sociológico sobre la estructura de oportunidades políticas. Lipsky en 1970 cuestiona a los investigadores de la época, induciéndolos a buscar características que fueran válidas para describir cualquier sistema político en cualquier tiempo, lugar y teniendo en cuenta los grupos específicos presentes en eso contextos. Lipsky planteaba acercarse a la hipótesis de que la presencia o ausencia de protesta dependía de cambios que podían hacer receptivo o vulnerable la institucionalidad ante la demandas de grupos concretos. (McAdam y McCarthy,1999:49)

En esta línea, Peter Eisinger (1973) influenciado por Lipsky realizó una investigación en cuarenta y tres ciudades norteamericanas para explicar las variaciones presentes en la protesta, y de los resultados dedujo que “el suceso de la protesta esta relacionado con las condiciones de la estructura de oportunidad politica que ofrece la ciudad”(McAdam y McCarthy,1999: 50). Así el concepto de estructura de oportunidad política en la década de los ochenta se convirtió en una de las ideas claves para el estudio de los movimientos sociales, que analizó la estructura de la política formal, la responsabilidad y estructuración de los gobiernos en relación a la estabilidad del orden social.

Por lo tanto, la estructura de oportunidad política permite identificar elementos del contexto político que facilitan u obstaculizan caminos para el desarrollo de la acción colectiva, allí también se puede observar las posibles interacciones entre la EOP y la conducta política y también se logra hacer la diferenciación entre lo que es una manifestación y lo que implica la distancia de los actos violentos, como lo indica Eisinger (1973):

Una manifestación es disruptiva y tiene como fin otorgar poder a los que no lo tienen, capacidad de negociación e influencia en procesos políticos, y su característica propia, es que la acción colectiva es realizada por los actores sociales afectados, no a través de representantes, además los actores tienen en mente un cálculo de costo-beneficio sobre sus acciones y es una acción que supone implícitamente la amenaza de violencia (Eisinger, 1973).

Posteriormente autores como Jenkins y Perrow (1977), Tilly (1978), McAdam (1982), Tarrow (1983) indicaron en sus investigaciones que el surgimiento y éxito de los movimientos sociales dependían de las oportunidades generadas que se dan por cambios en el diseño institucional y la apertura ideológica de los actores que este en el poder, que estaban al alcance de los constestatrios (McAdam y McCarthy,1999:50) lo que otorgó mayor reconocimiento a este concepto en el mundo académico.

Es así como este concepto en la década de los noventa fue utilizado por varios autores para explicar el surgimiento de movimientos sociales y el desarrollo de las diversas formas de acción colectiva, ejemplo de ello fueron los estudios de: Tarrow (1989) sobre las protestas en Italia, Smith (1991) con la teología de la liberación, Brockett (1991) respecto a la movilización campesina en America central, Constain (1992) quien trabajó el movimiento feminista norteamericano y Meyrr (1993) acerca de los movimientos antinucleares (McAdam y McCarthy, 1999:50).Fueron estas investigaciones,los referentes para que la presencia de este concepto se convirtiera en enfoque analítico primordial de los movimientos sociales.

Estudios más recientes como los de Sckopol (1979), Arjomand (1989) y Goldstone (1991) indican que el éxito de una revolución depende en gran parte de la crisis de los sistemas que los convierten en débiles y vulnerables ante la organización de los movimientos. Al mismo tiempo esta premisa generó interes en Europa donde los politólogos empezaron a explicar el desarrollo de los movimientos a partir de analizar las diferencias existentes en la estructura de oportunidades políticas. (McAdam y McCarthy, 1999:50)

### **1.1.1. La estructura de oportunidades políticas: conceptualización**

Eisinger (1973) definió a la EOP como: “el grado de probabilidades que los grupos tienen de acceder al poder e influir sobre el sistema político” (McAdam y McCarthy, 1999:50), dicha deficiión tenía el interés de explicar las variaciones en la intensidad de los disturbios tomando como casos empíricos, más de cincuenta ciudades norteamericanas (McAdam y McCarthy, 1999:57)

En sus estudios Tarrow (1994) define la estructura de oportunidades políticas como:

Las dimensiones del entorno político que incentivan a la gente para llevar a cabo acciones colectivas afectando a sus expectativas de éxito o fracaso (Tarrow, 1994:85).

La estructura de oportunidades políticas (EOP) hace referencia a:

Señales continuas aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales (McAdam y McCarthy , 1999: 85).

La EOP examina elementos fundamentales como las estructuras formales, las instituciones y las alianzas generadas entre los grupos, asociaciones y movimientos de la sociedad civil en relación con las demandas frente al sistema político. Este enfoque de análisis se centra en conocer las condiciones políticas que obstaculizan o favorecen la acción colectiva de los movimientos sociales.

Para entender la EOP Tarrow (2004) sugiere estudiar cinco categorías:

- 1) El grado de apertura-cierre de acceso político formal de nuevos actores.
- 2) El grado de estabilidad-inestabilidad de las preferencias políticas.
- 3) La disponibilidad y posición estratégica de los potenciales socios o aliados.
- 4) Los conflictos políticos o la emergencia de divisiones en el seno de las élites
- 5) La disminución de la capacidad del Estado para reprimir la disidencia

La estructura de oportunidades políticas es una categoría de análisis, dinámica que sirve para entender el cuándo y cómo se desencadena la acción colectiva, cómo las condiciones están relacionadas con el impacto, la perdurabilidad y el cómo obtener recursos y crear redes de oposición frente a las limitaciones externas que presentan (Tarrow, 1999:89). Para Tarrow la estructura de oportunidades políticas existe cuando:

[...] la gente participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta de las oportunidades y restricciones políticas y, mediante el uso estratégico de la acción colectiva, genera nuevas oportunidades, que serán aprovechadas por otros en ciclos de protesta cada vez mayores. Cuando su lucha gira en torno a divisiones profundas en el seno de la sociedad, cuando unen a la gente alrededor de símbolos de la herencia cultural y cuando son capaces de levantar o construir redes sociales compactas y estructuras de conexión, en estos casos, en concreto en los movimientos sociales, la acción colectiva produce una interacción con sus oponentes (Tarrow, 2004:116).

En correspondencia al análisis de la EOP, McAdam (1999) retoma los aportes de Gamson y Meyer que observan en la oportunidad un contenido cultural, el cual puede aportar factores y condiciones para el desarrollo de la acción colectiva. Desde esta perspectiva McAdam



introduce la dimensión cultural describiéndola desde cuatro formas de expandir las oportunidades culturales para incrementar la aparición de movimientos sociales, estos elementos son: 1) la existencia y percepción de una contradicción evidente entre un valor culturalmente defendido y las prácticas sociales convencionales; 2) faltas imprevistas; 3) la puesta de manifiesto de la ilegitimidad o vulnerabilidad de un régimen; 4) la disponibilidad de un marco innovador de carácter general con arreglo al cual los disconformes pudieran esquematizar sus protestas y reivindicaciones sobre la posible amenaza de sus aportes (McAdam, McCarthy y N, 1999: 59). En lo que se refiere a esta investigación, se tendrán en cuenta los aportes conceptuales de Eisinger, Tarrow y McAdam, pero el análisis del caso empírico propuesto en esta investigación se hará a la luz de las dimensiones propuestas por Tarrow.

El concepto de estructura de oportunidades políticas tiene una gran ventaja que se asocia a la posibilidad de ser utilizado sin menores restricciones en su amplitud para cualquier tipo de análisis de los movimientos sociales. Sin embargo desde la reflexión de Gamson y Meyer sugieren que se debe tratar este concepto de manera pertinente para no condenarlo a que se convierta en “una esponja que absorbe cualquier aspecto relacionado con el medio en el que surge un movimiento social, instituciones políticas, cultura, crisis de diversos tipos, alianzas o cambios políticos” (McAdam y McCarthy, 1999:50)

La crítica de estos autores es un gran aporte a la teoría porque si el concepto de la EOP se toma para explicar varios aspectos al mismo tiempo, simplemente se comete el error de destruir el potencial explicativo que posee. En esa línea de reflexión McAdam (1999) también pone en juego sus dudas sobre la EOP a través de tres puntos: 1) la delimitación o no de la oportunidad como política 2) las distintas dimensiones de las que se compone una oportunidad política 3) Las variables dependientes a las que también se ha aplicado (McAdam y McCarthy, 1999:51)

La presencia de estas incertidumbres del orden teórico aunque no han sido resueltas, por lo menos en el debate teórico, han permitido complejizar y problematizar el concepto ampliando el campo de interpretación, que pasó de centrarse en aspectos del orden de lo político para también examinar elementos de la dimensión cultural, que sin lugar a duda hacen parte del análisis de la estructura de oportunidades políticas.

Por lo tanto la discusión en torno a la definición y las formas en cómo se ha utilizado el concepto cada vez preocupaban a más autores como: Brockett (1991), Kriesi (1992), Dieter Rucht (1992) y Tarrow (1994) que por la falta de claridad analítica del concepto y apoyándose en las categorías existentes de la EOP llevó a analizar el concepto desde criterios de estructura formal institucional de un sistema político y desde estructuras informales caracterizadas por las relaciones de poder en contextos específicos. (McAdam y McCarthy, 1999:53) aportando más elementos al campo analítico de la EOP.

El resultado es un referente mínimo de claridad teórica sobre la EOP que confluyó en un consenso sobre los siguientes puntos: 1) el grado de apertura relativa del sistema político institucionalizado, 2) la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre elites, que ejercen una gran influencia en el ámbito de lo político, 3) la presencia o ausencia de aliados entre las élites y 4) la capacidad del Estado para hacer uso de la represión (McAdam y McCarthy, 1999:56).

Sin embargo el concepto de EOP ha tenido grandes avances en lo que respecta a líneas de investigación que han abierto múltiples posibilidades de combinar enfoques teóricos, McAdam identifica tres temas que desde su perspectiva amplía la posibilidad de realizar trabajos que introduzcan el análisis de la EOP, entre ellos están: Los ciclos de protesta y oportunidades políticas, las oportunidades políticas y el contexto internacional y la estructura de oportunidad política como variable dependiente. (McAdam y McCarthy, 1999:59)

La estructura de oportunidad política proporciona las categorías para analizar los elementos del sistema político, los cuales explican el contexto en donde se da el surgimiento y desarrollo de la sociedad civil, la participación de los movimientos sociales y la acción colectiva. En este orden de ideas el siguiente concepto en el que se considera necesario profundizar es en el concepto de su sociedad civil para entender las implicaciones y la complejidad de las relaciones entre actores de lo social y actores del orden institucional.

## **1.2 La Sociedad Civil: debate teórico.**

Desde finales de los años setenta surge el debate sociológico y politológico sobre el término de la sociedad civil. Como explica Lechner (1996) el resurgimiento de la sociedad civil en Latinoamérica, se distanció del Estado autoritario, apoyándose en el argumento de

contraposición del poder cívico al militar y denunciando prácticas de Estados que violen derechos humanos, repriman la participación ciudadana y desmantelen las organizaciones sociales. La sociedad civil se presenta con una voz de autodefensa que traza la lucha política e integra la ciudadanía con un lenguaje que no necesariamente tiene que ser político y filial a los sistemas de partidos políticos. (Lechner, 1996:133)

Lechner también analiza la dimensión económica, señalando que la sociedad civil ha permitido hacer lecturas de la nueva estructura social modificada en América Latina con los ajustes de las políticas económicas capitalistas. La intervención de estas políticas agudizó la ruptura de la sociedad, lo cual al mismo tiempo fue medianamente mitigado por mecanismos compensatorios y sistemas de seguridad social. En este sentido el principal aporte de la sociedad civil es no permitir la desintegración del tejido social, al mismo tiempo que alude a restablecer los derechos políticos, sociales y los intereses materiales vulnerados por los procesos de la modernización cuya faceta neoliberal se concreta en América Latina desde los años ochenta (Lechner, 1996:133).

Es así como este autor desde un análisis de la dimensión estatal y de la macro estructura económica trazó el camino hacia un nivel más focal, colocando en debate la composición empírica de la sociedad civil. Amplió de esta forma el debate sobre esta categoría que tiene varios significados y da cuenta de la complejidad de este término.

Desde la perspectiva de Lechner (1996) la sociedad civil: “se caracteriza por ser un proceso de diferenciación funcional, que se sustenta en tendencias de disgregación y fragmentación donde el principio fundamental es la diversidad de valores y creencias, de intereses y motivaciones con la multiplicidad de actores sociales” (Lechner, 1996:133).

Seguido a esta definición, emerge el interés específico de lograr consenso entre los actores, donde las demandas pasen de lo individual a lo colectivo integrando: normas, valores, ideas, aspectos intelectuales y morales. Es así como desde un enfoque gramsciano, emergen definiciones de sociedad civil que -dando forma al giro intelectual que dio la izquierda luego de la crisis del socialismo real- la colocan como espacio de acción política distinguible del Estado. Así, por ejemplo, se puede citar la definición de J.C Portantieiro (1999) que sea la que aquella es:

Una esfera organizada de la vida social en la que los actores colectivos, expresan intereses dentro de un marco legal, efectuando demandas al Estado, definidas como fines públicos. Difiere así de la familia, de la empresa y también de la sociedad *tout court*, en la

medida en que esta es organizada por colectivos auto organizados. También difiere de los partidos políticos con los que se interactúan en el espacio del sistema político, en tanto las organizaciones de la sociedad civil no aspiran a ocupar el poder del estado sin tener cambios en su desempeño influyendo sobre el aparato de gobierno para obtener decisiones que las beneficien (Portantieiro, 1999:32).

Posteriormente el debate se amplía con los aportes de Cohen & Arato (1992) que proponen un modelo normativo de la sociedad civil, con características propias de un campo societal, diferenciado del campo estatal y de la economía. Dicho campo tiene los siguientes componentes: pluralidad asociativa, grupos informales y asociaciones voluntarias cuya autonomía permiten una variedad de formas de vida, la publicidad de un amplio espectro de instituciones de la cultura y la comunicación; la vida privada con un dominio de autodesarrollo y elección moral del individuo con legalidad de las estructuras; la existencia de leyes generales y derechos básicos necesarios para demarcar la pluralidad, la vida privada y la publicidad al menos con relación al Estado y la economía (Cohen y Arato, 2000: 396). Juntas, todas estas estructuras, podrían garantizar mínimamente la existencia institucional de una sociedad civil moderna y diferenciada.

En esta línea la sociedad civil difiere de los partidos políticos, ya que sus intereses están centrados en obtener cambios, desde el espacio público y por fuera de las instituciones, a través de influenciar el nivel institucional, para lograr participar en decisiones que los beneficie.

Desde la perspectiva de Olvera (2003) la sociedad civil tiene su raíz en el estudio de un conjunto de acontecimientos sociales y políticos que integraban los procesos de transición: entre ellos la hipertrofia estatal autoritaria de los países de Europa del este y de América Latina, que creó las condiciones para que la sociedad civil emprendiera sus luchas con la presencia de nuevos actores que reclamaban respuesta a diversas demandas tanto de reconocimiento como de participación en la esfera pública (Olvera, 2003:31).

Aspectos como la falta de voluntad colectiva y el abandono del compromiso cívico de las democracias, inclusive de las más consolidadas, (Olvera, 2003:32) configuraron a la sociedad civil como uno de los ejes centrales de las actuales teorías de la democracia y los movimientos sociales, convirtiéndose en una estructura para combatir Estados autoritarios y enfrentar las múltiples estrategias para no desligar la política de la vida social. (Sauca y Wences, citado en Lechner, 1996: 9)

Investigaciones más recientes como las desarrolladas por Olvera (2003), Panfichi y Dagnino (2006) aportan un elemento fundamental, muestran que la sociedad civil está formada por una gran heterogeneidad de actores civiles, con diversos formatos institucionales, y una gran pluralidad de prácticas y proyectos políticos, algunos no-civiles o poco democratizantes, (Dagnino y Panfichi, 2006:26). Inclusive, los autores señalan que “existe la presencia de actores sociales opuestos entre sí que operan de diferentes formas y en diferentes lugares, construyendo su propios canales de articulación con el sistema político y económico, lo que indica que la sociedad civil está atravesada por una multiplicidad de conflictos que la convierten en una –arena de arenas-”. (Olvera, 2003: 28; citado en Dagnino y Panfichi, 2006:26)

Dentro de esta definición, Dagnino y Panfichi (2006) sostienen que hay que colocar atención a la heterogeneidad y su papel en la sociedad civil, porque es la base de la diferenciación interna de los actores sociales existentes (incluyendo agentes conservadores) que desarrollan diversos formatos institucionales como: sindicatos, asociaciones, redes, coaliciones, foros. Al mismo tiempo reconoce qué: “las formas de acción colectiva, la teleología de la acción, la construcción identitaria suponen una gran pluralidad de proyectos políticos, incluso que pueden llegar a ser no-civiles o poco democratizantes” (Dagnino y Panfichi, 2006:31)

La heterogeneidad es un factor inherente a la particularidad de los procesos históricos de la sociedad civil en América Latina, porque hace parte o es la base de la deliberación, de la organización, de la orientación de las luchas, de los procesos de asociación, alianzas y cooperación entre los sectores sociales, de la construcción de las agendas políticas (que pueden ser construidas tanto por la sociedad civil como incentivadas a través de políticas estatales) de la acción colectiva con propósitos de influir para obtener recursos, participar y tener poder de la esfera de la política institucional. (Dagnino y Panfichi, 2006:31).

Es así como a partir de los debates sobre la definición y la importancia de la heterogeneidad de la sociedad civil, Ramírez (2009) presenta un concepto, que busca articular y problematizar, la mayoría de elementos que integran la sociedad civil para ampliar y hacer más riguroso el análisis en el campo teórico, dicha definición es:

Una esfera social distinta del Estado y del mercado, en la que ciudadanos, asociaciones y movimientos sociales problematizan nuevas

cuestiones, disputan sus derechos, buscan ampliar la participación y la incidencia públicas en el proceso político, desafiando así los límites de la política institucional (Arditi, 2004; Cohen; Arato, 2000; Offe, 1992)... dicha esfera reemerge en la región [...] a inicios de la década de 1980, en el marco de la disputa por la reconstrucción democrática en diversos países del continente (Avritzer, 2002) y se trata de una construcción relativamente reciente (Ramírez, 2009:48).

### **1.2.1 La sociedad civil: argumentos para afinar su conceptualización.**

La teoría de la sociedad civil es fundamental para entender la lógica de los movimientos sociales contemporáneos, identificando qué es lo que está en juego y cuál es el potencial que desarrollan para poder lograr alcanzar sus objetivos. En el ámbito contemporáneo, “los nuevos movimientos sociales dependen de las formas autónomas del discurso, de la asociación y de la solidaridad, es decir de elementos propios de la sociedad civil” (Cohen y Arato, 2001:8) que la diferencian de la economía y de la sociedad burguesa.

La sociedad civil moderna en sí, “se crea por medio de formas de auto constitución y auto comunicación. Se institucionaliza y se generaliza mediante las leyes especialmente por los derechos objetivos, que estabilizan la diferenciación social” (Cohen y Arato, 2000:9). En este marco, una definición operativa de la sociedad es: “una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública” (Cohen y Arato, 2000:8)

Todo ello colocó en el plano de la reflexión sociológica la necesidad de cuestionar si la sociedad civil se puede identificar con todo su potencial por fuera del Estado administrativo y los procesos económicos. Este debate conllevó a establecer tres criterios mínimos que permiten entender los alcances y límites de la sociedad civil con mayor especificidad, 1) es necesario distinguir la sociedad civil de la sociedad política–partidos, organizaciones políticas y públicos políticos- y de la sociedad económica; 2) la sociedad política y económica surge de la sociedad civil y comparten algunos aspectos como: formas de organización, comunicación, institucionalización mediante la continuación del tejido de los derechos que aseguran la sociedad civil y, 3) el papel político de la sociedad civil no está relacionado con el control de o conquista del poder sino con la generación de influencia mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión no

restringida en la esfera pública cultural, este papel político es inevitable, difuso e ineficaz (Cohen y Arato, 2000:9)

En correspondencia con estos criterios, los autores plantean que la sociedad política cumple el papel de mediador entre la sociedad civil, la economía y el Estado, dicho papel se logra a través de la legalización de los sindicatos, las negociaciones colectivas y del ejercicio de co-determinación entre movimientos, organizaciones y actores políticos. Es decir, “la sociedad política busca establecer comunicación de forma directa con sectores de la sociedad civil y el Estado o la economía” (Cohen y Arato, 2000: 9)

En cambio la sociedad civil, se refiere a las estructuras de socialización, asociación y formas de comunicación organizada del mundo de la vida, que han sido institucionalizadas o se encuentran en proceso de serlo (Cohen y Arato, 2000:10). Además la sociedad civil es un recurso simbólico de movimientos sociales que dentro de los procesos democratizantes se fue configurando como uno de los ejes actuales de las teorías de la democracia y como estructura para combatir regímenes autoritarios (Sauca y Wences, 2007: 9)

Existe una amplia gama de definiciones con diferentes formas y caminos que han trazado estos autores a través de sus debates sobre la sociedad civil. Para profundizar en la comprensión de esta categoría de análisis, es fundamental ahondar en la configuración de la sociedad civil, ya no en términos de actores, formas organizativas o intereses, sino en el cómo se estudian y se entienden los mecanismos y las estrategias que crean e implementan los movimientos sociales –que están en el centro de la agenda académica sobre la sociedad civil- a la hora de organizarse, avanzar, tomar partido y control en los procesos democratizantes de la sociedad. Ello supone centrarse en la forma en cómo se hace y se orienta la política por parte de la sociedad civil, influenciando la esfera de la política institucional.

### **1.3. La política de la Influencia.**

Desde la perspectiva de Cohen & Arato (2000) la influencia es un recurso que utilizan los movimientos sociales en las sociedades modernas, para reclamar y posicionar derechos en la esfera pública y las instituciones democráticas representativas, siendo estos: “ lugares de apertura a procesos discursivos que informan, tematizan y alteran normas sociales. El discurso público puede contribuir a obtener recursos como dinero y/o poder, pero también

llegar a restringirlos en el mundo de la vida, asegurando la autonomía en las instituciones y en las relaciones sociales de la sociedad civil” (Cohen y Arato, 2000: 567)

El análisis de la influencia supone observar las posibilidades estratégicas para la lucha y la conquista de los intereses de los movimientos sociales. Dicho nivel de análisis muestra que: “la acción colectiva contemporánea es más que luchas de poder directo entre los contendientes y las autoridades, porque esencialmente se fundamenta en una estructura descentralizada, pública y pluralista de la sociedad civil que orienta sus intereses a influir en los sectores de la opinión pública” (Cohen y Arato, 2000:569)

Los actores de la sociedad civil realizan esfuerzos por influir a los actores de la sociedad política, logrando alianzas, pactos, acuerdos que permitan la participación en decisiones y reformas del sistema político donde se incluya la presencia de las nuevas identidades colectivas (Cohen y Arato, 2000: 568)

### **1.3.1 Origen del debate de la Política de la Influencia.**

Las investigaciones sociológicas en torno a la política de la influencia, inician a comienzos de los años ochenta con los debates abordados por Parsons (1967), Tilly (1982), Elster (1986) y en estudios más recientes por Habermas (1991) Cohen y Arato (2000).

Esta categoría es producto del riguroso análisis sobre “el surgimiento de los movimientos sociales a gran escala en Estados Unidos y Europa en las décadas de 1960 y 1970, dichos movimientos pusieron en cuestión la versión de la sociedad de masas del paradigma de la conducta colectiva” (Cohen y Arato, 2001:559) y al mismo tiempo dicho cuestionamiento motivó a que los actores de la nueva izquierda (defensores de derechos civiles, feministas y ecologistas), empezaran a considerar que requerían un nuevo enfoque teórico, porque sus demandas tenían metas concretas, intereses y valores articulados a cálculos racionales. (Cohen y Arato, 2001:559)

Posteriormente, Cohen y Arato (2000) realizan el esfuerzo académico de ir más allá de la crítica del marxismo y hacer la crítica tanto al liberalismo como al republicanismo clásico. Para desarrollar sus estudios los autores partieron de cuestionarse por: ¿Qué movilizó los movimientos sociales de las décadas del 60 y 70?, pregunta que conllevó a los autores a enfocarse en el análisis de “las organizaciones sociales de movimientos profesionales” (OMP), es decir, estudiar el cómo estas organizaciones desempeñaban un papel específico en los procesos que calculaban y dirigían la acción colectiva.



De estos análisis se identificó que las OMP “cumplían la función de ampliar la cobertura de los medios de comunicación y la simpatía pública con el fin de influenciar las elites, de esta forma obtuvieron recursos y defensa de sus derechos e intereses”. Al mismo tiempo permitió ver la capacidad de profesionalización que pueden llegar a tener los movimientos sociales (es decir los niveles de burocratización que pueden alcanzar), “mientras se calcula asegurar la representación de los no representados por medio de grupos de interés viables” (Cohen y Arato, 2000: 568)

El aporte de estos estudios permitió ver la capacidad de organización de los nuevos movimientos sociales y su potencial de defensa y acción, es decir, estas poblaciones afectadas se enfrentaron y dieron respuesta a desafíos como la creación de: “redes autónomas, asociaciones locales y de grupos de base que produjeron la acción colectiva. Se organizaron en -OMS clásicas- que son asociaciones dependientes del trabajo voluntario de los beneficiarios directos que diseñaron nuevas tácticas, para influir más allá de la opinión pública, para convencer a los otros de su justa causa” (Cohen y Arato, 2000:570) La innovación fue utilizar, ampliar y complejizar el discurso en los espacios públicos, es decir, influenciar con diferentes formas de lucha la esfera pública, para obtener reconocimiento como nuevos movimientos sociales (Cohen y Arato, 2000:570)

Desde esta perspectiva, la influencia es un recurso que utilizan los movimientos sociales en las sociedades modernas, para reclamar y posicionar derechos en la esfera pública y las instituciones democráticas representativas, siendo estos, lugares de apertura a procesos discursivos que informan, tematizan y alteran normas sociales. El discurso público puede contribuir a obtener recursos como dinero y/o poder, pero también puede cumplir con la función de llegar a restringirlos en el mundo de la vida, para asegurar la autonomía en las instituciones y en las relaciones sociales de la sociedad civil (Cohen y Arato, 2000: 567).

Sin embargo el análisis de la influencia como una posibilidad de estrategia política para la lucha y la conquista de los intereses de los movimientos sociales, “muestra que la acción colectiva contemporánea es más que luchas de poder directo entre los contendientes y las autoridades, porque esencialmente se fundamenta en una estructura descentralizada, pública y pluralista de la sociedad civil que orienta sus intereses a influir en los sectores de la opinión pública” (Cohen y Arato, 2000:569). Al tiempo que realiza esfuerzos por influir

a los actores de la sociedad política, logrando alianzas, pactos, acuerdos que permitan la participación en decisiones y reformas del sistema político donde se incluya la presencia de las nuevas identidades colectivas. (Cohen y Arato; 2000: 568)

En este sentido Cohen y Arato (2000) sostienen que la política de la influencia es:

El recurso por excelencia de los que carecen relativamente de poder, que se encuentran fuera de la política y los que no tienen fuerza económica; está dirigida a cambiar el universo del discurso político para que genere espacios para nuevas interpretaciones de necesidades, para nuevas identidades y para nuevas normas (Cohen y Arato, 2000:570).

Esta definición busca influir la opinión pública e indirectamente a las élites para obtener su apoyo, pero al mismo tiempo para convencer a otros sectores sociales de la justicia de sus causas. (Cohen y Arato, 2000:588).

Entre las definiciones que explican la influencia en el campo político se encuentra la Habermasiana que desde la perspectiva de la comunicación la analiza como:

Una forma simbólicamente generalizada de comunicación que gobierna las interacciones en virtud de la convicción razonada o de la pura sugestión retórica, esta influencia se nutre del entendimiento y se basa en el anticipo de la confianza que se entiende como las posibilidades de convicción (Habermas,1998: citado en Cohen y Arato, 2000:443).

Desde esta perspectiva el análisis de la dimensión del espacio público se centra en lo que se “argumenta” y se “critica” para ampliar el concepto y la práctica de la política. En este sentido Habermas plantea que: “Para entender lo que es la política de la influencia, es fundamental analizar la argumentación y la estructura de los debates, reconocer las nuevas demandas y desarrollar las críticas como campo de la acción política” (Habermas, 1998: citado. en Cohen y Arato, 2000:419)

Frente a esta definición, la crítica de Avritzer (2002) sostiene que Habermas al considerar que el espacio público es defensivo y sirve como muro de contención a los abusos del poder, limita la multiplicidad del análisis del espacio (Avritzer, 2002; citado en Dagnino,2006:27) Pero este análisis puede ampliarse a partir de concebir el espacio público como un espacio que tiene potencial para incidir en el poder político con capacidad ofensiva a través del “mecanismo indirecto de la influencia”, que al ser pensado como un escenario de confrontación de las acciones de los movimientos sociales con el poder legislativo, puede ser una estrategia apropiada para obtener resultados como las demandas que se transforman en leyes o reformas (Dagnino,2006:31)

El actual contexto de democratización de la sociedad aporta las condiciones para que la influencia de la política tenga un papel preponderante frente a la “colonización económica”, porque como recurso político de los nuevos movimientos sociales, permite identificar y enfrentar a partir de sensores como:” las reformas en las instituciones políticas y económicas a través de políticas de inclusión, la posibilidad de escuchar y abrir el espacio a las demandas y discursos de las identidades para crear normas igualitarias y articuladas en el terreno de la sociedad civil” (Cohen y Arato, 2000. 588)

Frente a este planteamiento, la discusión de Habermas cuestiona que “la sociedad civil generalmente tiene instituciones autoritarias, reforzadas por el control desigual del dinero y de poder, basadas en lógicas de colonización y modernización tanto de los actores como del conjunto de instituciones de la sociedad civil contemporánea” (Habermas, 1998: citado en Cohen y Arato, 2000: 588)

Pero Habermas desde su perspectiva esboza que dicho problema se puede transformar con actores e instituciones que dirijan la sociedad con políticas de inclusión en la sociedad política. De esta forma la disputa por lo identitario pueden lograr beneficios, mediante la política de la influencia, la cual está orientada a cambiar el universo del discurso político a través de integrar y reconocer nuevas identidades y normas en la esfera de lo público y de la política institucional. (Habermas, 1998; citado en Cohen y Arato, 2000: 588)

Olvera (2003) con estudios más recientes, señalan que la política de la influencia es la política de la sociedad civil, definiéndola como:

La presión indirecta sobre el sistema político que se ejerce apelando a la crítica, a la movilización y al convencimiento [...] Esta forma de acción política es limitada y poco eficiente, pues por definición construye escenarios múltiples, tantos como diversos sean los actores, temas e intereses en juego. La diversidad, pluralidad y heterogeneidad política, cultural y simbólica de la sociedad civil que coloca el problema de la representación en una nueva óptica de debate (Olvera, 2003:31).

Desde esta perspectiva “la política de la influencia tiene como objetivo el fortalecimiento de la sociedad civil basado en el desarrollo de las asociaciones voluntarias que forman: tejido social y material, nuevas formas de solidaridad y la existencia de una esfera pública en la que los intereses colectivos pueden discutirse con presencia de medios institucionales

para establecer un puente de comunicación entre la sociedad civil, la esfera pública, el ámbito de las instancias políticas representativas y el aparato del Estado” (Olvera, 2003:25) Es aquí donde los movimientos sociales se convierten en complementos indispensables en la sociedad civil.

Olvera (2003) con esta definición da un importante aporte al debate teórico sobre la política de la influencia, pues al estudiar esta definición integra el análisis de la esfera pública en donde los intereses, el debate y la acción se trasladan a la dimensión de lo colectivo, articulando más elementos que fortalecen los procesos asociativos y que conecta la diversidad de canales de comunicación con los que puede llegar a contar un movimiento social para elevar sus demandas.

Es así como la esfera pública tiene un papel preponderante porque es el escenario en donde entra en juego la comunicación como posibilidad, reflexión, medio, estrategia y principio fundamental para interactuar, organizar, cuestionar, influenciar, presionar y desestabilizar los escenarios de la política institucional. Por lo anterior, para efectos de esta investigación se hace necesario profundizar en el concepto de esfera pública para comprender con mayor amplitud el concepto de la política de la influencia.

Esta noción de la influencia política se fundamenta en la composición de una sociedad civil integrada por una multiplicidad de criterios y formas que reclaman la representación de los intereses económicos y políticos de sus miembros, analizando la sociedad civil como irrepresentable, porque tiene un amplio campo organizativo y un alto contenido simbólico, que dependiendo de la coyuntura pueden llegar a reclamar representación moral colectiva.

Así, la pluralidad de asociaciones con intereses privados, otras con fines públicos que buscan influir en la opinión y la política pública con criterios de eficacia y justicia haciendo transversal los derechos de muchos sectores sociales, ejemplo de ello son: grupos de derechos humanos, movimientos sociales pro-democráticos que demandan la aplicación de los derechos de la ciudadanía en general sobrepasando los interés individuales por los motivos de moralidad pública.

### **1.3.2 Asociacionismo civil: un componente fundamental en la política de la influencia.**

Avritzer (2001) en sus estudios indica que la sociedad civil tiene el fenómeno de asociacionismo civil, que la define como: “un grupo de individuos que voluntariamente unen sus acciones con un propósito común en un marco de pluralidad y respeto mutuo”. (Olvera, 2003:33)

Esta definición surgió de tres componentes que Olvera (2003) analizó en sus estudios: 1) el aumento y la regularidad de constitución de asociaciones civiles en varios países de América Latina, 2) la ruptura en los años sesenta con el modelo homogeneizador donde el actor solo era el movimiento obrero, pasando hacia la pluralización de la acción social con nuevos actores y temas como: género, raza, ecologistas y derechos humanos, y 3) el cambio en la percepción de los actores en cuanto a sus propias acciones, que ya no buscaba incorporarse en el Estado, ni en su inserción acrítica a las masas, sino con intereses enfocados en el desarrollo de trabajos conjuntos e integrados para lograr intereses específicos que contribuyan a la profundización de la democracia (Avritzer, 2001:308).

En correspondencia la noción de política de la influencia se fundamenta con la composición de una sociedad civil integrada por una multiplicidad de criterios y formas que reclaman la representación de los intereses económicos, políticos y culturales de los actores sociales, definiendo la sociedad civil como: simbólica, diversa e irrepresentable. Esta pluralidad de asociaciones puede tener intereses privados o fines públicos que buscan influir la opinión y la política pública mediante criterios de eficacia y justicia, ejemplo de ello son: los grupos de derechos humanos, los movimientos sociales pro-democráticos que demandan la aplicación de los derechos de la ciudadanía.

En esta línea de reflexión, uno de los efectos de la influencia política de los movimientos sociales, está enfocado a la búsqueda o conquista de espacios de participación dentro de la esfera institucional. Se hace alusión a lo que en el nivel teórico se denomina la política del poder que se apoya en una amplia gama de mecanismos formales o institucionales en donde juega un papel preponderante la representación para obtener legitimidad en diversos escenarios políticos. Sobre esta categoría más adelante se ampliará su definición para hacer el análisis con relación al caso empírico objeto de esta investigación.

#### **1.4 La política de la influencia: su relación con la sociedad civil.**

La sociedad civil es producto de la construcción social por parte de los ciudadanos, “es el resultado de largos ciclos de luchas sociales y de procesos de institucionalización de un Estado de derecho, su accionar se fundamenta en la continua renovación y la incesante lucha contra el autoritarismo, la ilegalidad y la antidemocracia” (Olvera,2003:39). Sin embargo la mayor dificultad y al mismo tiempo lo que la caracteriza, es que sus ganancias no son permanentes pero se pueden reafirmar y fortalecer a partir de las interacciones y la practica social.

Desde la perspectiva de Cohen y Arato (2001), para entender el concepto de la sociedad civil retomamos a Habermas (1991), quien plantea que para influenciar escenarios institucionales, es necesario analizar la noción “mundo de la vida”, es decir, “tanto las instituciones y las formas asociativas requieren de la acción comunicativa para su reproducción, estas instituciones hacen referencia a la estructura de los derechos, la operación del sistema judicial y a los aparatos que garantizan la reproducción sociocultural de la sociedad”. A la vez, el mundo de la vida es el fundamento de la sociedad civil. (Olvera, 2003:25)

Estos autores señalan que los movimientos e instituciones de la sociedad civil pueden localizarse tanto en la esfera privada como en la pública y estar vinculados al mercado y al Estado como punto de contacto entre los subsistemas y la sociedad misma. De esta forma los autores ubican la unidad de los movimientos propios de la sociedad civil, en forma de organización que interactúa a través de la comunicación.

Desde esta perspectiva la sociedad civil se puede analizar desde dos vías: “por un lado el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, político y sociales de los ciudadanos, que propician libre asociación para defenderse de la acción estratégica del poder, del mercado y al mismo tiempo viabilizan la intervención ciudadana en el sistema”. Por otra parte, está “el conjunto de movimientos sociales que plantean nuevos principios, valores, demandas sociales y aplicación efectiva de los derechos otorgados para lograr que la sociedad tengan los derechos que corresponden al Estado contemporáneo” (Olvera, 2003:25)

### **1.5 Esfera pública: una aproximación al debate teórico.**

Para analizar la importancia de la esfera pública, los estudios de Avritzer (2001) señalan que se debe empezar por entender que el asociacionismo civil es parte fundamental de la construcción de este concepto, el cual para el caso de América Latina se abordó con el análisis de dos rupturas simultáneas en el reciente proceso de re-democratización. Dichas rupturas tienen un particular efecto, la modificación en la forma en cómo se vuelve sobre la ocupación el espacio y la cultura.

La primera ruptura se da con el modelo homogeneizador de la acción colectiva, a través del aumento del ritmo, y la existencia de un amplio número de diversas formas de asociaciones, y la segunda se expresa con la continuidad de las acciones políticas en el nivel social de la política en América Latina. Al mismo tiempo la falta de visibilidad de la relación entre el Estado-grupos económicos y sociedad civil, donde se impusieron los primeros con su agenda sobre los segundos creando desequilibrios societarios al dar privilegios a grupos económicos con fuerte influencia a través del mercado que dejó ver la incapacidad del Estado y de la sociedad política para renovar la organización de políticas sociales.

Frente a esta situación las asociaciones civiles se defendieron desde dos lugares:1) la visibilización de los mecanismos privados de poder en el nivel de la esfera pública, y 2) la organización junto con el Estado o con organizaciones internacionales de financiamiento para generar modelos de políticas más eficaces (Avritzer, 2001:330)

La sociedad civil es la emergencia de organizaciones civiles sociales que comenzaron a trabajar desde dos alternativas para enfrentar la incapacidad de plantear políticas públicas, el reconocimiento y el equilibrio social. Este desafío dio como resultado para la teoría un potencial análisis sobre esta situación con dos tipos de función sobre el asunto de la representación:1) la representación cuestionada y 2) la no representación de etiqueta que esta distanciada de las demandas de los actores sociales, lo que puede llevar a los movimientos sociales tengan el problema de vacío institucional o de déficit de reconocimiento legal.

Lo anterior puede acarrear dos problemas: 1) la organización de sus miembros está más cercana a la opinión pública participando más en lógica de control de la sociedad política y no de sociedad civil y a la vez puede que su legitimidad solo se genere en torno a

la proximidad de creencias, valores u opiniones, 2) el desequilibrio societal no posibilita seguimientos, que garanticen de manera institucional o legal una forma de continuidad y de publicidad de estas formas de acción. (Olvera,2001:330)

Estudios más recientes como los de Ramírez (2008) señalan que el análisis politológico y sociológico del espacio público parte del estudio de contextos en donde emergieron partidos y coaliciones de la nueva izquierda que abrieron espacios con nuevas experiencias de participación a finales de 1980. Estas formas de participación a través de varios mecanismos y dispositivos participativos fueron ganando presencia e influencia dando vida a las agendas sectoriales a nivel nacional y local, las cuales en muchos casos lograron materializar procesos constituyentes que ampliaron la participación social y el proceso de democratización (Ramírez,2008:62).

Desde esta perspectiva analítica Ramírez (2008) explica que estos procesos participativos en el marco de la democratización se definen con la emergencia de nuevos espacios públicos que dan mayor legitimidad a la movilización como proceso clave para la democratización, argumentando que el espacio público desde la perspectiva Habermasiana (1996,1998) no solo actúa como variable de problematización, sino que también otorga legitimidad a los procesos democráticos, es decir, la legitimidad de las normas es resultado del desarrollo de ejercicios de deliberación de la pluralidad política ciudadana (Ramírez, 2008:63)

Por lo tanto este autor advierte en la necesidad de analizar los nuevos espacios públicos utilizados por los movimientos sociales para llevar a cabo sus acciones. De esta forma el espacio público desde la perspectiva de Habermas (1996,1998) se examina y reconoce diversas experiencias de participación, que en el actual contexto se reflejan en: debates abiertos, foros, reuniones de las organizaciones, cabildos, veedurías, foros, mesas de discusión, comisiones, consejos, consultas, planes de participación que a la luz de este planteamiento teórico se ven como los nuevos lugares de encuentro de debate entre actores de la sociedad civil, la sociedad política y sobre todo frente al Estado (Ramírez, 2008:62)

De ahí que los espacios públicos les es difícil operar si un eje central que dinamice la deliberación y posibiliten la construcción del sistema político y por ende el de la democracia, dicho eje es conocido como la reflexividad, proceso en el que se da y se debate las opiniones y juicios del conjunto de la sociedad (Ramírez, 2008:63)



Desde la teoría del espacio público, esta forma de ocupación por parte de los nuevos actores sociales, generó una ruptura con las lógicas de organización jerárquicas, utilizó herramientas jurídicas para denunciar la concentración de decisiones y bienes públicos en pocas manos, que obstaculizó por mucho tiempo la emergencia de nuevas identidades políticas. Pero proporcionalmente la ventaja que agregó para estas luchas sociales fue el reconocimiento de espacios públicos no manejados por el Estado, que se consolidaban en medio de constantes tensiones por innovar la cultura política y donde se encontraron diversas formas de interacción y cooperación que buscaban legitimidad social (Ramírez, 2008:63)

Este aspecto es el asociacionismo civil el cual le da un mayor peso teórico a la política de la influencia analizando de manera más profundidad las posibles formas y tipos de organización de los grupos y movimientos a la hora de poner en juego la política de la influencia frente a la sociedad política y el Estado.

### **1.6 La política del poder**

Desde la perspectiva de Zamosc (2005) la política del poder busca conquistar posiciones dentro del Estado como medio para participar directamente en las decisiones del Gobierno (Zamosc, 2005:214). Esta categoría analítica combina las diferentes formas de lucha, recurre a la protesta, la gestión institucional, estrategias pacíficas como: la creación de consejos, agencias de control o la participación electoral para conseguir legitimidad social y representación en diferentes estancias políticas (Zamosc, 2005:214)

Este nivel implica que los movimientos deben tener un manejo táctico de las movilizaciones, porque son un canal importante para lograr legalizaciones, acuerdos, agendas, creación de fondos, aumento de presupuesto y asignación de recursos; además van haciendo que la posición de liderazgo tengan ascenso en las luchas y capacidad de negociación con el gobierno. (Zamosc, 2005:212)

### **1.7 A modo de conclusión.**

La definición de estructura de oportunidades políticas acuñada por Tarrow (1989) dentro del análisis politológico y sociológico de los movimientos sociales, es una de las definiciones que más se ha utilizado como el principal referente para el análisis de casos de estudio empírico.

Esta definición de EOP evolucionó a tal punto de pasar de ser una noción que se definía como el análisis de las condiciones del contexto a ubicar unas variables propias que las constituyen: la apertura a la participación política, la división en las élites, la inestabilidad de las élites, las alineaciones de las fuerzas políticas y la represión, son las categorías que le aportaron solidez a este concepto que aunque no deja de tener sus limitaciones y críticas, sin embargo este es de gran utilidad para la teoría de los movimientos sociales y para el análisis de los casos empíricos.

En cuanto a la sociedad civil, el concepto acuñado por Cohen y Arato (1992) permite examinar la sociedad civil a la luz de las categorías de asociatividad, pluralidad, su relación con la esfera pública y la política institucional. Categorías que permiten examinar la sociedad civil diferenciándola del Estado y del mercado, profundizando en la particularidad de su naturaleza, el potencial organizativo y la acción. Al mismo tiempo brinda la posibilidad de problematizar la participación de los sectores sociales que componen la sociedad civil con acciones de cara al Estado.

Finalmente la categoría de la política de la influencia analizada por Cohen y Arato (1992) proporciona para el estudio de los movimientos sociales una categoría de análisis que examina tanto las estrategias, la organización, los mecanismos, discursos y acciones por las cuales se configuran las demandas específicas de los movimientos sociales y el cómo se llevan a la esfera pública para convertirse en una demanda colectiva con la capacidad de incidir en la toma de decisiones de la política institucional.

En Colombia estas categorías teóricas han sido poco utilizadas para el análisis de los movimientos sociales, tan solo en Ecuador León Zamosc (2005) realizó un riguroso estudio sobre el Movimiento Indígena Ecuatoriano<sup>18</sup>. En este estudio el autor muestra un complejo análisis en donde convergen la EOP, la sociedad civil y la política de la influencia para llegar a identificar como este movimiento logra con su proceso de movilización y lucha política llegar a la política del poder. La convergencia de estas tres categorías analíticas amplían las formas en cómo se puede combinar distintos enfoque teóricos para el estudio de los nexos entre la EOP, la participación pública e influencia política.

---

<sup>18</sup> El Movimiento Indígena Ecuatoriano: de la política de la influencia a la política del poder. En La lucha por los derechos en América Latina Quito: Editorial Abya - Yala.pg: 330

## **CAPÍTULO II**

### **EL PROCESO CONSTITUYENTE DE 1991 COMO CONTEXTO DE OPORTUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS.**

En este capítulo se analiza la estructura de oportunidades políticas para el caso empírico propuesto en esta investigación. Se examina cómo se desarrolló el proceso constituyente de 1991 en el contexto de oportunidades políticas donde se da la ampliación y potenciación del proceso organizativo y participativo de las organizaciones afrodescendientes en la esfera pública y su inserción en la política institucional.

En correspondencia a lo anterior se estudia cómo a finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, el proceso constituyente dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia, el cual terminó en una nueva constitución política como resultado del estallido de la política y la crisis estatal que enfrentaba el país. En correspondencia se estudia el contexto y la presencia de diversos actores sociales que se movilaron con demandas específicas como: el derecho al territorio, la descentralización administrativa, el cambio de modelo económico, el conflicto armado, los ataques del narcotráfico, el exterminio a la oposición política y la violación de los derechos humanos.

Estos actores se manifestaron utilizando múltiples formas para lograr ser escuchados por el gobierno y por la sociedad a través de acciones de protesta y movilización para buscar canales de interlocución con el gobierno, buscando escenarios de participación en la esfera de la política institucional. El periodo delimitado para este análisis de la EOP son los años de 1990 - 1991, -antes y durante la Asamblea- el cual fue seleccionado con el criterio de reconstruir y profundizar el cómo las comunidades afrodescendientes identificaron la estructura de oportunidades políticas y el cómo se originaron los espacios pre-constituyentes y la toma de decisiones en torno a la participación de estas comunidades en la ANC.

Sin embargo para entender cómo se da la EOP es necesario recurrir a los procesos históricos y entender cómo emerge la crisis estatal, la crisis del régimen político y la relación entre actores y violencia, los cuales fueron factores claves para que los movimientos y actores sociales identificaran una coyuntura propicia para su irrupción.

Para analizar la estructura de oportunidades políticas en esta investigación, se dará cuenta de un nivel más histórico desde una perspectiva de EOP a largo plazo, considerando la incidencia del estallido de la política y la crisis orgánica del Estado Colombiano que inicia desde la mitad de la década de los ochenta, la crisis del régimen político y las relaciones con los actores sociales y la violencia. A la luz de esta se presenta la EOP con una perspectiva de corto plazo para dar cuenta de la constituyente y la apertura de oportunidades políticas, las divisiones de las élites, los alineamientos inestables, los aliados influyentes y la represión en el marco del proceso constituyente.

## **2.1 El estallido de la política y la crisis orgánica del Estado Colombiano en la década de los 80.**

La crisis estatal que enfrentaron los gobiernos<sup>19</sup> en Colombia la década de los 80 es producto de la emergencia de nuevos actores sociales en el plano político, de la falta de un gobierno con capacidad de tener el monopolio de la violencia sobre el conjunto del territorio frente a los diferentes actores alzados en armas<sup>20</sup> y el cierre de la participación de la sociedad civil en escenarios políticos.

Esta crisis tiene sus antecedentes en el Frente Nacional (1958-1974) donde liberales y conservadores, acordaron entre sí, su permanencia en el poder a través de la alternancia presidencial cada cuatro años durante un periodo de dieciséis años.<sup>21</sup> En lo social este pacto político de las élites contribuyó a frenar la violencia partidista que venía de la década de los 30 pero en las décadas 50, 60 y 70 este pacto de poder cerró toda posibilidad de participación a otras fuerzas sociales, negando de esta forma el desarrollo de procesos democráticos. Desde la perspectiva económica, el Frente Nacional manejó un discurso desarrollista, con ideas de industrialización, de sustituciones de importaciones y visión de apertura a la economía global, dejando de lado la inversión social tanto en aéreas urbanas como en las rurales, ejemplo de ello fue dejar a un lado la reforma agraria (Ortiz, 2010: 284)

---

<sup>19</sup> Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), Virgilio Barco Vargas (1986-1990)

<sup>20</sup> Organizaciones guerrilleras como las FARC, ELN, EPL y M-19

<sup>21</sup> El primer presidente fue Alberto Lleras Camargo del partido liberal, luego el conservador Guillermo León Valencia, posteriormente alturno Carlos Lleras Restrepo del partido liberal y finalmente el Conservador Misael Pastrana Borrero.

El cierre democrático, la perspectiva económica del Frente Nacional y la influencia de ideologías de la izquierda internacional, fueron factores claves para la emergencia de una izquierda con ideas de lucha armada que se distanciaban del Partido Comunista Colombiano<sup>22</sup>. Cerca de estas organizaciones guerrilleras se crearon partidos de izquierda como la Unión Patriótica que inicialmente respaldaban la lucha armada pero al pensar en la posibilidad de participación política en la esfera institucional, dejaron de lado la idea de las armas para entrar en el juego electoral<sup>23</sup> (Ortiz, 2010:285)

En correspondencia, Ortiz (2010) explica que en la década de los 70 se da la recomposición de la izquierda a partir de una fuerte crítica a la lucha armada, cuestionándose a sí misma como algo no pertinente para la apertura de procesos democratizantes. En este escenario aparece una guerrilla urbana conocida como el movimiento 19 de Abril (M-19) que se declaraba defensor de las masas anapistas<sup>24</sup> e impugna el fraude electoral de las presidenciales de 1970 arrebatadas por Misael Pastrana Borrero.<sup>25</sup> En este contexto los movimientos sociales se reorganizaron generando varias divisiones orgánicas al interior de su estructura,<sup>26</sup> al tiempo que sectores como, el magisterio de educadores, el sector de la salud, el judicial y los obreros industriales como azucareros, petroleros, cementos, textiles y de bebidas, presentaban sus demandas a la sociedad (Ortiz, 2010:286)

En esta década el movimiento campesino también articuló sus demandas en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC- con el objetivo político de lograr la reforma agraria. Para llevar a cabo este fin, realizaron varias acciones como las invasiones de tierras en 1971 que colocó en crisis política al gobierno y lo llevó a firmar el pacto de Chicoral<sup>27</sup> de la reforma agraria. En este mismo escenario se reorganizó el movimiento

---

<sup>22</sup> Surgen experiencias como las del MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil Campesino), las del ELN Ejército de liberación nacional en 1965, el EPL (Ejército popular de Liberación) en 1967 y en 1964 las autodefensas comunistas que luego se transformaron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), que más tarde crearon varios problemas y una brutal reacción de la derecha.

<sup>23</sup> En este sentido, el debate interno de estos partidos se centró en las diferencias ideológicas, dándose varias rupturas ejemplo de ello son los grupos maoístas como el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) a finales de los sesenta.

<sup>24</sup> Eran los militantes o integrantes de un partido político colombiano fundado en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla

<sup>25</sup> Presidente de Colombia en el periodo de 1970 a 1974 por el partido Conservador.

<sup>26</sup> Ejemplo de ello fue la división del sindicalismo en varias centrales obreras.

<sup>27</sup> Fue una propuesta del Gobierno de Misael Pastrana Borrero para responder a las demandas de la ANUC, aumentar la productividad y la exportación y disminuir la tensión de los empresarios por la latente posibilidad de expropiación de tierras.

indígena del Cauca que más tarde rompió sus acuerdos con la ANUC por la fuerte diferencia de su lucha étnica. (Ortiz, 2010:286).

El movimiento estudiantil fue uno de los sectores más importantes que venía gestando su trayectoria de lucha desde mediados de la década del 50, pero al encontrarse con el Frente Nacional se debilitó debido a que el Estado frenó sus luchas a través del excesivo uso de la fuerza pública, lo que produjo una fuerte agitación por parte de los estudiantes y una fuerte represión por parte del gobierno que terminó llevando las universidades públicas y privadas al cierre de sus instalaciones por largos periodos. Esta crisis conllevó al movimiento estudiantil a crear la primera organización de estudiantes llamada Federación Universitaria Nacional -FUN- a mitad de 1960 con la cual empezaron a aparecer como organización estructurada en la esfera pública (Ortiz,2010: 287).

El sindicalismo también fue uno de los sectores con una larga trayectoria desde mediados de 1970, inicialmente mantuvo contacto con el Partido Comunista creando la confederación sindical de trabajadores de Colombia (CSTC), logrando durante esta década tomar experiencia en el uso de herramientas jurídicas que les permitió desligarse del bipartidismo para empezar a ejercer su autonomía política. Durante esta década las centrales sindicalistas actuaron de múltiples formas: adherencias a candidatura, luchas por la incorporación de los convenios 87<sup>28</sup> y 98<sup>29</sup> de la OIT, que giraban en torno al tema de las libertades sindicales y con las cuales se articularon diversas luchas como, las estudiantiles, las del magisterio, los obreros y otros sectores, “ logrando convocar paros nacionales que exigían subir el salario, controlar precios, garantizar los derechos políticos, sindicales, la titulación de territorios para campesinos y la reapertura de las universidades, lo que hizo que el gobierno reaccionara colocando el estatuto de seguridad valiéndose del estado de sitio” (Cárdenas, 2006:236)

En la década de los 80 el sindicalismo entra en declive porque la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) se divide y la Central de trabajadores de Colombia (CTC) entra en crisis por el asesinato de su presidente José Raquel Mercado, al cual el M-19 le aplicó pena de muerte en 1976. A esta situación hay que agregarle “la sistemática

---

<sup>28</sup> Este convenio corresponde a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, fue aprobado el 9 de julio de 1948 por la conferencia general de la OIT.

<sup>29</sup> Este convenio enuncia el derecho de sindicación y negociación colectiva y fue aprobado el primero de julio de 1949 en Ginebra.

represión a las organizaciones de izquierda y el surgimiento de grupos paramilitares conformados por terratenientes y ganaderos, razón por la cual el sindicalismo terminó debilitándose” (Cárdenas, 2006:236)

Así era el mapa de las organizaciones con mayor presencia en la década de los 50, 60 y 70. Fundamentalmente estaban el movimiento campesino, el estudiantil, los inicios del movimiento guerrillero, el sindicalismo y en emergencia la presencia pública del movimiento indígena. Cada vez era más evidente el aumento de las movilizaciones a finales de los años setenta donde el Frente Nacional dejaba ver el desgaste del pacto bipartidista.

Investigaciones como la de Ortiz (2010) explican que 1974 es un año importante para la reestructuración de la izquierda y de los movimientos sociales. A partir de estas elecciones presidenciales se abrió la posibilidad para los partidos de izquierda<sup>30</sup> y los movimientos sociales de participar como fuerza política alternativa y de oposición con la candidata María Eugenia Rojas por la ANAPO<sup>31</sup> enfrentándose al candidato Liberal Alfonso López Michelsen y al conservador Álvaro Gómez Hurtado. Al culminar estas elecciones la ANAPO manifiesta que le robaron parte de su votación en el departamento de Nariño y al siguiente día apareció como nuevo presidente Alfonso López Michelsen (Ortiz, 2010:288)

Con los antecedentes mencionados más la acción de luchas cívicas<sup>32</sup> que correspondían a las acciones protagonizadas por los pobladores en la esfera pública, que se movilizaron tanto en lo rural como en lo urbano con varias demandas<sup>33</sup>, los movimientos sociales replantearon y modificaron sus agendas y formas de lucha, es decir, iniciativas como marchas campesinas, bloqueos de vías, toma de entidades públicas y paros cívicos<sup>34</sup> tuvieron como objetivo romper con la centralidad del poder.

---

<sup>30</sup> Ejemplo de ellos el Partido Comunista Colombiano -PCC y el Movimiento Obrero de Izquierda Revolucionario que vieron en la ANAPO un escenario perfecto para entrar al juego político electoral.

<sup>31</sup> El partido fundado por el presidente general Gustavo Rojas Pinilla, en 1961 denominado Alianza Nacional Popular.

<sup>32</sup> El adjetivo de lo cívico es por su legitimidad frente al gobierno sin que los tilden de subversivos de sustraerlas del partidismo, la guerrilla mostrándolas ajenas a una clase social específica para destacar carácter general y legítimo de las exigencias. (García, 2010: 90)

<sup>33</sup> Exigencias como: servicios públicos, vías de acceso, créditos agrarios, atención a desastres y damnificados, alza de nuevos impuestos, seguridad, reordenamiento territorial, acciones de solidaridad asistencia inversión técnica y planes de desarrollo local y regional, la diferencia étnica, de género y la creciente violación de los derechos humanos.

<sup>34</sup> Entre 1971 y 1981 Restrepo (1991) indica que crece la protesta urbana: se realizan más de 138 paros cívicos, más de 13 por año, dos de ellos a nivel nacional, de 1982 a 1989 se hacen 218 paros, más de treinta por año (Restrepo, 1991: 383)

Es así, como la administración territorial y las tensiones entre lo local, la región y la nación se consolidan como primer punto de la agenda de movilización ciudadana, esta lucha por la descentralización durante la década de los 80 se vuelve preponderante para los sectores sociales porque el Estado era incapaz de cumplir con algunas de sus funciones centrales como: el control territorial, el monopolio del recaudo del tributo fiscal y de la violencia (García, 2010: 98)

En correspondencia García (2010) explica que en esta misma década se amplía la movilización y se vuelven constantes los levantamientos y paros cívicos como producto de la agudización de la guerra y la violación de derechos humanos, en donde el reclamo fundamental de estas formas de manifestación fue exigirle al gobierno que les garantizará los derechos civiles y políticos a los actores y movimientos sociales, la indemnización a víctimas, la desmilitarización de zonas, el cese a los operativos militares y el respeto a los defensores acusados de guerrilleros, finalmente solicitando a los grupos guerrilleros y paramilitares el cese al fuego contra la población (Ibid.,p.110)

## **2.2 Inestabilidad del régimen político.**

En el debilitamiento del régimen político, el gobierno del Frente Nacional se manifestó como un monopolio burocrático y de recursos, un sistema político sustentado en el clientelismo y el exceso de poder ejecutivo respaldado por sectores dominantes que tenían el monopolio de la participación y la representación. Tenían la capacidad de bloquear el sistema de poder y en este escenario el clientelismo se posicionó como una de las formas de acceder y estabilizarse en el mundo político del poder bipartidista (Leal, 1995:37)

Analizar el clientelismo es fundamental para comprender la crisis del sistema político. Su generalización en la década del 70 hizo que las demandas de la población se volvieran susceptibles a ser intercambiadas por votos que redujo la acción de inversión del Estado en lo social (Leal, 1995: 32) lo que generó un desfase en la administración de los recursos del Estado que decantó en la agudización de la deuda externa.

El régimen político se desestabilizó aún más en la década de los 80 durante los periodos de gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978 -1982), Belisario Betancur (1982-



1986)<sup>35</sup> y Virgilio Barco (1986- 1990)<sup>36</sup> porque no solo se contaba con los factores de la crisis de la década del 70, sino que en los 80 también se fue agudizando la violencia, acentuando el cierre de la participación política a los diferentes sectores sociales. En este escenario la sociedad civil se cuestionó por las reglas del juego político y el control del bipartidismo sobre el proceso democrático, esto originó pérdida de apoyo político de la sociedad, convirtiendo los partidos en instituciones frágiles (Leal, 1995: 41)

Ante esta situación los partidos políticos dieron vía libre a los gremios económicos, permitiendo que estos introdujeran el corporativismo. Es así como Leal (1995) explica que en los años 80 la relación entre cafeteros y el Estado se rompe por falta de participación de exportaciones cafeteras en el mercado internacional, está se conoce como una drástica sustitución del poder gremial por los conglomerados económicos. A partir de esta década los precios del café se desplomaron estancándose la economía y acrecentando el endeudamiento externo.

Posteriormente en el periodo de gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se da un fuerte deterioro de la economía ya que este presidente toma las reservas internacionales para frenar la crisis, nacionalizar y subsidiar a los bancos en quiebra. En el periodo de Virgilio Barco (1986-1990) aumenta la crisis con una deuda externa de 13.400 a 18.000 millones de dólares, situación que pasó a ser la primera preocupación para el sector fiscal, debilitándose aún más la estabilidad económica y al mismo tiempo sirviendo como el argumento para la apertura económica. De esta forma se introdujo las medidas que vincularían al país con las políticas neoliberales. (Leal, 1995: 43)

Es así, como la economía de pequeñas empresas de sectores campesinos, obreros e instituciones de clases media empezaron a sentir el deterioro de sus niveles de vida. Desde allí re-emergieron las protestas sociales, las marchas campesinas, los paros cívicos, los movimientos populares con paros nacionales que más tarde fueron objeto de persecución de la represión y la violencia estatal (Leal, 1995:44).

---

<sup>35</sup> Durante la administración de este presidente se llevaron a cabo 97 paros cívicos, con un promedio de 24 por año de los cuales 79 fueron municipales y 18 intermunicipales (Restrepo, 1991:383). durante el gobierno de Betancur 142 luchas urbanas afectaron 163 municipios.(Restrepo, 1991:384)

<sup>36</sup> En este gobierno asciende el número de paros, son 121 paros cívicos que se registran en el país, en los tres primero años de su gobierno se realizaron 264 formas diversas de protesta que afectaron 270 municipios (Restrepo, 1991:384)

En correspondencia a esta crisis del sistema político, un factor que contribuyó a la agudización de la crisis fue “el exceso de autonomía de los militares sobre el manejo del orden público que se sustentaba en el -El estado de sitio- <sup>37</sup>”, un estatuto de la seguridad nacional con influencia de Estados Unidos que buscó retener el monopolio de la violencia de los grupos guerrilleros (Leal,1995:45), adicional a esto, “la creación de una comisión de Paz con amnistía limitada y condicional para la negociación con los grupos guerrilleros conllevó a que el gobierno entrará en un callejón sin salida, lo que agudizó la crisis del régimen político” (Leal,1995:45). Todo este escenario contribuyó a la apertura democrática, más las presiones sociales posibilitaron cambiar la constitución a inicios de la década de los 90.

### **2.3 Movimientos y actores sociales en el marco de la violencia de los años 80.**

La violencia durante la década de los 80 tiene varios factores que contribuyeron a la agudización de la crisis estatal. Particularmente en abril de 1984 el narcotráfico asesina al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y en 1989 al senador Luís Carlos Galán Sarmiento. Durante esta década la sociedad convive con el fenómeno del narcotráfico y su violenta incidencia en la sociedad. En esta fecha inicia una oleada de asesinatos entre ellos el ministro, un procurador general, magistrados, jueces, funcionarios y un alto número de personas que provenían de todos los sectores de la sociedad, que sin lugar a duda eran asesinatos y formas de exterminio que complementaban la antigua violencia impartida por criminales que se enfrentaban a la tradicional resistencia guerrillera (Leal, 1991:27).

Los carteles de la droga en Colombia también tuvieron un papel importante en este contexto, fueron los enemigos más poderosos del Estado, ejemplo de ello fue el poder de los carteles de Cali y Medellín que en la década de los 80 controlaron el 80% del tráfico andino de la cocaína y con su poder económico organizaron milicias privadas, compraron armas de tecnología avanzada, sobornaron, sembraron el terror en el sistema político - jurídico y en la sociedad (Bruce, 1991:446).

La violencia del narcotráfico se desbordó en el gobierno de Virgilio Barco Vargas, (1986-1990) ya que este declaró la guerra total contra los carteles de la droga después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y el anuncio de la extradición de

---

<sup>37</sup> Es un régimen de excepción que fue declarado por el presidente Belisario Betancur y apoyado por el congreso en Colombia, con el decreto legislativo 1038 de 1984 que tenía enemigos claros identificados “guerrilleros, delincuencia común, paramilitares y narcotraficantes”

narcotraficantes requeridos por el exterior (Bruce, 1991: 446). Este tipo de violencia fue la que fracturó, denigró y afectó a los movimientos sociales con el asesinato de muchos dirigentes sociales y activistas, lo que rompió casi por completo la actividad y la estructura de organizaciones sociales, movimientos guerrilleros y su relación con el Estado (Archila, 2010: 37).

La violencia política durante esta década se agudizó debido a la elección de alcaldes de los movimientos políticos alternativos como la Unión Patriótica, varios de sus líderes fueron elegidos por voto popular lo que no fue bien recibido por otros sectores con intereses políticos, esto originó que fuera más rápida la aniquilación de la Unión Patriótica, de los movimientos sociales cívicos y de todo lo que representará oposición (García, 2001: 100)

En este escenario político la legitimidad gubernamental fue cuestionada por la sociedad y por defensores de derechos humanos a los cuales también se les vulneró, llegando con esto al punto máximo de la violencia. De esta forma, García (2001) indica que las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, eran cotidianas y se volvieron colectivas, los éxodos incrementaron las expresiones civiles de protesta a las cuales se reprimió violentamente al igual que la presencia de la guerrilla y los paramilitares sembraron el miedo en las regiones a partir de la confrontación bélica militar (Archila, 2010:107)

La confluencia de todos estos antecedentes más los asesinatos de tres candidatos presidenciales<sup>38</sup> en menos de tres años, más la violencia del narcotráfico con atentados terroristas sobre la población en varias ciudades y el fortalecimiento de ejercitos paramilitares en todo el país,<sup>39</sup> acrecentó la crisis de legitimidad del sistema político colombiano por los altos niveles de corrupción política-administrativa, el exterminio sistemático de líderes de partidos de la oposición y la recurrente violación de los derechos humanos contra la población. Estos factores fueron el escenario propicio para que las diferentes organizaciones, movimientos y grupos de la sociedad civil encontraran la estructura de oportunidades políticas para crear y potencializar sus luchas disputándose la

---

<sup>38</sup> Carlos Galán Sarmiento asesinado el 18 el abril de 1989 en Bogotá, Bernardo Jaramillo Ossa asesinado el 22 de marzo de 1990 y Carlos Pizarro León Gómez asesinado el 26 de abril de 1990 en Barranquilla.

<sup>39</sup> Francisco Leal Buitrago y León Zamocs (1990) "Estructura y coyuntura de la crisis política". Francisco Leal y León Zamocs. (Eds.), "Al filo del Caos. Crisis política en la Colombia de los años 80", Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-IEPRI-Tercer Mundo. p: 36.

participación en la política institucional a nivel nacional (Castillo, 2007:235), demandando un cambio político real.

En correspondencia con los factores históricos de la EOP, se dará cuenta de la EOP de corto plazo, en donde se analizarán cuatro factores desde la perspectiva propuesta por Tarrow (1998): 1) apertura de oportunidades para las organizaciones sociales, en particular el movimiento afrodescendiente, 2) las divisiones y pugnas internas entre diversos sectores de las elites, 3) la búsqueda de aliados en distintos niveles, locales, regionales y nacionales tanto en esferas sociales e institucionales, y 4) la represión.

## **2.4. La constituyente y la apertura de oportunidades para las organizaciones sociales.**

### **2.4.1 Apertura a la participación política en el proceso constituyente.**

Desde la perspectiva de Tarrow (1997) “la apertura de las oportunidades políticas se refiere a las dimensiones consecuentes -aunque no necesariamente formales o permanentes- el entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997; 118)

El proceso de apertura a la participación de la sociedad civil en cambio tiene varios antecedentes organizativos. Los estudios de Restrepo (1991) explican que el aumento de la movilización y la protesta iban de la mano con procesos de organización y celebración de encuentros nacionales de todas las organizaciones locales, populares, movimientos cívicos y regionales y su multiplicación de coordinadoras.

En 1979 se realizaron los primeros encuentros de comunidades eclesiales de base (CEB), en 1982 se da el congreso de indígenas de la ONIC, en 1983 se da el primer congreso de movimientos cívicos<sup>40</sup> y se forma la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos. En 1984 se da el encuentro nacional agrario que da origen a la Coordinadora de Organizaciones Agrarias de Colombia (Restrepo, 1991:386). En este momento aún no se conocía el movimiento afrodescendiente como un movimiento organizado nacionalmente sino que existían distintos procesos organizativos en las regiones, particularmente en la del Pacífico.

---

<sup>41</sup> Este encuentro se da durante el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982 - 1986) , allí se destacan los movimientos de tipo regional como el movimiento cívico del oriente antioqueño, el movimiento cívico popular por Nariño y el movimiento cívico popular de Arauca en unión con más movimientos populares que realizaran el segundo encuentro de movimientos cívicos para 1986 (Restrepo, 1991:386)

En 1985 se da el primer congreso Unitario de Vivienda con su coordinadora de vivienda popular (Conavip) y en este mismo año se celebra el Congreso Comunal en donde se forma la Comisión Nacional de Juntas de Acción Comunal (JAC), en 1986 se da el segundo encuentro de movimientos cívicos a la par de la fundación de la Central Unitaria de trabajadores -CUT- y en 1987 se celebra la reconstrucción de la -ANUC- (Restrepo, 1991:385-386). En medio de este fenómeno organizativo de los movimiento en la sociedad civil, se da un declive en el proceso de negociación con la guerrilla que venía desde mediados de los 80, y se produce dos formas de organización, una es la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -CGSB- y paralelo emergen tres movimientos políticos de izquierda: la Unión Patriótica de las FARC en 1985, la organización A Luchar y el Frente Popular de línea política maoísta (Restrepo,1991:386), frente a este proceso de organización de una parte de la sociedad civil, el movimiento afrocolombiano seguía a nivel regional con sus exigencias específicas en torno a la demanda de los servicios públicos, el territorio, combatir el racismo, tener reconocimiento, identidad y poder político luchas que fueron la base para formar procesos organizativos y demandas que más tarde encausarían la participación en la ANC.

En el escenario urbano un movimiento que se comprometió con dinamizar el proceso constituyente en la ciudad fue el estudiantil llamado “Todavía podemos salvar a Colombia”. Su actividad inició en agosto de 1989 realizando una serie de acciones de protesta como: la marcha del silencio con más de 25.000 mil estudiantes con la que le exigían al gobierno respuesta a la cantidad de asesinatos hechos por el cartel de Medellín.<sup>41</sup>

Estas acciones del movimiento estudiantil fueron tomando el nombre de un grupo organizado llamado “La séptima papeleta”, denominación con la que se le conoce al proceso político agenciado por un grupo de estudiantes de universidades tanto privadas como públicas que ante la oleada de violencia y su interpretación sobre el sentir de la sociedad colombiana, conformaron un movimiento político estudiantil manifestando la necesidad de hacer una reforma política urgente.

---

<sup>42</sup> Pablo Escobar, quien era en la década de los 80 conformó una estructura de asociación criminal, que operaba con puntos de producción de narcotráfico con rutas de envíos descentralizados, llegando a convertirse en una de las estructuras más poderosas que permeó con corrupción la clase política colombiana, además de consolidar una fuerte capacidad de presionar al Estado a partir de los atentados con bombas en sitios públicos de las ciudades más importantes del país.

Esta propuesta fue hecha en el gobierno de Cesar Gaviria y buscaba conseguir en las votaciones la aprobación de la sociedad para iniciar una Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 1990 (Orjuela, 2011:6). La séptima papeleta fue un mecanismo extra constitucional por miedo del cual se hizo que el pueblo, como constituyente primario manifestara la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente. (Núñez, 2011:8).

Se le denominó la séptima papeleta porque en las elecciones del 11 de marzo de 1990, al elector se le iban a entregar seis papeletas (para Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcalde y consulta liberal) y se pretendía que se le diera una más con la siguiente leyenda “Voto por Colombia, si a una Asamblea Constituyente”. Aunque la propuesta tuvo respaldo del presidente Virgilio Barco, la registraduría presentaba cierto distanciamiento frente a la propuesta porque a la hora de hacer el conteo, se carecía de herramientas jurídicas que lo permitirán. En las elecciones presidenciales cuando se eligió a Cesar Gaviria como presidente de la república (Alarcón, 2011:9), esta idea empezó a tomar más fuerza por la legitimidad que este gobierno le dio a la iniciativa del movimiento estudiantil.

La acción electoral de “la séptima papeleta” consistió en colocar una séptima papeleta el 11 de marzo de 1990 en las elecciones parlamentarias con la siguiente declaración: “el rechazo a la violencia, el respeto de los derechos humanos, apoyo a las instituciones del Estado en su lucha contra todas las fuerzas que desestabilizaban la democracia a través de la convocatoria al pueblo colombiano para reformar la institucionalidad y de esta forma superar la crisis política” (El Tiempo, 1990:6A).

Los resultados de la acción de la séptima papeleta permitieron que varios sectores de la sociedad civil como los movimientos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las organizaciones de género, tanto en Cali como en Bogotá por estar dentro de la ANC fue un proceso de constante trabajo y denuncia en los medios de comunicación, especialmente por la falta de atención a sus demandas, lo que hizo que se incrementará el apoyo a la votación popular con la participación del sectores como los de género, sindicalistas, profesoras, ex ministras, ex gobernadoras, militantes de izquierda, poetas y lideresas comunales<sup>42</sup>

---

<sup>47</sup> Ver el diario regional -El País- y el diario el Tiempo en diciembre 1990.

Movimientos como la Unión Patriótica, también se sumaron junto con los voceros del M-19 a la propuesta de la séptima papeleta<sup>43</sup>, las autodefensas desde su comando central buscaron reunirse con el consejo presidencial para la paz, hasta sectores como el narcotráfico realizaron acciones que les permitiese llegar y participar en la ANC.

En ese contexto de heterogeneidad de demandas sociales, fue posible hacerlas converger, en una propuesta constituyente debido al amplio proceso de interacción de los movimientos sociales que no se identificaban con las propuestas del bipartidismo y de los grupos armados, pero en cambio estas organizaciones y sectores venían realizando diversas acciones para solucionar sus problemas al tiempo que demandaban inclusión en escenarios participativos, como lo indica Granda (1994):

Los movimientos cívicos, los paros y marchas, los movimientos de pobladores ciudadanos, las nuevas dimensiones del movimiento indígena y, en general, de las minorías étnicas, los grupos religiosos, ecológicos, las organizaciones juveniles, son una muestra de la vigorización de la sociedad civil y de su polifacética expresividad (Granda, 1994:6).

En este proceso de organización los movimientos sociales se plantearon su deber como alternativa política con poder popular para convertirse en la base institucional de un contrapoder y llenar el vacío de ser intermediarios entre Estado y la sociedad civil (García, 2010: 92). Al mismo tiempo en el nivel de la política institucional, el Partido Liberal en conjunto con los sindicatos, realizó el acto por “la supervivencia nacional” para garantizar la vida y el libre accionar de los líderes de los distintos partidos políticos (El Tiempo, 1989:6A)

Dichas acciones fueron abriendo el camino a una amplia participación de cara al proceso constituyente, permitiendo que se presente nuevos partidos políticos como el “Movimiento Nacional Alternativo y Democrático”<sup>44</sup>, que realizó su primera convención en Medellín, con varios representantes gremiales, líderes cívicos, campesinos y sindicalistas que buscaban delinear una política de paz para proponerle al gobierno un proyecto político alternativo.

En este proceso de apertura a la participación, organizaciones como la Unión Patriótica (UP), fue la respuesta política de las FARC frente al gobierno para luchar por la

---

<sup>43</sup> Ver el Diario el Tiempo, 1990,7A

<sup>44</sup> Ver el diario nacional El Tiempo, 1989:6A.

paz, hizo parte de la apertura democrática por la conquista de espacios políticos en la esfera de la institucionalidad. Esta opción política aglutinó todos los sectores que no se sentían representados en el bipartidismo y que querían construir o defender el ideario de nacionalidad, patria, soberanía (Arizala, 1989:160)

Inició en 1985 pero en 1986 la Unión Patriótica obtuvo un gran respaldo en alianza con el partido conservador, el liberal y de la sociedad civil para ir a elecciones parlamentarias, lo que los llevó al éxito electoral porque pactaron acuerdos y presentaron listas conjuntas con sectores del liberalismo, en varias regiones hasta más de 320 mil votos. En su lista fueron elegidos: “5 senadores, 9 representantes a la cámara, 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes municipales” (Campos, 2008:142)

Es así, como se abrió el espectro de la participación en la política institucional en la ANC desplazando al bipartidismo. Este nuevo mapa político que se configuró en el país, tuvo una fuerte participación en de la esfera pública y de la política institucional, lo que hizo que se desencadenara por parte de las fuerzas criminales un fuerte exterminio contra sus líderes en varias regiones del país, especialmente persiguieron y asesinaron a quienes provenían del Partido Comunista, la Unión Patriótica y la AD- M19.

Ante esta situación, líderes de este partido no solo se reunieron en varias ocasiones con delegados del gobierno sino que también realizaron varias denuncias y comunicados que se difundieron en el exterior. Además impulsaron misiones internacionales para lograr políticas que protegieran a sus militantes tanto de la policía, el ejército, los narcotraficantes y los grupos paramilitares, mientras continuaban llevando a cabo su proyecto político (Campos, 2008:139).

En 1987 la Unión Patriótica a pesar de sus denuncias y esfuerzos por detener la cadena de asesinatos en contra de sus militantes, que ya sobrepasaba doscientas personas asesinadas bajo el conocido plan de exterminio del Baile Rojo. (Campos, 2008:142). Con el magnicidio en 1990 del Candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, en este momento se redujo la participación política de la Unión Patriótica y la mayoría de sus militantes renunció en el X pleno del movimiento a causa del miedo generado por el sistemático exterminio, perdiendo tanto el apoyo de sus bases como de la personería jurídica después de las votaciones de 1990 (Campos, 2008: 145).



Frente a la apertura parcial de la política, el proceso de la Unión Patriótica es fundamental ya que abrió y activó la participación política en escenarios locales, regionales y el nacional teniendo como argumento la idea de pluralidad y convergencia en todos los niveles de la sociedad. Al mismo tiempo el sistemático genocidio sobre este movimiento político también fue un factor importante para que la sociedad se movilizara exigiendo al gobierno que se le colocará un alto a la violencia y proponiendo como salida a este escenario la ANC.

Paralelo a esta fuerza política estaba el Movimiento 19 de Abril (M-19) en un proceso de negociación con los gobiernos de turno que duro cerca casi una década. Este movimiento se hizo varias acciones urbanas, confrontaciones bélicas rurales, forzar escenarios de negociación con el gobierno y buscar la desmovilización para integrarse al sistema político. El M-19 en esta apertura parcial a la participación cumple un papel similar al de la Unión Patriótica por que la tensión de oposición que crean con el gobierno hace que emerjan escenarios de movilización en donde se propone la apertura de un dialogo nacional<sup>45</sup> demanda que al mismo tiempo fue perfilando el proceso de paz con las organizaciones armadas y su desmovilización.

En el caso de los movimientos sociales como el indígena y el afrodescendiente las acciones con las que inciden en la apertura de la participación política en el marco del proceso constituyente son, por el lado del movimiento indígena se da un salto cualitativo desde la ruptura con la ANUC, en la década de los 80, la creación del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia -AICO - en alianza con el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y sus plataforma con principios políticos fundamentados en la centenaria lucha de resistencia, la autoridad tradicional sobre el territorio, la politización de la diferencia, sus acciones de recuperación de territorios y el gran poder de movilización, consolidan los ejes de lucha que determinará la reivindicaciones culturales e identitarias con las cuales participaron en la ANC (Castillo,2007:155).

En correspondencia a esta lucha, un trabajo adicional que realizó el movimiento indígena fue desarrollar su capacidad de proyección internacional. En las investigaciones

---

<sup>45</sup> El gran dialogo nacional es la propuesta del M-19 para que los sectores de la sociedad discutieran por mesas temáticas los problemas de la sociedad y estas se condensaran en propuestas previas a los debates de la ANC.

de Castillo (2007) se explica que dicha proyección internacional se fundamentó en la articulación de redes transnacionales con ONG que a través de conferencias internacionales en contra de la discriminación de los indios fue logrando la consolidación de espacios políticos como los grupos de trabajo sobre los pueblos indígenas, donde se agenciaron procesos como “la convención 169 de 1989 de la OIT y la declaración sobre los derechos de los Pueblos Autóctonos por parte de la ONU y el evento del quinientos aniversario del descubrimiento de América”(Castillo, 2007:160)

En correspondencia con lo anterior el movimiento indígena tenía una amplia trayectoria de luchas sociales que abarcaban acciones colectivas como la recuperación de tierras, la confrontación y la desconfianza con el bipartidismo, el lobby internacional. Estos elementos articulados a la convocatoria de la ANC generó discusiones al interior de las organizaciones indígenas AICO y la ONIC, llegando a la conclusión de que había una estructura de oportunidades políticas que era necesaria aprovecharla por el movimiento indígena para legitimar en la esfera institucional las demandas por el territorio y la identidad étnica.

En el caso de las organizaciones afrodescendientes, Agúdelo (2002) explica que en “la década de los 80 en varias zonas de la región del Pacífico a través de los medios de comunicación como: radio, prensa y televisión regional se manifestaron las disputas entre líderes de un mismo partido por corrupción, lo que ocasionó un profundo desencantamiento con la política y pérdida de apoyo a los partidos tradicionales” (Agúdelo, 2002:89).

A finales de esta década de los 80 a nivel nacional el gobierno introdujo medidas de modernización política como la elección popular de alcaldes, lo que generó modificaciones en el comportamiento de los electores a nivel nacional. Al mismo tiempo el Estado y los actores tanto de la región como fuera de ella comenzaron a ver el Pacífico con proyección estratégica en función de lo económico con el discurso de biodiversidad con el objetivo de generar planes de desarrollo para la región. (Ibid.,p.89)

En correspondencia las demandas de las comunidades afrodescendientes giraron en torno a la lucha por el territorio y el reconocimiento de la identidad como pueblos étnicos, demanda que en la coyuntura de generada por la convocatoria a la ANC permitió la creación de escenarios de encuentro y deliberación política, denominados pre-asambleas que dieron origen a encuentros, propuestas políticas, construcción de una coordinadora

nacional, participación en escenarios electorales nacionales, estrategias de lobby, alianzas y negociación con otras fuerzas políticas. De esta forma las comunidades afrodescendientes no solo identificaron sino buscaron la participación política en la ANC, lo que más tarde les permitirá consolidarse como movimiento social afrodescendiente (Castillo, 2007:194)

#### **2.4.2. Élités divididas y alineamientos inestables.**

Tarrow (1998) define la división en las élites como: “los conflictos que se presentan en su estructura interna, estas divisiones incentivan a los grupos que cuentan con pocos recursos a correr riesgos inherentes a la acción colectiva, a la vez se puede presentar que las Élités tomen el papel de tributo al pueblo para aumentar su propia influencia política” (Tarrow, 1998:119)

Para hablar de la división en las élites políticas dentro de la coyuntura del proceso constituyente hay que estudiar la EOP de larga estructura, es decir, en el caso de la división de las élites y sus alineamientos inestables del bipartidismo, es fundamental conocer los antecedentes de cómo se crea la crisis del bipartidismo para conocer sus orígenes y la relación de oposición con la izquierda comunista.

Leal (1989) explica que en Colombia los partidos políticos nacen a comienzos del siglo XX como instituciones de peso ideológico para la formación del nacionalismo. Estos se configuraron como proyectos políticos con legitimidad de la clase económica latifundista que se regía bajo la Constitución de 1886. En la década de los 30 esta constitución estructuró y estabilizó el régimen bipartidista, construyendo hegemonías de partido y con ello la idea de la oposición entre partidos. Es así, como el partido conservador estuvo en el poder hasta 1930. Posteriormente se posicionó el partido liberal que duro 16 años en el poder hasta 1946 (Leal, 1989:239)

El partido liberal estuvo tanto tiempo en el poder por la configuración de un proyecto político conducido por el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938), quien en conjunto con el sector comercial implemento reformas como: buscar la separación entre Estado e Iglesia, hacer una cuasi-reforma agraria y una cuasi -reforma tributaria. (Leal, 1989:241)

En la década del 40 se dio la primera crisis del bipartidismo por la llegada del modelo capitalista, que modificó las formas de organización social y al mismo tiempo “se cruzó con el fenómeno de la violencia en los dos periodos del gobierno militar del general

Rojas Pinilla (1953-1957) y de la transición de la Junta Militar de 1957 a 1958” (Leal, 1989:237)

Durante esa década la estrategia del bipartidismo fue desestabilizar el régimen político existente, para sustituirlo por las necesidades del capitalismo. En este mismo periodo al interior se fragmentaron los partidos políticos y se originó una jerarquización con los líderes políticos regionales que agudizaron el sectarismo del bipartidismo y la subordinación a los líderes nacionales, lo que consolidó que la institucionalización del bipartidismo, al mismo tiempo se estructuraron y se tornaron fundamentales las coaliciones como formas tradicionales de preservar el poder gubernamental en manos de las élites políticas. (Leal, 1989:242)

Los pactos de coalición y alianzas entre el bipartidismo se rompen en 1947, cuando un sector interno del liberalismo guiado por Jorge Eliecer Gaitán no acepta continuar con la lógica de las alianzas entre el bipartidismo en los escenarios de la política nacional. (Leal, 1989:243). Posteriormente se da el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, situación que operó como el detonante de la creciente crisis política y social que se venía gestando. Al mismo tiempo una facción del partido conservador socavó todos los escenarios institucionales para desestabilizar el gobierno del Conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950) e hizo que desde el partido conservador se tomaran todas las decisiones que debía tomar el gobierno nacional, preparando el camino para que en las siguientes elecciones presidenciales, el conservador Laureano Gómez (1950-1953) se quedara en el poder (Leal, 1989:242)

En la década de los 50´ Leal (1989) explica que el partido conservador tuvo amplio monopolio del poder institucional y los liberales frente a esta condición política, intentaron a través de reformas al sistema electoral cuestionar al gobierno, para ello los liberales aplicaron “el abstencionismo liberalista” en escenarios electorales. A este factor se le sumó el incremento de la violencia y el interés de poner en marcha una reforma constitucional, esperando que con esta se frenara el desborde de la creciente crisis y violencia que estaba viviendo el país (Leal, 1989: 243)

Frente a la inestabilidad del régimen político, el bipartidismo propuso el Frente Nacional (1958 -1974) difundido hacia la sociedad como la rotación del poder, que intento solucionar la crisis a través de las siguientes estrategias: 1) activar nuevamente la antigua tradición de “coalición entre partidos” 2) solucionar el control político institucionalizado,3)

evitar de peligro antidemocrático y 4) detener el estallido pre-revolucionario (Leal, 1989: 244)

Los partidos políticos desde su origen fueron encargados de catalizar y aglutinar los procesos locales políticos. El Frente Nacional introdujo a las clases políticas dominantes en un proceso de unificación, aun cuando el bipartidismo tenía antecedentes de faccionalismo en su estructura a nivel nacional, razón por la cual era imposible hacer coaliciones en todo su esplendor. A comienzos de los 60' en el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) se produjo el interés del bipartidismo para ensanchar sus partidos con burocracia.

Para esto se implementó la ley de paridad burocrática que estabilizó los intereses del capitalismo e institucionalizó el bipartidismo. Externamente se implementó la política de rehabilitación para zonas con violencia, que planteo la descentralización del poder gubernamental para crear un Estado más eficaz que se introducía en la lógica capitalista (Leal, 1989: 248). Frente a esta creciente institucionalización del bipartidismo, el General Gustavo Rojas Pinilla en conjunto con algunos sectores sociales se organizaron en 1961, creo la Alianza Nacional para el Progreso -ANAPO-, la cual jugó el rol de denunciar el cierre de todos los espacios para la participación política, el exacerbado uso de la violencia y la aguda violación de derechos humanos (Leal, 1989: 249)

En el periodo de 1962 y 1966 el gobierno de Guillermo León Valencia se caracterizó por enfrentar una crisis económica que evidenció la falta de autonomía económica del país sustituida por una fuerte dependencia capitalista. Frente a esta situación, surgió la necesidad de pactar acuerdos políticos permanentes como “la política de la milimetría” que consistía en repartir los puestos políticos entre el partido liberal y conservador, lo que causó desconcierto para la ANAPO, por su exclusión de la política nacional. En correspondencia la ANAPO inmediatamente respondió con amplias movilizaciones populistas que denunciaron públicamente la posición autoritaria del gobierno. (Leal, 1989:250)

En el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se generó disputa en los partidos. Frente al partido conservador profundizó la división entre los seguidores de Laureano Ospina y los seguidores de Gilberto Álzate Avendaño por diferencia de orientaciones ideológicas para dirigir el partido. Pero al mismo tiempo este gobierno

planteaba un modelo económico de exportación que en 1968 se legitimó con una reforma constitucional para darle viabilidad al proyecto burgués. En ella se definió la consolidación del poder ejecutivo y el desmonte del Frente Nacional, dicha reforma fue la estrategia transitoria, sutil y diplomática para desmontar gradualmente el Frente Nacional sin hacerlo de una forma repentina y drástica (Leal, 1989:251).

En la esfera institucional la reforma constitucional de 1968 no tenía apoyo popular, lo que implicó para el gobierno tener que sumar fuerza política y buscar alinearse con la ANAPO para que esta influenciara los parlamentarios y de esta forma se alcanzara legitimidad en el congreso. En la esfera de lo social esta reforma tuvo como efecto la ruptura de la autonomía y de la lucha del movimiento estudiantil, que fue disuelto con la represión militar, lo que ocasionó que varios de los líderes universitarios se vincularan a los movimientos alzados en armas FARC o ELN, originando como consecuencia para la oposición que toda acción que realizaran fuera denominada como subversiva. (Leal, 1989:251)

En 1970 al finalizar el Frente Nacional, las elecciones de este año mostraron la crisis y el debilitamiento del bipartidismo. En 1978 Leal (1989) explica que el debilitamiento del sistema bipartidismo se hizo más evidente frente a la marcada presencia de: 1) la presencia del abstencionismo frente a la legitimidad que tradicionalmente se le había otorgado al poder; 2) la pérdida de mística partidista que poco a poco fue sustituida por el clientelismo; y 3) los procesos de urbanización agenciados por el desplazamiento de los pobladores rurales a lo urbano, que rompen con todo vínculo afectivo y clientelista de los militantes hacia el partido. (Leal, 1989:254)

En el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) fue el escenario político, donde se desarrolló el clientelismo como una práctica articulada a la bonanza económica, que de manera indirecta tenía fuertes vínculos con el narcotráfico, paralelo estaba el “estado de sitio” que se desbordó con el uso de la fuerza en manos de la represión militar acompañado del estatuto de seguridad que perseguía como fin acabar con la guerrilla nacionalista del Movimiento 19 de Abril M-19 (Leal, 1989: 254)

En el gobierno conservador de Belisario Betancur (1982 -1984) el bipartidismo se caracterizó por una fuerte oposición de los congresistas del partido conservador al gobierno, quienes se manifestaron en contra de la reforma constitucional, al comienzo de

las negociaciones del proceso de paz, con el argumento anti reforma de mantener condiciones que sustentan y reproducen el poder, es decir durante el periodo de 1982-1986 no se avanzó en la propuesta de reforma porque no hubo iniciativa de cambios en los partidos ni en el congreso, como lo planteó Bejarano (1991) “sin el respaldo, la transformación y renovación de estos actores políticos es difícil hacer una reforma constitucional” (Bejarano, 1991:70).

Al mismo tiempo en este periodo de gobierno de Belisario Betancur, el sector de las fuerzas militares tanto en su discurso como en la praxis fueron claros en mostrarle al gobierno su resistencia u oposición a la idea del presidente de recuperar el orden social, las fuerzas militares se posicionaron como actores políticos independientes al cual se le tuvo que tener en cuenta para firmar el proceso de paz, considerándoseles como un núcleo sólido de oposición en unión con una facción del conservadurismo (Bejarano, 1991:71)

### **2. 4. 3 Aliados influyentes.**

Desde sus investigaciones Tarrow (1998) define los aliados influyentes como: “la presencia o ausencia de amigos en los tribunales, garantes de que no se aplicará la brutal represión o negociadores aceptables sobre todo para los actores institucionales, más que para el mismo movimiento inconforme” (Tarrow,1998:120)

En correspondencia con lo anterior, el alineamiento inestable los protagonizó el Partido Liberal con su distanciamiento del Partido Conservador, porque en la propuesta constitucional tuvo mayor cantidad de propuestas liberales que excluyeron al partido conservador en la distribución administrativa del poder (El tiempo,1989:6A). Esta situación tan solo no fue en contravía con ideas de la facción conservadora de Álvaro Gómez Hurtado<sup>46</sup> que en su propuesta política proponía dale legitimidad a la movilización cívica como una nueva forma de hacer política, es decir, él argumentaba que: “si los paros cívicos son el nuevo escenario de la política buscado por el gobierno de Barco, hay que fomentarlos, no se debe desaprovechar la oportunidad” (Archila, 2001:29)

Esta separación interna de los conservadores no solo generó disputas a nivel nacional sino que en el escenario regional y local, sumado a los antecedentes históricos<sup>47</sup>,

---

<sup>46</sup> Escritor, abogado, periodista y político, hijo del ex presidente Laureano Gómez y candidato presidencial en 1986 y 1990 fue asesinado en 1995.

<sup>47</sup> El Partido Liberal es reconocido como uno de los actores políticos que apoyó con argumentos normativos la abolición de la esclavitud en 1852 en Colombia. Castillo (2007) Etnicidad, Raza y Nación.

reforzó la constante presencia del Partido Liberal especialmente en la región del Pacífico que contaba con un mayor alcance de influencia política y electoral en la región, lo que en la ANC contribuyó a que las comunidades afrocolombianas se identificaran como una fuerza política con la cual se podrían alinear los líderes del Partido Liberal para hacer su defensa de sus demandas en el debate de la ANC.

Es así, como en el proceso de la ANC Castillo (2007) explica que el Partido Conservador se opuso a la ANC. El máximo líder del Partido Conservador Misael Pastrana Borrero se posicionó en defensa de la antigua constitución de 1886 con el argumento de que los índices de abstencionismo sobrepasan la mitad de la población activa para votar y que prefería que se reformara esta constitución. Este argumento terminó de ganar peso, cuando el 9 de diciembre de 1990 la votación fue baja, ganando el abstencionismo y derrotando al gobierno en este intento por cambiar la constitución.

Al mismo tiempo desde la jefatura del liberalismo en cabeza de Alfonso López Michelsen se sustentaba que hacer una nueva constituyente significaba dar un paso a la desinstitucionalización y lo mejor que se podía hacer era solo reformarla (Castillo,2007:239). Dichos argumentos estaban sustentados desde el miedo a perder a hegemonía política que tradicionalmente concentraba este partido en las esferas de la política institucional, sin embargo estas disputas se fueron desvirtuando al escuchar las propuestas de los liberales y la presión de los sectores sociales en torno a las denuncias contra la violencia, con el tiempo y el partido conservador dejó de hacer oposición a la ANC.

A inicios de abril de 1990, la nueva izquierda sin la participación del Partido Comunista, firmó con varios grupos<sup>48</sup> (entre ellos partidos políticos) el propósito de disolverse para formar un nuevo movimiento, contrario a la violencia y a favor de un sistema de libertades y de economía mixta, es este el modelo que buscan quienes decidieron conformar el nuevo proyecto político encontrando una salida negociada al conflicto armado interno del país, creando un sistema de libertades y economía mixta (El Tiempo,1990:6A).

En este proceso la Unión Patriótica consideró como un hecho positivo los decretos gubernamentales que autorizaban la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente,

---

<sup>48</sup> Entre ellos la Unión patriótica, M-19, Acción Nacionalista por la paz, Colombia Unidad, Socialismo democrático, Frente democrático, Frente Popular, Inconformes de Nariño y frente amplio del Magdalena medio. (El tiempo, 1990: 6A)



invitando a los colombianos a responder con un “sí” a la consulta plebiscitaria, aclarando que la representación de la constituyente esté en manos de las fuerzas políticas y sociales tanto de las regiones como del país. Para efectos de este ejercicio el gobierno les abrió espacios de media hora en la televisión nacional para que UP hiciera propaganda al voto asambleario (El Tiempo, 1990: 11A)

Desde el bipartidismo tradicional, el Partido Liberal estuvo siempre en el marco electoral pendiente de hacer alianzas con el conservatismo y el M-19, ya que el liberalismo estratégicamente los consideraba como las dos siguientes fuerzas con las votaciones más altas para hacer las coaliciones que discutirían las reformas constitucionales (El Tiempo, 1990:7A)

#### **2.4.4. Represión.**

Desde la definición de Charles Tilly la represión es “cualquier acción por parte de un grupo que eleva el coste de la acción colectiva del contendiente” (Tarrow, 1998:121). El proceso constituyente fue el escenario en donde los diferentes movimientos sociales y políticos denunciaron la persecución, la represión y el exterminio de la oposición política del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978 - 1982), que inició con el estatuto de seguridad en la década de los setenta, esta política de represión fue auspiciada por fuerzas paraestatales, el narcotráfico y el Estado.

Es así, como en el periodo del presidente Belisario Betancur (1982-1986) se lanzó la iniciativa de un proceso de paz con los grupos armados como el M-19, la Unión Patriótica, y el EPL, lo que incrementó el conflicto en varias zonas del país y las respuestas de actores criminales que utilizaron múltiples estrategias como: masacres, persecuciones y desapariciones forzadas, mientras a diario se registraban asesinatos de líderes en el acontecer nacional (Wabgou et al., 2012:136)

El gobierno de Virgilio Barco (1986-1989) para enfrentar la crisis estatal probó varias medidas, una de ellas fue el uso del presidencialismo apoyado en “el estado de sitio” para luego declararle la guerra al narcotráfico. Esta política colocó en alerta a sectores que no querían perder sus privilegios, la presencia del narcotráfico fue decisiva para evidenciar la debilidad del Estado, pues cada vez hizo más visible la ausencia de justicia y los altos niveles de impunidad, lo que dejaba ver la incapacidad del Estado por monopolizar el uso de la fuerza.

Sin embargo la política de guerra de este presidente tuvo efectos en: 1) colocó fin al deterioro estatal de los años anteriores; 2) frenó el proceso de descomposición de las fuerzas armadas, cerrando la consolidación al proyecto reaccionario; 3) bloqueó la bipolarización de la contienda política del bipartidismo y 4) facilitó el proceso de apertura y pacificación negociada con los grupos armados, proceso que se inició en el siguiente gobierno (Leal, 1995: 49).

Durante este periodo desde la perspectiva de instituciones como el CINEP,<sup>49</sup> encargada de rastrear, analizar y sistematizar los índices de violencia política generadas por distintos actores armados, se puede evidenciar en la base de datos de 1986-1990 que el balance que hacen respecto a un posible descenso de niveles de la violencia después y durante la nueva constituyente, no varía mucho a pesar de haber pasado por un proceso en donde se demandó todo el tiempo el incremento en las formas de violencia y los niveles de exterminio y ejecución de la oposición.

## **2.5 A modo de conclusión.**

Analizar la estructura de oportunidades políticas de largo plazo para dar cuenta de la estructura de oportunidades políticas de corto plazo desde la perspectiva teórica de la sociedad civil, es una combinación de enfoques teóricos que posibilita a través de sus categorías y herramientas hacer un análisis amplio y complejo que da cuenta desde la sociedad civil la forma histórica y estructural como se da el origen, las diversas formas de organización, la construcción de demandas, los procesos movilización y las formas de lucha que se generan en los distintos sectores sociales en coyunturas álgidas de la política de un país. Es decir, una amplia caracterización y análisis al mismo tiempo que lleva a pensar la sociedad civil como un conjunto de actores, formas y estrategias que plantean la política desde la diferencia y la particularidad frente a las formas de la política tradicional.

Desde la definición de estructura de oportunidades políticas propuestas por Tarrow, las categorías que configuran este enfoque teórico proporcionan elementos analíticos que

---

<sup>49</sup> “Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP)”. Consultar: [http://www.cinep.org.co/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=96](http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=96)

en el análisis de los movimientos sociales permite ver en doble vía las aperturas y los cierres de los sistemas políticos en ciertos momentos álgidos del juego político, sin embargo cada categoría de este enfoque permite identificar con mayor claridad el potencial de identificar, analizar y actuar que pueden llegar a tener los actores y sectores sociales cuando tienen como objetivo la incorporación en procesos de participación política.

En correspondencia el actor social propuesto en este análisis, es decir, las comunidades afrodescendientes y su política de la influencia en el proceso constituyente de 1991, es un caso de estudio que al ser analizado desde la combinación de los enfoques referenciados brindó la posibilidad de hacer un estudio que parte de una problemática de procesos de la política reciente colombiana y permitió realizar un análisis político en retrospectiva que dio cuenta de los factores económicos, políticos y sociales que incidieron en la formación de un proceso constituyente.

Esto posibilitó la emergencia de nuevos actores sociales, de otras formas de organización y de la ruptura de los tradicionales mecanismos de participación y representación por nuevas formas participativas y representativas de acuerdo a la naturaleza y particularidad que caracterizó los actores de la sociedad civil colombiana de la década de los 80 y 90.

Al mismo tiempo identificar la EOP para el análisis de este estudio de caso permite identificar como la institucionalidad, las élites y el Estado también se transforma creando, cediendo y cerrando espacios de participación que permiten poner en juego sus estrategias políticas para enfrentar los desafíos de la sociedad civil, posibilitando a la vez que esta institucionalidad a nivel interno se desestabilizase, entre en crisis pero a la vez gane elementos y recree estrategias para potenciarse y lograr institucionalizarse con mayor solidez.

Dentro de la EOP se identifica un forma distinta de apertura a la participación política, es decir, una modalidad parcial en donde la participación no se desarrolla de forma plena, sino que tuvo permanentemente que estar enfrentando obstáculos como el exterminio sistemático, la violencia política, la desigualdad y el cierre de escenarios por parte de la normativa institucional, los grupos paramilitares, el bipartidismo y los sectores que estaban en desacuerdo con una nueva constituyente.

### **CAPÍTULO III**

#### **COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS: ENTRE LA POLÍTICA DE LA INFLUENCIA Y LA POLÍTICA DEL PODER.**

En este capítulo se analizará la política de la influencia de las organizaciones afrocolombianas en el marco del proceso constituyente de 1991. Este estudio se enfocará en examinar desde las categorías analíticas de la política de la influencia, las formas de asociación, organización, los mecanismos y redes comunicación que construyen los movimientos sociales durante los escenarios de deliberación, configuración de demandas colectivas, procesos de movilización y protesta que se fueron dando en diferentes espacios políticos aquello conllevó a una creciente articulación colectiva en lo regional, permeando lo que se denomina la esfera de los meso-espacios políticos<sup>50</sup> que conectó con la esfera de la política pública y fortaleció el acelerado paso de las comunidades afrodescendientes a la incesante búsqueda de la participación de sus actores y la representación de sus demandas en la esfera de la política institucional.

En este capítulo se examinará el proceso de asociatividad como forma de organización de las comunidades afrodescendientes. Posteriormente, con las limitaciones que colocó el corto tiempo de la convocatoria de la ANC, se analizará cómo se crearon los encuentros y los espacios deliberativos centrándonos en identificar cómo las comunidades afrodescendientes comenzaron a incidir en la esfera pública a través de reuniones, encuentros, debates y asambleas que confluyeron en la construcción de demandas para influenciar la esfera pública y en la institucionalidad política.

En este análisis al mismo tiempo busca identificar cómo se tejieron procesos y redes de comunicación que integraban demandas raciales, territoriales y de reconocimiento particulares que en la interacción y la deliberación de las pre-asambleas constituyentes fueron tomando forma hacia un solo objetivo, el de la inclusión y el reconocimiento de este

---

<sup>50</sup> Los meso espacios políticos son espacios producidos por instituciones de carácter nacional, refieren los medios de comunicación, la educación y la cultura, sistemas que crean identidad que traspasan lo local, lo regional y llegan al nivel nacional.

sector en la sociedad y como actor político con capacidad de lograr la participación utilizando múltiples estrategias para estar representado en el juego político.

Hablar de la política de la influencia de las organizaciones afrocolombianas en el proceso constituyente de 1991, implica hacer análisis sobre los antecedentes históricos, asociativos y políticos; además de las relaciones que estas organizaciones tejieron con el bipartidismo, la iglesia, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA- y otras comunidades en el territorio.

Para comprender la dimensión y el alcance que tuvo la política de la influencia del movimiento afrodescendiente en la esfera de la política institucional, se estudiará el escenario pre constituyente de la ANC en donde las organizaciones afrocolombianas hicieron prevalecer la autonomía y la defensa de su identidad, ocasionando una ruptura con las viejas prácticas de la política bipartidista electoral y direccionando su propia identidad y demandas para influenciar en el juego político y en la institucionalidad.

De esta forma en el marco de la sociedad civil se abrió la puerta a un proceso de asociativismo de las comunidades negras que consolidó la organización política y el fortalecimiento de un nivel de participación jurídico-normativo en espacios locales, regionales y nacionales de la esfera pública política del país.

### **3.1 El Pacífico: escenario de lucha territorial identitaria de las comunidades afrodescendientes.**

La región del Pacífico en Colombia se ubica en el sur occidente del país, en el norte circunscribe con Panamá, en el sur con Ecuador, en el oriente con la cordillera de los Andes y en el occidente con el Océano Pacífico, sus ciudades más importantes son Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Este territorio posee una gran riqueza ecológica con una amplia diversidad hidrográfica, minera de oro, plata, platino y de reserva forestal, que se conserva bajo la figura de parques o reservas naturales, es uno de los lugares con mayor pluviosidad (4.000mm/anales), es territorio de asentamientos de la población afrodescendientes y hace parte del Chocó Biogeográfico<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Se denomina al área de conservación que se protege a través de la figura de Reservas ecológicas y Parques Nacionales, es interés de varias organizaciones internacionales y su objetivo es formar un pasillo de conservación ecológica desde Panamá hasta Ecuador. Geoestratégicamente en este corredor es donde se puede construir un canal interoceánico en el río Atrato y permita un mayor tránsito de barcos respecto al canal de Panamá

## MAPA N.º 1: Región del Pacífico.



Fuente: [http://tarabita-res-y-divaneos.blogspot.com/2011\\_02\\_10\\_archive.html](http://tarabita-res-y-divaneos.blogspot.com/2011_02_10_archive.html)

En correspondencia a la breve descripción geográfica anteriormente expuesta, los estudios de Castillo (2007) explican que la población afrodescendiente se ubica sobre el territorio del Pacífico en cinco grandes regiones: “1) las tierras bajas de litoral Pacífico; 2) norte del Cauca y Valle del Cauca; 3) zonas ribereñas del bajo y medio Magdalena y bajo Cauca; 4) litoral Atlántico, llanuras y sabanas; y 5) la Isla San Andrés y Providencia” (Castillo, 2007:173).

El poblamiento de la región del Pacífico por las comunidades afrodescendientes tiene su origen en la historia de la colonia y en el proceso de trata de esclavos que actuó como el factor de presión para que las comunidades negras buscaran refugio en las zonas ribereñas. De esta forma se configuró una cultura compuesta de prácticas y actividades productivas basadas en la extracción de recursos acuáticos, es decir, la forma de subsistencia de esta población fue y en parte sigue siendo la pesca, la agricultura de subsistencia, la minería artesanal y los diversos recursos de los bosques del Pacífico (Castillo, 2007:172).

Esta ubicación geográfica para las comunidades afrodescendientes supone implantación territorial con dinámicas organizativas que generaron procesos propios. Es así como Grueso y Rosero (2001) explican que en la región del Pacífico a finales de los años 80, en la región del Pacífico se desarrolló un proceso de identidades étnicas colectivas fundamentadas en la defensa del territorio. Lucha que alcanzó un gran esplendor con “la reforma constitucional mediante el artículo Transitorio 55 (AT55) de la Constitución Política de 1991, que garantiza a las comunidades negras el derecho colectivo sobre el territorio” (Grueso y Rosero, 2001:235).

En correspondencia, es preciso recordar que la sociedad civil colombiana de finales de la década del 80 se caracterizó por vivir un significativo proceso político donde convergió la pluralidad de nuevos sectores sociales con demandas específicas, que en la ampliación y desarrollo de sus luchas políticas, buscaron influenciar la esfera pública, llegando a la política institucional. Para efectos de lograr este objetivo, crearon diversas estrategias que tuvieron como finalidad hacer que sus luchas se posicionaran en la esfera de lo público.

### **3.2 La sociedad civil y la asociatividad de las comunidades afrocolombianas.**

La política de la influencia de las comunidades afrodescendientes en un primer momento se puede analizar con elementos presentes en los procesos asociativos: las formas de comunicación, las estrategias discursivas, las actividades educativas como elaboración de periódicos artesanales, charlas, foros y talleres en comunidades y universidades que hacían parte de la lucha por el reconocimiento y la identidad afrodescendiente.

En correspondencia el antropólogo Andrés Meza explica que:

los antecedentes de esta dinámica asociativa se gestaron en las décadas de los 70 y 80 con el encuentro de las distintas comunidades afrodescendientes, lo que generó enfoques, tensiones y rupturas, llevando a la reestructuración de procesos, demandas, discursos y luchas que fueron abriendo el camino a un proceso de organización con forma de movimiento, basado en aglutinar las demandas de las comunidades sin hacer que estas se despojaran de la esencia, las formas de organización y luchas tanto que fundamenta su autonomía político-territorial (No 06, 2014,entrevista)

La política de la influencia de las comunidades afrodescendientes de cara a la ANC tomó la forma de una estrategia que combinó un fuerte trabajo de movilización, deliberación de la sociedad civil y alianzas con otras fuerzas políticas para lograr la

aprobación del “Artículo Transitorio 55 dentro de la Constitución Política”, logrando que se reconociera y legitimara a nivel jurídico una serie de: exigencias socio económicas para vivir el reconocimiento identitario - cultural, la titulación de sus territorios y la participación-representación en escenarios de la política pública institucional.

El asociacionismo civil fue una de las formas empleadas por las comunidades negras para organizarse y emprender la lucha por sus demandas específicas sobre el territorio. Este asociacionismo es definido desde la perspectiva de Olvera (2003) como: “un grupo de individuos que voluntariamente unen sus acciones con un propósito común en un marco de pluralidad y respeto mutuo” (Olvera, 2003:33) y permite a la vez, analizar en detalle las dinámicas organizativas de las comunidades afrodescendientes en las últimas décadas del siglo XX.

Los primeros indicios de asociacionismo de las comunidades afrodescendientes se dan a finales de la década de los 70, con la formación autónoma de movimientos cívicos y culturales étnicos en la región del Pacífico. Agúdelo (2002) explica que estas formas organizativas fueron respuesta de las comunidades a las élites políticas por su monopolio administrativo en lo local, especialmente del Partido Liberal<sup>52</sup> que transformó la política de necesidades e intereses de la población a un simple sistema clientelar en la región del Pacífico (Agúdelo, 2002:75).

Hasta los años setenta

La política en la región del Pacífico fue bipartidista con poca presencia de partidos y movimientos de izquierda o alternativos, pero en la década de los 80, las expresiones de lucha y protesta fueron en parte iniciativas que surgieron de las discusiones de una nueva izquierda, que creó algunas organizaciones en Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Puerto Tejada y Guapi (Castillo, 2007:182).

Es así, como en los estudios de Castillo (2007) se puede apreciar que para ese momento la organización de izquierda con mayor presencia en la región del Pacífico fue: el Movimiento

---

<sup>52</sup> Esta adherencia de las comunidades negras al partido Liberal, se explica porque fueron los liberales los primeros en enfrentarse a los conservadores reclamándoles para que terminaran con el esclavismo. Posteriormente los liberales fortalecieron este vínculo a través del reconocimiento que ganaron con políticas hechas en sus gobiernos, como el aumento de maestros, obras de infraestructura, el levantamiento de restricciones del ejercicio del voto y la presencia de figuras políticas nacionales que visitaban la región. (Escobar; 1995: 76). Pero más tarde esta filiación se transformó en lógicas clientelares que se implantaron en las regiones.



Obrero y Revolucionario -MOIR- que centraba su discusión sobre “el papel de los negros en las luchas sociales” (Castillo, 2007:182).

Paralelo al surgimiento de procesos organizativos de izquierda, estaba la presencia de la iglesia católica que tenía un largo antecedente de trabajo con el enfoque de la Teología de la Liberación, guiado por el cura negro Gerardo Valencia Cano. Dicho trabajo consistió en contribuir a superar las condiciones socio-económicas de vida de las comunidades negras.

Desde esta perspectiva:

El Grupo Golcolda<sup>53</sup>, la Pastoral Afroamericana de la Teoría de la Liberación y el Centro de la Pastoral Indígena del Choco, también incidieron en la formación de las comunidades a través de una formación religiosa basada en predicaciones y trabajo educativo que ayudó a formar un discurso identitario de las comunidades afrodescendientes (Castillo, 2007:185).

El cual tenía como objetivo provocar que las comunidades se cuestionaran sobre relaciones establecidas en el entorno social; como el concepto discriminante de la nominación “negro” acompañado de la negación y la exclusión por gran parte de la sociedad y del Estado colombiano a finales de la década de los 70 (Castillo, 2007:185).

En la década de los 80 Agúdelo (2002) explica que la crisis de la política en la región del Pacífico se dio por las disputas internas que tuvo el bipartidismo entre sí, por los altos niveles de corrupción sobre todo en Quibdó y en el Chocó donde la élite política tiene una larga historia, esto ocasionó en la población de la región un profundo desencantamiento de la política y la pérdida de apoyo a los partidos tradicionales, en el marco de una reconfiguración económica en donde el Estado y varios sectores privados económicos empezaron a ver la región del Pacífico con intereses de proyección estratégicamente económica, que articulada mediante el discurso de la biodiversidad lograría el objetivo de generar planes de desarrollo para la región (Agúdelo, 2002:89)

En medio de este proceso modernizante, Agúdelo (2002) señala que desde el bipartidismo, nuevos actores y sectores renovadores de los partidos tradicionales, trataron de hacer efectivas las leyes modernizantes propuestas por el gobierno liberal Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) para beneficiar la región, pero los débiles resultados electorales

---

<sup>53</sup> Grupo creado a comienzos de la década de los setenta por el cura Gerardo Valencia Cano, conocido como el obispo rojo de Buenaventura (Castillo, 2007:185)

de estos actores fueron producto de la inestabilidad en los cargos, de tal manera que fueron casi nulos los logros para la región por parte de los legisladores (Agúdelo, 2002:89).

Estas expresiones de lucha y protesta de los años ochenta, Agúdelo (2002) las explica como una gran movilización cívica nacional, que tiene antecedentes en la lucha de sindicatos, organizaciones culturales, los maestros y el trabajo de la iglesia. “Protestas que le exigieron al Estado la prestación de servicios públicos y la defensa de los derechos vulnerados por el Estado y por empresas privadas” (Agúdelo, 2002:113). Pero estas formas de organización con el paso del tiempo y de la madurez política de su lucha, corrieron con la suerte de participar electoralmente según las alianzas que fueron estableciendo con otras fuerzas políticas para ser cooptadas o disueltas.

Los actores de estas nuevas alternativas políticas eran pobladores, dirigentes o activistas con experiencia sindical en lo rural y urbano, maestros organizados, estudiantes de bachillerato y universitarios profesionales de nivel económico medio, mujeres artesanas organizadas, indígenas, afrodescendientes, militantes de izquierda y disidentes de los partidos tradicionales.

Esta confluencia de actores permitió que los reclamos no fueran solo por la discriminación racial y la exigencia de servicios públicos, sino también por la descentralización del poder administrativo de los recursos económicos en manos de elites del liberalismo y del conservadurismo.

Sin embargo estos nuevos actores políticos carecían de influencia política regional y nacional, lo que obstaculizó su desempeño político en estos niveles, tan solo sus alcances de influencia política eran locales y tenían que enfrentarse a las antiguas prácticas electorales, a la fuerza del bipartidismo, al clientelismo y “la falta de garantías para un mejor ejercicio de la política” (Agúdelo, 2002:113).

Estos obstáculos que a su vez potenciaron el objetivo de las comunidades negras de pasar de la presencia y de la influencia en la esfera de lo local para pasar a la esfera pública de la política nacional, lo que obligó a las comunidades negras a pensarse otras formas organizativas que lograran cumplir con el objetivo de dar este salto de lo local a lo nacional en la menor tiempo posible.

**a) De movimientos cívicos a organizaciones locales: el proceso de asociatividad de las comunidades negras.**

De la década del 70 al 80 hay un cambio de actores, demandas y escenarios en donde se configuran las movilizaciones y las luchas afrodescendientes. Estas primeras formas organizativas locales afrodescendientes emergieron en la década de 1980 y fueron movimientos cívicos en donde se gestaron varios procesos organizativos tanto políticos, como sociales y culturales en diferentes regiones del país, los cuales colocaron grandes aportes al proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes para la siguiente década.

Estas organizaciones locales afrodescendientes que surgieron en la década de los 80, son casi todas de origen rural del Pacífico, con demandas étnico-territoriales que buscaban “reconocimiento como grupo étnico y reclamaban el derecho a la titulación colectiva”. Los casos más emblemáticos fueron; el de Guapi, en el departamento del Cauca, donde en la década del 70 surgió el Movimiento de Integración de los Pobres para el Desarrollo, que luchó contra la clase política tradicional y las malas administraciones del poder local” (Agúdelo, 2002:113).

En el norte del Cauca desde 1975 se gestó un proceso de asociacionismo pro defensa a los derechos ciudadanos (Olvera,2003:36), es decir,incrementar la política y ampliar la participación en la sociedad basado en hacer exigencias de servicios públicos, vivienda y vías de comunicación. Este proceso logró participar en escenarios de la política electoral, pero más tarde perdió todo apoyo por el desprestigio electoral al ser comparado su proceso con la política clientelista del liberalismo (Agudelo,2002:83)

En Buenaventura simultaneamente en 1978 surgió la “Organización Liberal de Avanzada -OLA-<sup>54</sup>, que se denominó un movimiento renovador de las costumbres políticas y consiguió un importante impacto a nivel electoral al obtener durante en dos periodos consecutivos, concejales que le permitieron a la organización moverse con mayor libertad política”. Los dirigentes eran militantes del liberalismo oficial de esta región y posteriormente esta organización se disolvió por contradicciones en el ejercicio de su liderazgo.(Agúdelo, 2002:113)

---

<sup>54</sup> Esta organización estuvo dirigida por Harrinson Campaz, ex dirigente de la Juventud comunista colombiana, sindicalista y formador de líderes del sindicato de Colpuertos.

En la década de los 80 el caso más relevante fue el de Tumaco. Los estudios de Hoffmann (1998) explican al respecto, que fue una de las experiencias organizativas conocida como la cooperativa “coagropacífico” la cual se caracterizó por tener una alta capacidad de reunir a varios productores rurales que abarcaban el territorio de cinco ríos en el noreste de Tumaco, que más tarde se organizaron en el “Movimiento Minga” (Agúdelo, 2002:115).

Estas luchas en Tumaco tenían un componente diferente y particular; utilizaban el currulao<sup>55</sup> como estrategia para manifestar sus inconformidades, demandas de salud y educación. Con esta forma de protesta se fue articulando la demanda por la identidad afrodescendiente y se profundizó sobre el reconocimiento específico en torno a la cultura y la identidad de las comunidades de la región hasta llegar al punto de hacer fuertes movilizaciones que paralizaban el puerto del sur de Colombia, simplemente para obtener respuestas a estas demandas (Castillo, 2007:191).

Al mismo tiempo en Buenaventura se crearon las “Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos y un grupo de apoyo al alcalde que se llamó -Movimiento de Integración Social del Pacífico- (MISPA), con el interés de renovar las formas de organización popular amplia en la gestión y de aplicar descentralización sobre la participación”. (Agúdelo, 2002: 117). Para lograr estos objetivos el movimiento realizó acciones de capacitación sobre la descentralización y organizaron Juntas Administrativas Locales -JAL- fortaleciendo la participación electoral (Agúdelo, 2002: 117).

En la misma década en Chocó la emergencia de procesos organizativos afrodescendientes se dieron por la tensión con las multinacionales, puntualmente por la gran extensión de territorios baldíos en donde se practicaba la explotación intensiva de la madera, extracción que puso en peligro la estabilidad socio-económica de las comunidades afrodescendientes y su identidad debido a la devastación de sus territorios ancestrales.

Frente a esta situación se organizaron los pobladores del territorio en la Asociación Campesina Integral del Bajo Atrato -ACIA- (Castillo, 2007:186). “Esta organización surgió con el apoyo y la orientación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) que buscaban realizar un trabajo similar con comunidades afrodescendientes, igual al trabajo que ya se había adelantado con las comunidades indígenas del Chocó” (Castillo, 2007:186).

---

<sup>55</sup> Ritmo musical folclórico que hace referencia a la palabra “cununao” la cual evoca los tambores de origen africano y juega un importante papel dentro de lo autóctono de la región pacífica.

Es así como en 1988 un grupo de líderes afrodescendientes que hacían parte de la ACIA, se apoyaron en los acuerdos internacionales, como el convenio 107 de la OIT y la ley 31 de 1997 y realizaron al Estado una demanda territorial solicitando que a las comunidades afrodescendientes se les considerará como autóctonas por su especificidad cultural, lo cual otorgaba mayor autoridad a estas comunidades para reclamar “el derecho a la propiedad del territorio que han ocupado ancestralmente” (Castillo, 2007:187).

En correspondencia Castillo (2007) explica que desde 1989 se dan relaciones interétnicas entre indígenas y negros, particularmente con indígenas del Cauca que en luchaban “por la recuperación del territorio y la ampliación de los resguardos. Estos indígenas se agruparon en la organización regional Emberá Wounaan -OREWA- y los negros en la Asociación Campesina del Río San Juan – ACADESAN-”. Ambas formas organizativas demandaron al Estado la titulación de un amplio territorio indígena-afrodescendiente, donde se reconocieran las tierras de ambas comunidades en una sola legislación particular que protegiera sus derechos y les permitiera ser autónomos sobre este territorio denominado por estas organizaciones como bi-étnico (Castillo, 2007:189).

La convergencia de estas dos organizaciones y su experiencia tanto organizativa como de lucha por el territorio, fue un referente fundamental para que posteriormente surgieran procesos organizativos como:

La Organización de Campesinos del Baudó -ACABA-, la Organización de Campesinos del Bajo Atrato -OPOCA-, la Organización Popular del Alto Baudó y de la Asociación Campesina del Alto de San Juan -ASOCASAN; organizaciones que más tarde se convirtieron en los componentes de las mesas de trabajo del Chocó (Castillo, 2007:188).

Estos son algunos referentes organizativos del cómo se inició la estructuración del movimiento social de comunidades afrodescendientes que en el proceso previo a la constituyente, se llamó temporalmente “El proceso de comunidades negras”. Estaba sustentado en el encuentro de varias formas organizativas locales que provenían de diferentes municipios de la región del Pacífico, que ya existían desde la década de 1970 y 1980 como lo explica Agúdelo (2002) y lo definió como:

Un conjunto de organizaciones con sus respectivas bases sociales, que desarrollaron acciones colectivas en función de reivindicaciones sociales, económicas, políticas y culturales, instrumentalizando como factor cohesionador y legitimador fundamental una identidad étnica negra o afrocolombiana común. Para el caso que nos ocupa, el «núcleo duro» del movimiento social lo constituyen los grupos de pobladores negros de la

región rural del Pacífico colombiano, sin embargo las expresiones urbanas de organizaciones de activistas negros y de otras regiones del país también se consideraron parte integrante del movimiento social. Sus reivindicaciones y métodos de movilización pudieron coincidir o ser divergentes pero el factor que los unifica es su reivindicación como pueblo negro o afrocolombiano diferenciado no solo racial sino ante todo culturalmente del resto de la sociedad (Agúdelo, 2002:118).

Paralelo a este proceso de acción política, como lo explica Castillo (2007), “la iglesia católica desarrollaba acciones educativas con la población, estas actividades educativas estaban influenciadas por las luchas del movimiento negro de Estados Unidos y la teología de la liberación, más el apoyo de ONG internacionales como -Plan Padrino-<sup>56</sup>”. La iglesia creó procesos juveniles en Buenaventura siendo uno de los más reconocidos la conformación de núcleos juveniles como “Juventud Quinientos” quienes realizaron actividades para solucionar problemas de alimentación y vivienda de la población, procesos que hasta la actualidad se encuentran vigentes. (Castillo, 2007:190).

De manera general este es el mapeo de las primeras formas asociativas de las comunidades afrocolombianas que surgieron en la región del Pacífico Colombiano entre la segunda mitad de los 70 y antes de los mediados de los 80. Organizaciones ubicadas en el Cauca como la ACIA, ASOCASAN, OBAPO, OREWA Y ACADESAN son parte el antecedente de las primeras manifestaciones organizativas que desde sus posibilidades respondieron a problemáticas socio-económicas, territoriales y culturales. Sus acciones políticas, fueron particularmente desplegadas en los micro-espacios locales y de forma desarticulada, generando experiencias y debates sobre la territorialidad, la identidad afrodescendiente y sobre la configuración de lo étnico. (Ibíd., .p.188)

Estas formas organizativas fueron las que posteriormente sirvieron como referentes organizativos y políticos para crear y abrir procesos organizativos como la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN) y posteriormente para buscar participación y representación política afrocolombiana en el proceso constituyente de 1991.

---

<sup>56</sup> El trabajo de esta ONG era “dar asistencia a niños víctimas de los demás conflictos bélicos. Se implantó en Colombia en 1962 en Bogotá y fue Monseñor Valencia Cano quien hizo que lo establecieran en Buenaventura”. (Agúdelo, 1999:56)

**b) El movimiento Cimarrón: una lucha étnico-racial que los diferenció culturalmente del proceso de territorial e identitario de las comunidades negras.**

Este movimiento tiene origen en la década del 70 cuando Juan Zapata Olivella<sup>57</sup> se postuló al Concejo de Cartagena. Posteriormente en 1975 este líder afrodescendiente participó como “candidato presidencial a nombre del Movimiento Negritudes y Mestizaje”, pero en la votación no logró un respaldo importante. Este movimiento desarrolló un trabajo educativo en distintas partes del país, creando círculos de estudios integrados por intelectuales y estudiantes afrocolombianos. Ejemplo de ellos fueron, el centro para la investigación de la cultura negra, junto a la publicación del periódico -Presencia Negra-, la creación de la fundación colombiana de investigaciones folclóricas, el centro de estudios afrocolombianos, el centro de estudios -Franz Fanón- y el centro de estudios -Soweto- que más tarde se convirtió en el -Movimiento Cimarrón- (Agúdelo, 2002:122).

Un segundo momento que influyó en el proceso de formación del proceso de comunidades afrodescendientes se reconoce con “el surgimiento del Movimiento Cimarrón. En 1976, estudiantes afrodescendientes de la Universidad de Pereira, encabezados por Juan De Dios Mosquera crean el Círculo de estudios -Soweto- que en 1982 dio origen al Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Negras en Colombia -Cimarrón”. Los objetivos de este movimiento son: educar para crear conciencia en las comunidades afrocolombianas, reivindicando su etnicidad con vocación de poder político. La influencia política de este movimiento retoma parte de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos y la lucha anti-Apartheid de Sudáfrica (Mosquera, 1998: 24).

Este movimiento se propone los siguientes objetivos: 1) conquistar y exigir el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes de Colombia mediante su educación y organización; 2) rescatar, realizar y desarrollar la identidad étnica, histórica y cultural afrocolombiana y; 3) formular y concretar proyectos de etnodesarrollo que mejoren la calidad de vida de las comunidades negras (Cimarrón, 1992:229). Esta organización fue una de las pioneras en reivindicar el tema étnico-racial del pueblo afrocolombiano.

---

<sup>57</sup> Hermano del intelectual negro Manuel Zapata Olivella.

La población afrocolombiana construyó y participó activamente de movimientos con otros tipos de demandas como: las del movimiento campesino, las del Movimiento Cimarrón, las protestas cívicas por las condiciones de la población que no necesariamente eran reivindicaciones del orden étnico-racial, sin embargo se debe reconocer que estas luchas más tarde fueron importantes para la construcción del Movimiento Afrocolombiano durante y después del proceso constituyente.

Un tercer momento de la formación de la identidad negra como lo explica el Antropólogo y catedrático Eduardo Restrepo, “comienza con el proceso organizativo en la coyuntura de la constituyente, creándose un escenario de encuentro para las diversas formas y expresiones organizadas en distintos puntos del territorio”(No 5, 2014, entrevista). Aquí se inicia con un proceso de articulación más amplia de escenarios pre-constituyente con asambleas deliberativas, de grupos y organizaciones dispersas que se fueron conociendo y articulando de acuerdo al objetivo de sus luchas, demandas, acciones y procesos organizativos. Dicho proceso de convergencia organizativa fue vital para definir el proceso de comunidades afrodescendientes con objetivos y orientación política clara, para dar un salto hacia lo nacional desde los procesos organizativos locales.

Estos procesos, como lo explica el militante de base del PCN Jair Mena:

Con el paso del tiempo fueron articulados con luchas que organizaban las comunidades afrodescendientes por el territorio y que también tuvieron que ver con: 1) el terremoto en la zona de Guapi en donde el gobierno destino un programa de asistencia para atender los desastres causados por el sismo en la década de los 80 ; 2) en el caso del Chocó, el proyecto de Desarrollo Integral Agrícola Rural -DIAR-<sup>58</sup> que fortaleció procesos con las comunidades estimulándolos a crear formas de organización asociativas para enseñarles conocimientos y manejo de tecnologías que mejoraran la producción alimentaria y las condiciones económicas como la organización “FECUIA” que reunía los pequeños arroceros del Medio Atrato, y, 3) El trabajo de los grupos misioneros eclesiales de base que organizaron procesos como los de: ACIA, OBAPA, ACADESAN, ACABA Y OCABA, aliándose con procesos indígenas como el de la OREWA que trabajaron en conjunto por la defensa del territorio (No 03, 2014, entrevista).

De esta forma las comunidades afrodescendientes en su lucha por el territorio no solo generaron expresiones organizativas, demandas colectivas, protestas y movilizaciones,

---

<sup>58</sup> Fue un proyecto de cooperación técnica Internacional enmarcado en políticas de desarrollo, con presencia de organismos internacionales como la comunidad Económica Europea y Holanda.



sino que colocaron en juego un amplio conjunto de elementos, estrategias y experiencias de trabajo organizativo que ya se habían desarrollado en el trabajo con comunidades. Conocimientos y estrategias que funcionaron como el puente de tránsito para tomar los elementos y los procesos de la organización en el trabajo local e ir de esta forma transitando a un escenario de lucha política a nivel regional.

Producto del proceso organizativo como lo narra Libia Grueso intelectual y actual asesora en DDHH de las comunidades afrodescendientes ante la ONU.

Fueron los procesos educativos con los jóvenes, polizones<sup>59</sup>. Al igual que Jair Mena explica que fue de gran aporte para el proceso organizativo: las reflexiones con asociaciones mineras en Buenaventura, los proyectos comunitarios en los barrios con las familias, la formación de comunidades eclesiales (CEB) de base en Quibdó, la construcción de ejes de lucha “identidad” y “territorio” a través de construir tejido comunicativo con estrategias como programas de radio, periódicos artesanales de difusión local con información sobre el trabajo urbano pro conciencia de la inequidad social y sobre las condiciones de servicios de los pobladores ( No 01 y 03, 2014, entrevistas)

Es así como en ese contexto, varios sectores de comunidades afrodescendientes se fueron distanciando de las discusiones de discriminación racial que proponía el Movimiento Cimarrón especialmente de los círculos de estudio en Quibdó y Pereira, ya que se empezó a posicionar con mayor fuerza la lucha por el territorio en el Pacífico y su titulación colectiva.

En estos procesos Jair Mena enfatiza en que: “la formación educativa fue de gran importancia para fortalecer y orientar el debate sobre las problemáticas locales de las comunidades afrodescendientes, cuestionando el papel del Estado colombiano frente a las comunidades negras” (No 03, 2014, entrevista). Paralelo a estos debates estaba el conflicto con las empresas madereras y la extracción minera en el Pacífico, que contribuyeron a consolidar la demanda y el discurso por la defensa del territorio, convirtiéndose más adelante en una de los ejes concretos de lucha para las comunidades negras.

---

<sup>59</sup> Libia Grueso menciona que la forma en cómo inicialmente se acercó a las comunidades afrodescendiente fue a partir del trabajo con polizones que querían hacer realidad el sueño norteamericano, a cambio de esto los grupos eclesiales de base hacían actividades para mejorar la situación económica de los jóvenes evitando que migraran a EEUU (No 01,2014,entrevista)

Jair Mena también explica que en esta coyuntura

Desde el ámbito normativo-jurídico, legalmente solo había una ley que protegía el territorio, la ley segunda de 1959<sup>60</sup>, que produjo desplazamiento territorial, conllevando a procesos de invasiones dirigidas por las comunidades, desde Antioquia, Valle, Caldas, Urabá hacia el departamento del Chocó a causa de que los pobladores asentados sobre estos territorios no tenían ningún título que los acreditara como dueños, así tuvieran décadas de estar viviendo en esos territorios (No 03, 2014, entrevista).

Este proceso de organización se focalizó en la región del Pacífico con demandas específicas y formas particulares de trabajo con las comunidades. Tal dinámica que se transformó en el momento en que el gobierno, las fuerzas políticas y los sectores sociales del Estado Colombiano plantearon la reforma constitucional.

Para entender con mayor profundidad como se da esa transformación del proceso organizativo de demanda particulares de las comunidades afrodescendientes a la participación en el proceso constituyente, se analizarán aspectos de la política de la influencia que fueron fundamentales para que las comunidades afrodescendientes incidieran en el proceso constituyente.

### **3.2.1. La política de la influencia: de la heterogeneidad asociativa al escenario pre constituyente.**

Desde la perspectiva de Olvera (1999) para poder entender la naturaleza de los espacios y los escenarios de encuentro en donde se produce la deliberación, los debates y las propuestas es necesario profundizar sobre la discusión de la esfera pública, particularmente comenzando con entender la naturaleza de las micro -esferas públicas. Desde este enfoque los espacios primarios de comunicación se denominan micro-sociológicos y se caracterizan por su amplia diversidad, que va desde “los cafés y lugares de encuentro casuales, pasando por las asambleas formales de organizaciones sociales y civiles, o las reuniones políticas o académicas, mítines, etcétera” (Olvera, 1999: 70)

Estas micro-esferas son para los actores una elección voluntaria acorde a los intereses personales buscan como objetivo la tolerancia, la crítica y el consenso. Convirtiendo estas micro-esferas en los lugares en donde se interpretan los mensajes

---

<sup>60</sup> Esta ley controla el desarrollo de la economía forestal constituida por "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", bajo el decreto legislativo número 2278 de 1953 que protege territorialmente la zona de reserva forestal del Pacífico.

externos de la sociedad local. Existen otros micro-espacios funcionales como lo son los ámbitos: profesionales, empresariales, académicos y políticos, que siguen un modelo normativo de la igualdad, basado un lenguaje con códigos, símbolos y reglas propias, que facilitan la apertura al consenso y el ponerle fin al debate, creando de esta forma un ambiente de aprendizaje a la tolerancia, la crítica y el consenso entre los actores (Olvera, 1999:71).

En el caso de estudio, la conformación de las micro - esferas públicas se potencio, cuando a mediados de 1990 el gobierno nacional hizo pública la convocatoria a todos los sectores de la sociedad civil para participar y estar representados en la ANC. Frente a esta iniciativa política, las comunidades afrodescendientes emprendieron acciones de difusión de sus demandas, municipio por municipio, logrando realizar encuentros en donde la diversidad de comunidades afrodescendientes presentó sus demandas sobre sus problemáticas cotidianas en sus territorios y el problema de la identidad.

El encuentro del proceso asociativo pre constituyente de las comunidades afrodescendientes se dio entre diversas organizaciones, donde se encontraron cuatro tendencias distintas: “1) el campesinado negro chocoano desagregado en organizaciones locales; 2) el sector Pacífico sur y de Buenaventura que reivindicaba la identidad cultural; 3) el sector de la Costa Atlántica de influencia marxista y; 4) organizaciones con tradición partidista que defendían la ideología liberal” (Castillo, 2007:212). En estos encuentros pre-constituyentes, el debate giró en torno a la defensa de lo territorial ya la elección de un candidato propio para la ANC.

En este proceso inicialmente líderes interesados que vieron la oportunidad política a través de la convocatoria a la ANC, hicieron un primer encuentro en la ciudad de Cali para la conferencia pre-constituyente de las comunidades negras en agosto de 1990, que luego se intentó replicar en Buenaventura y Quibdó. “El propósito que tenían con ese espacio era elaborar una propuesta conjunta de acción de las comunidades afrodescendientes para darse a conocer de manera nacional como un sector que también hacia parte de la sociedad colombiana” (Grueso y Rosero, 2001: 23). Como lo explica Castillo (2007) "ante la iniciativa del gobierno se da la reunión de varios de estos núcleos en la conferencia pre constituyente. En esta reunión hay presencia de ONG que impulsaron este proceso organizativo” (Castillo, 2007:194)

Es así, como las organizaciones afrodescendientes iniciaron su aparición en la esfera pública como un proceso de comunidades negras claramente heterogéneas. En este encuentro convergieron de forma dispersa varias agrupaciones y organizaciones con demandas para buscar mejores condiciones de vida, buscar el reconocimiento de la identidad, el derecho al territorio y el acceso a la participación en la esfera de la política institucional. Lo que desde la perspectiva de Olvera (1999) se explica como:

La naturaleza de los micro - espacios se determinan por el tipo de asociación civil y práctica social con las que corresponde lo que explica su potencial. [...] Los llamados nuevos movimientos sociales se constituyen también en principio en redes primarias y encuentros cara a cara, para luego buscar la aceptación entre sectores sociales de sus principios y valores (Olvera, 1999:72).

A partir de interactuar con los delegados de las diversas organizaciones presentes en estos escenarios, Castillo (2007) indica en sus estudios que “el encuentro de la asamblea pre constituyente en Cali se realizó con cerca de 300 delegados y más de 120 organizaciones que con múltiples argumentos se identificaron en este escenario como núcleos que hacían parte de la identidad de lo negro” (Castillo,2007:212).

En correspondencia en este proceso de participación política, Castillo (2007) explica que en medio de los escenarios deliberativos y de la discusión pre-constituyente, se conoce el potencial de la dirigencia afrodescendiente, seguido por un amplio ejercicio de deliberación y debate en relación a lo étnico. El proceso de comunidades negras o afrodescendientes participó posteriormente en el escenario electoral para tener un constituyente que defendiera la particularidad de su identidad, que desde la perspectiva de Olvera (1999) posee un gran potencial por tener los siguientes elementos:

Un encuentro cara a cara tiene normalmente un carácter estratégico. Los participantes en estos espacios parten del reconocimiento de una situación de desigualdad, tanto cultural como de poder. Por tanto, el diálogo es frecuentemente un mero monólogo. Con todo, en muchas ocasiones tales encuentros pueden derivar en la transmisión de un capital cultural u organizativo." En esta dirección se orientan también algunos proyectos de participación ciudadana en el ejercicio del gobierno y puede afirmarse que hay diseños institucionales que facilitan este tipo de interacción (Olvera, 1999:72).

En el caso de las comunidades negras y su influencia en el proceso conastituyente de 1991, es particular porque al activarse su accionar, crearon microespacios en donde se dio el

encuentro, intercambio, deliberación y debates de símbolos, lenguaje y cultura que produjo el sentido y la reafirmación de la existencia de los espacios grupales y locales. Estos espacios en el proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes fueron vitales porque eran el primer espacio de socialización donde se tejían valores y principios basados en identificar los problemas particulares de las comunidades, reconocer las causas y los actores de estos problemas y frente a estos construir redes de solidaridad sustentados en la comunicación, la lealtad, la tolerancia, el disenso y la diferencia de intereses, escenarios que posibilitaron la igualdad de la participación política de los asistentes que iban a estos encuentros.

Es así como los microespacios fueron base fundamental para configurar la identidad de las comunidades afrodescendientes, porque fue la micro esfera pública en donde circularon y se intercambiaron las demandas y los principios de cada comunidad en particular, lo que a su vez no solo produjo la deliberación sino agendas de trabajo y de acción con la población en cada territorio, desarrollando potentes mecanismos de organización y poder como lo son las redes de comunicación.

### **3.2.2 Redes comunicativas.**

Al interior de los escenarios de encuentro y deliberación se crean redes de relaciones activas, que como lo explica Avritzer (1999) “permiten a los actores plantear problemas, tematizar cuestiones y colocar en la esfera pública las decisiones que se toman previamente por los actores que participan. Este ejercicio a la vez permite que un movimiento social se pueda diferenciar en la esfera de lo social de las esferas sistémicas como el Estado y el mercado, estableciendo límites antes no existentes entre uno y otros”. (Avritzer, 1999: 83)

Desde esta perspectiva entender los escenarios locales donde las comunidades afrodescendientes desarrollaban sus trabajos comunitarios y sus procesos educativos, pasa por analizar las formas cómo se convocaron las asambleas y cómo se crean y se crean los mecanismos de comunicación. En el caso de las comunidades afrodescendientes durante el proceso de convocatoria a las asambleas pre-constituyentes, hubo ciertos problemas como la fluidez de la comunicación.

Carlos Cardona militante de base del temporal proceso de comunidades negras, explicó que cuando se estaba gestando el proceso constituyente, es decir, a mediados de los

80 el mecanismo que utilizaron las comunidades afrodescendientes para construir y tejer vías de comunicación fue:

Enviar la información a través de correos humanos y telegramas de las ciudades a los lugares más recónditos de las comunidades rurales y de la selva. Eran razones o enmiendas que se les denominaba postas o mensajes de comunidad a comunidad a través de un correo humano mensajero confiable. Al llegar el correo humano al lugar que se había señalado, se necesitaba que esta persona se quedará allí durante el tiempo que fuera necesario, ya fuese en un municipio, vereda o zona ribereña. El líder encargado tenía que partir desde la ciudad, entrar en el municipio y adentrarse, a paso o en canoa a varias horas de camino por la selva o por los ríos, para llegar al lugar donde estaba asentada la comunidad y allí convocar a asamblea a quienes estuviesen interesados. Se hacía la difusión de la información a partir de campañas informativas dirigidas a la comunidad, la población, los movimientos, grupos, asociaciones comunitarias, rurales, barriales. Los sitios de encuentro y deliberación generalmente eran las escuelas, hospitales, barrios, el SENA<sup>61</sup>, universidades, empresas y en la calle” (No 07, 2014,entrevista)

En correspondencia Carlos Cardona explicaba que: ”estas actividades tardaban mínimo quince días como parte inicial de procesos que podrían tener o no éxito en lo organizativo y en la participación política. “Difundir la información, consistía en hacer el proceso de hablar, sensibilizar, convencer y esperar a que se diera el espacio de deliberación en donde la comunidad discutía y creaba una demanda que luego enviaban con el líder de regreso a las discusiones de las asambleas pre-constitucionales” (No 07, 2014,entrevista).

De estos encuentros locales surgió más tarde la necesidad de hacer un encuentro más amplio que involucrara la presencia y las demandas de las asambleas que estaban localmente dispersas. De la redes de comunicación que se tejieron al difundir las demandas surgieron los meso-escenarios como la conferencia denominada La Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN) como la forma organizativa de coordinar y poner en marcha las acciones acordadas en la conferencia, pero además como el escenario para tejer redes de comunicación a nivel regional (Grueso y Rosero, 2001:23).

Jair Mena explicó que para llegar a establecer estos espacios:

Algunos líderes que habían trabajado en procesos con las comunidades afrodescendiente propusieron:1) la necesidad de hacer difusión y encuentros en el territorio cercano donde normalmente desarrollaban su trabajo con las comunidades afrodescendientes y; 2) observaron la

---

<sup>61</sup> Institución Educativa de formación técnico denominada Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

necesidad de tener mayor amplitud y empezaron a viajar de un municipio a otro con recursos económicos de su propio trabajo o donados por sus compañeros para difundir la información de la convocatoria y conocer las demandas de las comunidades afrodescendientes (No 03, 2014, entrevista).

La asamblea desde la perspectiva de Carlos Cardona fue:

Una estrategia fundamental en cada municipio, vereda y zonas ribereñas, porque permitió hacer real el encuentro de líderes y pobladores interesados en discutir las problemáticas de sus contextos: Estas reuniones o pre- asambleas en el caso de Buenaventura tuvieron el nombre de la TONGA<sup>62</sup> o la MINGA<sup>63</sup>, allí se realizaron los debates y deliberaciones para proponer tanto las demandas como para elegir un candidato que los representará en la ANC. Para esta actividad, un conjunto de líderes fueron los voluntarios responsables de movilizarse a las zonas más apartadas de las cabeceras municipales para llevar a cabo el objetivo de llegar a los espacios y empezar en conjunto con las organizaciones o sin ellas a generar comités territoriales de campesinos afrodescendientes en las inspecciones, veredas, ríos, y zonas fluviales (No 03, 2014, entrevista).

Es así como, las redes de comunicación en el proceso organizativo de las comunidades afrodescendientes aunque no fue un mecanismo con la fluidez que permitiera que la información se difundiera en el menor tiempo posible para reducir el costo y el desgaste del proceso organizativo para llevarlo de una manera rápida y sin obstáculos al nivel de consolidación como movimiento social.

Sin embargo se puede decir que en medio de esta fluidez parcial, los líderes y las bases sociales desafiaron este obstáculo creando un tejido comunicativo con elementos mínimos pero muy valiosos como, utilizar lo simbólico de cada comunidad, lo identitario, en medio de mínimas y autónomas condiciones económicas para trasladarse en el territorio y a la vez utilizaron de forma estratégica herramientas y trabajos educativos previos para difundir y democratizar la información, posibilitando hacer real la igualdad en la participación política.

---

<sup>62</sup> Simbólicamente las comunidades acuñaron este nombre a los espacios deliberativos, haciendo referencia a un acuerdo que hacen los mineros artesanales en la labor de extracción del oro en los ríos, esta práctica consiste en dirigir el oro hacia un solo lugar de recolección y cuando se termina la jornada laboral, se divide la cantidad total recogida en partes iguales a los mineros que extrajeron el oro. (No 07, 2014, entrevista)

<sup>63</sup> Al igual que la tonga es una práctica que se desarrolla pero con cultivos en las haciendas, en donde por orden se va trabajando en el terreno de un afrodescendiente y cuando se termine con el trabajo se pasa a la siguiente hacienda y de esta forma de manera colectiva se suman fuerzas para cultivar en los territorios de la comunidad. (No 07, 2014, entrevista)

### **3.2.3. Influencia de las comunidades afrodescendientes en la esfera pública y en la opinión pública: el salto de lo local-regional.**

Abordar este análisis implica conocer la esfera pública, desde la perspectiva de Habermas (1996) está se define como:

[...] en sociedades complejas la esfera pública consiste en una estructura intermediaria entre el sistema político, de un lado, y los sectores privados del mundo de vida y los sistemas funcionales, del otro. Representa una red altamente compleja que se extiende en una multitud de arenas internacionales, nacionales, regionales, locales y sub culturales, las cuales interceptan especificaciones funcionales, focos temáticos, campos políticos y otros factores proveen los puntos de referencia para la diferenciación sustantiva de las esferas públicas, que son, sin embargo, accesibles a los lejos (Habermas,1996, p. 374).

En correspondencia Olvera (1999) explica que el campo de la esfera pública se caracteriza por tener una amplia diversidad de escenarios de encuentros como los foros, donde se da la interacción de los actores, intercambiando información y puntos de vista, activando de esta forma una característica propia fundamental de la acción comunicativa que remite al análisis de la producción de espacios sociales a partir del dialogo, la interacción y la co presencia (Olvera, 1999:70)

El análisis de las estructuras de comunicación que se crean en lo público, según Olvera (1999), implican la posibilidad de apertura al dialogo de todos los que participen, bajo la norma de funcionamiento de una comunicación dialógica y continua para que se lleve a cabo una interacción de contacto entre los participantes y también se dé permeabilidad en los encuentros o escenarios atravesando múltiples arenas, símbolos y conocimientos producidos en estos espacios públicos a otros espacios públicos donde lo ideal sería que se valoren, se interpreten y se cuestionen. (Olvera,1999:70)

El proceso de la influencia de las demandas locales, dispersas y particulares de las comunidades negras hacia la esfera pública en el nivel regional, inicio con el hecho de crear comités territoriales y veredales que durante el proceso fueron fortaleciendo organizaciones como la OBAPO en Quibdó y Nuqui. La ACIA<sup>64</sup> en el Atrato y en San Juan.

---

<sup>64</sup> Las tensiones entre organizaciones como ACIA y ACABA se dieron por que la ACIA tenía una fuerte financiación económica, el Acuerdo de Buchado, el apoyo del proyecto DIAR y al teología de la liberación en disputa con la ACABA la cual no poseía sino unos intelectuales que realizaban viajes con recursos de sus propios (No 06, 2014, entrevista).



Desde la perspectiva de Olvera (1999) los espacios locales o micro-espacios son los escenarios en donde se desarrollan las formas de sociabilidad primaria donde se construye la solidaridad y la lealtad básica que pueden generar procesos de defensa y lucha desde las demandas locales hasta llegar a las universales (Olvera,1999:71)

En el nivel de lo local es donde se sitúa la formación y reproducción de identidades como la constitución de las bases de los nuevos movimientos sociales, que al mismo tiempo funcionan como la base de los foros en donde se interactúa, se crítica, se busca el consenso y la práctica social que se establezca, permite determinar la naturaleza del espacio, es decir, si corresponde a un micro, meso o macro público.

Desde esta perspectiva Olvera (1999) explica que:

Aquellas asociaciones con fines privadas (clubes, vecinos, la mayoría de los grupos religiosos) normalmente reproducen valores conservadores y no tienen una capacidad crítica, y los llamados nuevos movimientos sociales se constituyen también en principio en redes primarias y encuentros cara a cara, para luego buscar la aceptación entre sectores sociales de sus principios y valores (Olvera,1999:72)

En el caso del proceso de las comunidades afrodescendientes visto inicialmente como un proceso de asociación entre vecinos en algunos sectores, o asociación entre vecinos y la iglesia, o asociaciones entre iglesia y organizaciones que tempranamente demandaban intereses particulares que luego se fueron descentrando para moldear un proceso de participación y organización que pasará de la esfera local o los micro-espacios a la meso-esfera pública.

Jair Mena lo explica como:

Un proceso de articulación con actores e instituciones de la educación superior, que dieron un gran aporte por parte de los estudiantes de universidades de la capital que estaban realizando investigaciones con comunidades en esta región para el departamento de antropología de la Universidad Nacional de Bogotá.<sup>65</sup> Estos estudiantes participaron activamente como aliados locales y regionales durante los comités veredales compartiendo sus conocimientos y participando en las discusiones, lo que propició que se organizaran mesas de trabajo según las necesidades de las comunidades, es decir de salud, educación y

---

<sup>65</sup> Uno de los estudiantes más interesados en ese momento y que ahora es reconocido por sus estudios académicos sobre el movimiento es Jaime Arocha, quien desde ese momento se interesó por hacer aportes a la organización y los procesos de organización de las comunidades negras y del actual movimiento social afrodescendiente.

alimentación, y de esta forma se creó una forma alternativa para solventar los problemas de la comunidad (No 03, 2014, entrevista).

Jair Mena también explica que:

En estos comités se produjo con la comunidad cartillas informativas que contenían la plataforma de lucha por el territorio. Estas cartillas surgieron de la pregunta que los líderes se hacían frente a la distribución del territorio de cara a la constituyente. Ellos se cuestionaban acerca de: ¿Cómo legalizar el territorio para las comunidades afrodescendientes que habían estado toda la vida en ese territorio? A partir de esta pregunta no solo se trabajó con cartillas sino que las comunidades afrodescendientes realizaron ejercicios de cartografía social impulsados desde la organización OREWA que aportó todo el conocimiento territorial desde lo indígena y desde la OBAPO que compartió el conocimiento centrado en los procesos de poblamiento, la relación entre lo rural-urbano y el análisis sobre el tipo de poblador que se adaptó a este territorio (No 03, 2014, entrevista).

Este se puede catalogar como el primer momento en donde la información comienza a ascender de lo local a lo regional, siendo esta la forma en cómo se hizo difusión de la información. Explicación que desde la perspectiva de Libia Grueso la describe y complementa como:

Una propuesta fue construyendo de manera dispersa una visión integradora de la identidad que se fundamentó a partir de las prácticas sociales y culturales de las comunidades negras, defendiendo tanto los derechos como creando identidad política. Este ejercicio se hizo desde la posición de hablarles como negros a las comunidades y no como obreros o campesinos, lo que dignificó el pueblo afrodescendiente y su lucha por el territorio” (No 01, 2014, entrevista).

Puntualmente las demandas giraban en torno al reconocimiento de la identidad negra, la organización y movilización para lograr la titulación del territorio colectivo a la par de fortalecer la identidad siempre en relación a la ANC.

### **3.3 La incidencia política en el proceso constituyente.**

En medio de este proceso la formación de los actores tiene un rol importante, porque cobra valor el previo trabajo de las organizaciones y líderes en escenarios pre-constituyentes, muchas de “estas fuerzas que convergieron en la coyuntura de la ANC decidieron apoyar los candidatos liberales<sup>66</sup> o apuntaron hacia los candidatos de la izquierda que estaba

---

<sup>66</sup> Como representantes Liberales del Litoral Pacífico se presenta: “la liberal Otilia Dueñas; Justiniano Quiñoñes y Tadeo Lozano, todos del departamento de Chocó” (Castillo, 2010: 198)

representada por la guerrilla bolivariana desmovilizada del M-19 y la Unión Patriótica”. (No 03, 2014, entrevista).

Se postularon varios candidatos afrodescendientes pero desde otros partidos políticos:

La mayoría estaba en las listas del liberalismo porque tradicionalmente este partido fue un canalizador de las demandas de la población en sus períodos de gobierno, pero con el tiempo dejó de responder a estas demandas, transformándola en un sistema clientelista. Cabe aclarar que dentro de este panorama político, el liberalismo para este momento no creía en que los afrodescendientes pudieran organizarse y hacer reales sus demandas en escenarios de la política institucional. En el caso de los conservadores ni siquiera les interesaba el planteamiento de las organizaciones afrodescendientes (No 03, 2014, entrevista).

De esta forma, la presencia del bipartidismo aportó a la fractura de la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN), a causa de las profundas divisiones y la diversidad de perspectivas que se presentaron en la CNCN. La idea que se construyó sobre la CNCN desde los grupos campesinos, urbanos y populares, los partidos tradicionales hasta los movimientos de izquierda y los movimientos étnico-culturales, “fue que este espacio solo fue un breve experimento de encuentro y participación para afrontar la coyuntura de la ANC” (Grueso y Rosero, 2010:239).

Sin embargo un grupo de líderes, que estuvo atento y examinó las discusiones en las asambleas de Cali, Buenaventura y Quibdó, no quedaron conformes con la lista de candidatos y varios participantes de estos encuentros se distanciaron de las propuestas de la política tradicional y decidieron lanzar su propio candidato: Carlos Rosero, quien fue postulado por las comunidades inconformes en octubre de 1990. Era el candidato que se supone defendería la identidad negra, con dos objetivos específicos: 1) luchar contra la invisibilidad que el proyecto de nación mestiza había construido sobre la gente negra, la cual no tenía ningún reconocimiento legal distinto al de la ley de la abolición de la esclavitud; y 2) obtener un conjunto de derechos relacionados con el territorio de la costa pacífica colombiana (Castillo, 2007:196).

Este líder estuvo en el proceso pre constituyente participando activamente en la difusión de la información en cada uno de los municipios en los que se hicieron los encuentros. Adicional a esto, conocía las problemáticas de la región del Pacífico. Frente a esta posición se presentó una drástica ruptura con el Movimiento Cimarrón porque su

máximo dirigente Juan de Dios Mosquera decidió de un momento a otro pasar de las listas de la Alianza Democrática M-19 a las listas de la Unión Patriótica, partido que era considerado el brazo político de las FARC y que estaba atravesando por un proceso de exterminio político de sus dirigentes, lo que ocasionó pérdida de credibilidad, debilitamiento y ruptura del Movimiento Cimarrón en relación al resto de comunidades afrocolombianas (Castillo, 2007:195).

Bajo estas condiciones de debilidad de las coaliciones afrocolombianas, un grupo de líderes y una parte de las comunidades negras impulsaron la candidatura de Carlos Rosero a la ANC. Este candidato, no obstante, solo logró 3.168 votos que no alcanzaron para ocupar una curul en la Asamblea. Jair Mena explica que:

El fracaso electoral se debió a distintas razones: “1) la fuerte presencia del bipartidismo tradicional en la región del Pacífico; 2) la presencia de la izquierda que cautivó con sus acciones a la población como el caso del M-19; 3) la ausencia de identificación con lo negro por parte de la población afro y la invisibilidad de las organizaciones afrocolombianas; 4) la presencia de la idea de blanqueamiento propuesta por el proyecto integrador de la nación mestiza; y, 5) la escasa o poca experiencia electoral de las organizaciones agrupadas en el CNCN que además no poseían la infraestructura organizativa que les permitiera movilizar a sus seguidores y captar más votos contrarrestando las prácticas clientelistas de los partidos liberal y conservador que se habían convertido en maquinarias electorales clientelistas en la región del Pacífico (No 03, 2014, entrevista) (Castillo, 2007:203).

Aunque las comunidades afrodescendientes intentaron llegar a la ANC con Carlos Rosero como candidato, también habían contemplado la posibilidad de no lograrlo y en ese caso tenían presente que en el Chocó, la ACIA había construido relaciones interétnicas con los indígenas.

Es así, como Jair Mena explica que a partir de estas relaciones con los indígenas: “las comunidades negras de esta zona crearon una relación política y de fuerte empatía con líderes indígenas, especialmente con Francisco Rojas Birry quien asesoró con sus conocimientos en derecho a las luchas territoriales de las comunidades afrodescendientes e indígenas en las disputas con las empresas de explotación maderera y minera”(No 03,2014,entrevista). A la par algunos núcleos afrodescendientes que se identificaron con la CNCN también habían establecido relaciones con Lorenzo Muelas el candidato indígena de la Asociación indígena de Colombia -AICO-, pero Lorenzo muelas fue enfático todo el

tiempo en que su defensa estaba más a favor de las comunidades indígenas que de las afrodescendientes.

Desde la perspectiva de Zamosc (2005) la política del poder busca conquistar posiciones dentro del Estado como medio para participar directamente en las decisiones del Gobierno (Zamosc, 2005:214). Esta categoría analítica combina las diferentes formas de lucha, recurre a la protesta, la gestión institucional, estrategias pacíficas como: la creación de consejos, agencias de control o la participación electoral para conseguir legitimidad social y representación en diferentes estancias políticas (Zamosc, 2005:214)

### **3.3.1 Alianzas político electorales previas a la Asamblea Nacional Constituyente.**

Desde la perspectiva de Zamosc (2005) la política del poder busca conquistar posiciones dentro del Estado como medio para participar directamente en las decisiones del Gobierno (Zamosc, 2005:214). Esta categoría analítica combina las diferentes formas de lucha, recurre a la protesta, la gestión institucional, estrategias pacíficas como: la creación de consejos, agencias de control o la participación electoral para conseguir legitimidad social y representación en diferentes estancias políticas (Zamosc, 2005:214)

Las alianzas de las comunidades afrodescendientes se concentraron en pactar con tres fuerzas o sectores políticos. La primera fuerza fue el movimiento indígena con dos candidatos propios uno por las comunidades indígenas y otros por las comunidades negras. Antes y después de los debates de la ANC los dos constituyentes indígenas fueron parte de aliados regionales importantes al lado de la iglesia y las ONG para llevar las demandas de los afrocolombianos a la ANC.

Esta alianza se sustentaba en la lucha compartida territorialmente que se mantenía entre indígenas y afrodescendientes desde hace varios años, una lucha social de exclusión histórica que se había fundamentado en contra de la construcción de la nación mestiza, donde se negaba el reconocimiento de la diversidad étnica. Pero al mismo tiempo se luchaba por un territorio bi-étnico, en donde la titulación también estuviera dada para los afrodescendientes, porque los indígenas ya tenían su reconocimiento como resguardos indígenas en la constitución pero hacia faltaba el reconocimiento de lo tribal<sup>67</sup> para las comunidades afrodescendientes.

---

<sup>67</sup> En palabras de Libia Grueso “lo tribal” en las comunidades afrodescendientes se define como: “la capacidad que tiene las comunidades afrodescendientes para pensar el territorio como parte de un todo, el cual

Dentro de esta política de alianza entre afrodescendientes e indígenas, el constituyente indígena Francisco Rojas Birry hizo la exposición de motivos de las demandas de los afrodescendientes en la comisión segunda de asuntos étnicos de la ANC. Esta ponencia argumentó por qué era necesario darle un carácter multiétnico y plural a la Nación, lo cual fue sustentado de este modo:

Colombia debe reconocerse en la unidad de la diversidad, amparada bajo una misma patria y reconocida por encima de todo como colombiana. La unidad nacional se afianza participando de la diferencia y abriendo espacios para que esos valores se manifiesten (Sánchez y Sánchez, 1993:37).

En esta demanda, Rojas Birry presentó los cuatro derechos fundamentales de los grupos étnicos: “la etnicidad cultural, la autonomía, la propiedad territorial y la participación en los asuntos de gobierno”. Estos derechos fueron complementados con una estrategia para el reconocimiento de los territorios étnicos como entidades territoriales de la Nación, dicha formulación se apoyaban en las siguientes postulados: 1) La autonomía para crear sus propias formas de organización económica, social y política; 2) la formulación de un ley de acuerdo a la extensión de población, organización y recursos articulada con las demás demandas territoriales; 3) evitar homogeneizar las diferencias étnicas bajo un mismo régimen, por lo que es importante legitimar la autonomía de las entidades territoriales que se ajusten a su diversidad cultural; 4) la denominación de “nacionales” a los indígenas que compartan territorio fronterizo con Colombia; 5) La prohibición y sanción a toda forma de racismo y discriminación; y 6) el reconocimiento y la garantía estatal de las formas de propiedad comunitaria y solidaria (Sánchez y Sánchez,1993:39).

Mientras que el constituyente Lorenzo Muelas desde el inicio de los debates en la ANC fue muy claro con las comunidades afrodescendientes y “siempre dio mayor prioridad a la defensa de su origen indígena y a las propuestas de la ONIC, la OIA y la OREWA” (No 01, 2014,entrevista). Lorenzo Muelas afirmó que defendiendo únicamente que los derechos del pueblo indígena debían quedar incorporados en la Constitución y lo hizo argumentando que:

---

es utilizado con la necesidad de preservar la vida de la comunidad, donde el alimento se intercambia entre los agricultores y donde el dinero no es para acumular sino para gastar” (No 1, 2014, entrevista)

Para reanudar el camino truncado, reconciliando los distintos pueblos de Colombia, haciendo fraternal la relación entre los distintos pueblos y cultura de Colombia. Se debe garantizar el cumplimiento del Derecho Mayor que contempla el cuerpo de derechos que los acompaña como miembros de las comunidades y pueblos originarios de estas tierras americanas (Sánchez y Sánchez, 1993: 46-47).

Las comunidades afrodescendientes al no lograr tener por votación un constituyente propio, se plantearon alianzas políticas y movilizaciones sociales para poder llevar sus demandas a la ANC y lograr la aprobación del Artículo Transitorio 55 como punto de partida para más tarde obtener objetivos cómo lo fue la aprobación de la ley 70 de 1993, que contiene los criterios básicos y fundamentales para exigir reconocimiento e inclusión en la sociedad.

Frente a este apartado el antropólogo Andrés Meza enfatiza en que:

Las demandas por el territorio y la identidad, permitió que las comunidades afrodescendientes comenzaran a buscar aliados para fortalecer su lucha, como las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas para reclamar en conjunto la pertenencia del territorio ancestral para las comunidades afrodescendientes e indígenas (No 06, 2014, entrevista)

Lo que implicó que los procesos organizativos fueran tomando una mayor fuerza y presencia en la esfera pública de lo local y al mismo tiempo articulándose para hacerse más fuerte a nivel de la esfera pública regional.

En correspondencia Libia Grueso y Carlos Rosero en sus descripciones indican que:

Otros aliados en el micro-espacio regional que pertenecían al ámbito académico, fue el importante aporte que hicieron los grupos de estudio en universidades en Quibdó y Pereira, donde se articularon en las discusiones de distintas líneas políticas de la izquierda universitaria y estos en conjunto con las pastorales de los misioneros claretianos llevaron a cabo un interesante proceso educativo en Quibdó y Nariño desde el enfoque de la teología de la liberación que contribuyó a cambiar la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes y a plantearse la discusión sobre la discriminación racial en el país (No 01y 02, 2014, entrevistas).

La segunda fuerza política a la cual recurrieron y con la que articularon en las comunidades afrodescendientes, fue a la Alianza Democrática M-19 y a la Unión Patriótica, específicamente al constituyente Fals Borda quien realizó la exposición de motivos en la comisión de ordenamiento territorial que proponía: a) la revisión de límites de las entidades territoriales; b) la conformación de entidades territoriales nuevas o previa consulta popular;

c) hacer estudios técnico y producir material cartográfico basado en argumentos socio demográficos, culturales, económicos y ecológicos que afecten el funcionamiento de las entidades territoriales; d) realizar con las instituciones especializadas, consultas populares y especializadas en sitios donde experimenten los cambios señalados; y e) producir y publicar periódicamente el mapa oficial de la República con las novedades efectuadas en las entidades territoriales y sus límites (ANC, Proyecto de reforma constitucional No14:4).

Fals Borda participó activamente en el debate del Artículo Transitorio 55 (AT55) para las comunidades afrodescendientes. Es así, como Libia Grueso aclara que:

El aporte específico de este Fals Borda fue la discusión sobre el ordenamiento territorial para las comunidades afrodescendientes, pero no desde la perspectiva de la distribución territorial de los títulos y no desde la perspectiva lo étnico-cultural porque aún no se había desarrollado el debate sobre la categoría de la etnicidad y de lo tribal, es decir de la particularidad de su cultura en la forma de vivir en el territorio, de producir su dieta alimentaria, de crear y vivir su cultura desde la creencia de la música, el baile, el uso no acumulativo del dinero y , la solidaridad y las practicas comunitarias de las comunidades afrodescendientes (No 01, 2014, entrevista) (ANC, Proyecto de reforma constitucional No14:4)

Posteriormente en una ponencia conjunta que presentan los constituyentes Francisco Rojas Birry, y el sociólogo constituyente por el ADM-19 Fals Borda en la comisión segunda, argumentaron:

La autonomía constituye el principio básico de la organización de todas las entidades territoriales del país. En donde se aclara que todas las entidades territoriales de los grupos étnicos estarán conformadas por territorios de resguardo, tradicionales y los que constituyen el hábitat y que la subcomisión de ordenamiento territorial determine las categorías y articulación de acuerdo a su extensión, población, organización y recursos de cada territorio étnico (Sánchez y Sánchez, 1993: 47).

La tercera fuerza política con la que pactaron las comunidades afrodescendientes fue con el liberalismo de la Costa Atlántica. El constituyente Liberal Eduardo Verano de la Rosa, realizó una ponencia sobre la administración y distribución territorial. Propuso crear un Estado descentralizado en su gestión pública, en la comisión segunda de asuntos territoriales y étnicos, también realizó una exposición de motivos sobre la distribución y organización territorial en los municipios de Colombia, insistiendo en la autonomía de las



regiones en “oposición a la centralización y toma de decisiones desde la capital de la república” (Gaceta, No19: 52-61)

En correspondencia, Libia Grueso explica que:

Este argumento fue el criterio fundamental para que las comunidades afrodescendientes abrieran un canal de diálogo en el momento en que se daba el debate al interior de la ANC con el constituyente planteándole que en el momento en que se necesitara del apoyo para la defensa del Artículo Transitorio 55. El constituyente liberal Eduardo Verano de la Rosa y su bancada, en la comisión apoyaron la aprobación de este artículo que contenía la demanda territorial de las comunidades afrodescendientes. Estos constituyentes liberales fueron muy importantes en los debates porque con su defensa desde lo territorial se logró que se aprobara el AT 55 antes de los cinco minutos que faltaban para que se cerrara el tiempo de discusión de la comisión segunda (No 01, 2014, entrevista).

A manera de síntesis, fueron siete las ponencias que se presentaron en la comisión segunda como proyectos que los territorios indígenas y étnicos, para que sean considerados como entidades político-administrativos del país. En correspondencia diez y seis proyectos territoriales que afirmaron que se debía legislar sobre la autonomía de los territorios indígenas y étnicos ya sea por la autonomía o como régimen de organización política, económica, social y por la administración de recursos naturales de su territorio (Sánchez y Sánchez, 1993: 55-56).

### **3.3.3 Lobby y persuasión a los constituyentes de otras fuerzas políticas en la ANC.**

En correspondencia se observa un trabajo de persuasión del movimiento hacia los constituyentes, con una mezcla de lobby y debate político en un proceso de transición hacia la búsqueda de una forma que está a mitad del camino entre la política de la influencia y la política del poder.

Es así, como Jair Mena explica que:

Mientras las comunidades afrodescendientes buscaban hacer alianzas con los constituyentes al interior de las comisiones de la ANC, al mismo tiempo las comunidades afrodescendientes crearon un espacio y un conjunto de acciones como el diálogo, las alianzas, la exposición de motivos, el lobby, la persuasión a los constituyentes, para influenciar la sociedad, buscando el reconocimiento de su identidad en la sociedad y gobierno tanto en la esfera pública como la presión a escenarios de la esfera institucional” (No 03, 2014, entrevistas)

Grueso y Rosero (2010) explican que:

“El carácter predominante de la Coordinadora de Comunidades Negras fue la heterogeneidad política, ideológica y social. De esta forma participaron afrodescendientes provenientes de los partidos tradicionales, de la izquierda marxista, de los núcleos que comenzaron a desarrollar conciencia negra, campesinos negros del Chocó, del norte del departamento del Cauca y líderes urbanos que luchaban por los derechos de los negros” (Castillo, 2007: 194)

Desde la experiencia de Jair Mena relata que:

En el momento en que se daba la ANC paralelo se hacia otro encuentro que externamente permaneció al tanto de los debates que se daban al interior de la Asamblea, este escenario fue constituido ese grupo de líderes que apoyaban la alternativa política de la identidad negra, se dividieron en dos grupos, uno que se desplazó a la ciudad de Bogotá en donde se armó un equipo con líderes de la Pastoral Indígena del Medio Atrato del Chocó, con los misioneros claretianos, un equipo de la diócesis del Chocó, líderes del pacífico sur y líderes independientes del Chocó, para hacer un salto de la política local a la política nacional. Pero además para realizar un ejercicio más cercano de seguimiento a las discusiones de la ANC, que permitiera tener información permanente sobre las decisiones de la Asamblea y de esta forma poder crear estrategias de participación para incluir en este escenario sus intereses para ser incluidos, discutidos y aprobados como artículos de la nueva reforma constitucional (No 03, 2014, entrevista)

Este escenario de confluencia de distintas organizaciones se denominó la “ONIC Constituyente”, y Jair Mena lo describe como:

El espacio donde llegaba la información de lo que estaba pasando en las discusiones de la ANC, se difundía, se analizaba, se debatía entre muchos delegados de organizaciones (mínimo 20-25 hasta 40 delegados), en un periodo de tres a cinco días para llegar a un acuerdo, construir una demanda y llevarla a la esfera pública o a la ANC (No 03, 2014, entrevista)

Jair Mena relata que de la ONIC constituyente:

Surgió la acción del “telegrama negro”, iniciativa que consistió en enviar a través de Telecom<sup>68</sup> de todas las partes del país un telegrama a la ANC manifestando las demandas y las problemáticas de la población afrodescendiente esta acción logró hacer llegar más de 20.000 telegramas a la ANC, donde los afrodescendientes solicitaban a la Asamblea que escucharan y aprobaran sus propuestas. Se trató de una iniciativa que necesitó de mucha logística entre la ciudad y el sector municipal-rural, porque se desplegó toda un red de correos humanos que se desplazaron hacia las veredas y las zonas ribereñas para llevar y traer los telegramas hasta dejarlos en las sedes de Telecom para hacerlos llegar a Bogotá a la ANC (No 03, 2014, entrevista)

---

<sup>68</sup> La única empresa de teléfonos, telegramas y encomiendas de ese momento.

Al mismo tiempo la “ONIC Constituyente” era la encargada de coordinar otras acciones que se llevaron a cabo en la esfera pública, como los comunicados que la ONIC constituyente hizo para difundir a la opinión pública en donde daba a conocer lo que estaba sucediendo en los debates de la ANC y a la vez estos comunicados funcionaban como el puente de comunicación entre el grupo de la ONIC constituyente y el grupo de líderes de los municipios. Jair Mena también explica que también se realizaron acciones como:

La toma de la embajada de Haití <sup>69</sup> con 18 líderes que vieron esta toma como un mecanismo de presión al gobierno para que la ANC escuchara y aprobará las demandas afrodescendientes en la Constitución. Ejecutar estas acciones políticas en escenarios rurales y urbanos hizo que se generará un espacio de negociación con el Ministerio del Interior y las comunidades afrodescendientes, en donde los líderes hicieron enfático reclamo a los voceros del Ministerio por no tener un espacio para ellos en la Constituyente (No 03, 2014, entrevista).

Aquí se evidenció la debilidad de las organizaciones afrocolombianas por su falta de representación directa en la ANC.

Paralelo a esto, en medio de las discusiones que se mantenían en Bogotá en la ANC, en los municipios, “los líderes y organizaciones que estaba en el escenario rural, se encargaban de difundir, sensibilizar, planear y hacer acciones como las tomas de barrios, iglesias e instituciones como el Instituto colombiano de reforma Agraria -INCORA-”(No 03 y 04, 2014, entrevistas). En medio de protestas y movilizaciones se presionó a la ANC para que “la propuesta de las comunidades afrodescendientes fuera votada en la plenaria de la asamblea, debía ser aprobada en la comisión segunda. Después de múltiples negociaciones y transacciones fue aprobada en la última sesión y en los últimos minutos de sesión de esta comisión” (Castillo, 2007: 264 y 267)

### **3.4 A modo de conclusión.**

El proceso con el que continúan las comunidades negras después de la aprobación del Artículo Transitorio 55 (AT55), es reglamentarlo. Es allí donde se refuerza la disputa entre las comunidades afrodescendientes como un movimiento frente al gobierno nacional. En 1992 las comunidades afrodescendientes dejaron de esperar y emprendieron la lucha para que el AT55 dejara de ser transitorio y pasara a ser una ley de amplia cobertura.

---

<sup>69</sup> Una toma de una institución estatal es una acción en donde un grupo de personas bastante grande, con una planeación previa de forma pacífica ingresa a las instalaciones y hace una demanda pública en donde exige que se le dé respuesta a la demanda y a cambio de soluciones, las personas de la toma desalojan el lugar(No 04, 2014, entrevista)

Frente a la apatía del gobierno, las comunidades afrocolombianas realizaron en Tumaco en 1992, la primera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en donde definieron dos objetivos: 1) Participar en la alta comisión especial, designada por el gobierno, y 2) Incentivar una fuerte movilización con las comunidades afrodescendientes de la Costa Pacífica, de esta manera se consolidó aún más su proceso organizativo.

La Comisión Especial en donde se reglamentó el AT55 tuvo como función reconocer tanto los territorios de las comunidades negras y de los indígenas, reconociendo el principio de la participación de representantes elegidos por las comunidades y que participaron en la aprobación del AT 55. Sin embargo al pasar el tiempo esta supuesta comisión no fue asignada ni integrada por el gobierno, entonces las comunidades afrodescendientes se movilizaron y volvieron a utilizar la acción de los telegramas para presionar al gobierno que asignará la Comisión Especial.

Ante estas acciones de presión el gobierno a través del decreto 1332 del 11 de Agosto de 1992 se reconoció la Comisión Especial de Comunidades Negras (CECN) para cumplir con la reglamentación del AT55. Identificar y proponer los mecanismos de protección y crear los programas de desarrollo económico-social para las comunidades afrodescendientes era lo substancial para iniciar con el cumplimiento del artículo.

Con el reconocimiento del gobierno nacional, las comunidades afrodescendientes lograron obtener escenarios como las comisiones en la esfera pública institucional. Sin embargo conquistar estos escenarios tan solo fueron logros parciales de las comunidades afrodescendientes porque desde ahí en adelante se acentuó la lucha con el gobierno nacional con un componente particular: entender lo étnico desde la conceptualización particular de los actores que integran las comunidades. Estos conceptos se definen de acuerdo al contexto, al territorio y a su cultura.

Desde esta perspectiva las comunidades afrodescendientes<sup>70</sup>formaron los consejos comunitarios<sup>71</sup>y mediante la organización y la acción lograron la aprobación de la ley 70 de 1993, que permitió la titulación de territorios colectivos.

---

<sup>70</sup> Organizaciones étnico-territoriales como “la Asociación Campesina Integral del Atrato -ACIA-, la asociación campesina de San Juan -ACADESAN-, la Asociación Campesina del Alto Baudó -ACABA-, la organización de barrios populares del Chocó -OBAPO-, comité de defensa del río Cajambre (CODINCA), la asociación popular de negros unidos del río Yurumanguí (APONURY), Organizaciones como Sinécio Mina y algunas organizaciones de la Costa Caribe” (Castillo, 2007:308)

Jair Mena enfatiza que:

En este proceso los líderes volvieron a utilizar el conjunto de estrategias que implementaron para difundir la información del AT55, es decir, viajar a los territorios y convocar a reuniones informativas, posteriormente realizar talleres de discusión, de cartografía, utilizando la memoria y la historia de cómo se pobló el territorio, además hicieron periódicos y plegables artesanales que contenían la plataforma de lucha para la defensa del territorio, inclusive la pastoral del Chocó colaboró y financió la elaboración de un video que hacía referencia a la problemática de las comunidades afrodescendientes en el Pacífico, el cual era utilizado en los encuentros con las comunidades que visitaban los líderes, al mismo tiempo se formaron comités de solución a problemáticas de salud, educación, economía, entre otros (No 03, 2014, entrevista).

De esta forma se estructuró el Proceso de Comunidades Negras (PCN) en 1993. En este nivel organizativo del movimiento se observa que existía madurez frente al manejo estratégico de las movilizaciones y las acciones que el movimiento realizaba en la esfera pública porque permitía lograr crear agendas, acuerdos, liderazgos y capacidad de negociación con otros sectores y con el gobierno nacional.

Para las comunidades afrodescendientes la convocatoria a la Asamblea Nacional constituyente fue un factor que favoreció y potencio los procesos de organización que ya se venían gestando en clave de la combinación de asociacionismos civiles, del orden religioso, pro defensa de los derechos ciudadanos y el asociacionismo cultural en forma dispersa para pasar a un movimiento social.

---

<sup>71</sup> Eran “formas de administración interna de los territorios para hacer la distribución de la propiedad colectiva, delimitar los territorios, preservar la identidad cultural y el manejo de los recursos naturales y escoger el representante legal de la comunidad”

## CAPÍTULO IV

### CONCLUSIONES.

#### **Introducción.**

Las conclusiones de la tesis procuran dar cuenta de la interrogante central de esta investigación: **¿Cómo participó e influyó el movimiento afrocolombiano en el curso de la Asamblea Constituyente de 1991?** Las respuestas a esta cuestión se sostienen en los hallazgos empíricos del estudio, recabados desde una combinación de categorías analíticas que permiten entender la política de la influencia de tal movimiento en una coyuntura política de particular importancia para Colombia.

El capítulo final de la tesis está dividido en tres grandes bloques en función de los principales recortes analíticos del trabajo, en el primero se retornan los hallazgos respecto a la estructura de oportunidades políticas en que se desató el salto de los movimientos sociales a la esfera política en el curso de la disputa por la Constituyente y durante su instalación.

Se trató de un entorno político en donde los movimientos se interrelacionaron entre sí, crearon agendas, innovaron sus prácticas y alcanzaron alianzas con otros movimientos, partidos e incluso instituciones públicas. Tales capacidades políticas permitieron a los movimientos lanzarse al espacio público e influir de diversos modos en el sistema político en medio de su parcial apertura.

En el segundo bloque a partir de la combinación de las categorías de sociedad civil, esfera pública y política de la influencia se concluye, respecto a cómo las organizaciones del movimiento afrocolombiano dinamizaron su acción colectiva, procurando incidencia tanto al interior del propio movimiento, en cuanto a la consolidación de su proceso organizativo como al reconocimiento y la participación en la esfera pública, lo que posibilitó dar el salto de una participación incipiente no institucional a nivel local a una participación política con proyección nacional.

El tercer bloque se ocupa de reconstruir cómo se da el paso de la política de la influencia a la política del poder por parte del movimiento social afrodescendiente a través de la comprensión del paso de la participación en la esfera pública a formas políticas más

realistas en el sistema político: establecer relaciones con partidos, pactar agendas con asambleístas, realizar tareas de lobby, participar en espacios de negociación para hacer acuerdos con otros sectores sociales, etc.

El conjunto de la investigación fue delimitada a partir de constatar la limitación que tuvo el movimiento social afrodescendiente al no tener representación directa en la Asamblea Nacional Constituyente, lo que significó la imposibilidad de participar como actor político en el escenario constitucional: Al constatar esta situación el movimiento se vio obligado a recurrir a diversas acciones como las asambleas deliberativas, la movilización en la esfera pública, estrategias de lobby, negociación y alianzas políticas. Es decir, la tesis estudia las tensiones entre representación y participación en los movimientos sociales en determinadas coyunturas críticas.

Para poder identificar y comprender como el movimiento social afrodescendiente orientó su acción colectiva y procuró influir en el juego político, fue necesario recurrir a tres herramientas teóricas de análisis: 1) sociedad civil, que permite examinar la incidencia de los nuevos actores sociales en los procesos democráticos contemporáneos a partir de específicos mecanismos de expresión y participación; 2) esfera pública, que ayuda a entender cómo a través de mecanismos de expresión y participación se influenció el espacio público para colocar y colectivizar en este nivel las demandas de los movimientos sociales. Y 3) política de la influencia que da cuenta de un específico modo de incidencia de la sociedad civil en la esfera política de cada nación, transitando hacia la política del poder, como lo logró en este caso el movimiento social afrodescendiente en la esfera de la institucionalidad.

### **1. El entorno de la Asamblea Nacional Constituyente.**

En esta investigación la categoría Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) permitió dar cuenta de forma general, la capacidad de los movimientos sociales para identificar y actuar en ciertas coyunturas de crisis de la política institucional. En el caso colombiano, entre finales de los 80 y el momento en que se instala la ANC, el movimiento social afrodescendiente identificó que en el proceso constituyente existía una apertura parcial institucional de la participación política, porque mientras se proponía el dialogo a diversos sectores sociales, al mismo tiempo se daba un proceso de exterminio a la oposición política,

sin embargo era la posibilidad de obtener la visibilidad y el reconocimiento público que venían disputando los afrodescendientes hace varios años. A la vez, las organizaciones vieron la posibilidad de materializar algunas de sus demandas como normativas de carácter nacional.

La percepción de que la EOP estaba globalmente abierta para el movimiento afrodescendiente provenía de la constatación de tres factores: a) existía una división de las élites reflejadas entre los desacuerdos entre las figuras y partidos dominantes respecto a la necesidad de abrir un proceso constituyente; b) se apreciaba una ampliación del campo de posibles aliados para el movimiento afrocolombiano en el marco del proceso de desmovilización del M19 y de la emergencia de diversos actores sociales con voluntad de disputar el cambio político del país, y, c) entre la crisis “por arriba” y la emergencia “por abajo” el movimiento pudo establecer la necesidad de crear estrategias para actuar y relacionarse con otros líderes, sectores sociales y actores políticos (aliados influyentes) presentes en la Asamblea Nacional Constituyente a fin de que contribuyeran a colocar las demandas del movimiento en la nueva Constitución.

El movimiento social afrodescendiente, al identificar que la propuesta de cambio constitucional abría en el bipartidismo una amplia brecha política que en el caso del Partido Conservador era visto como la pérdida de legitimidad política del bipartidismo en la esfera institucional, mientras que el Partido Liberal veía en la nueva constitución una gran oportunidad de reforma administrativa, económica, política y social para introducir al país en procesos de libre comercio, industrialización a gran escala y reconocimiento de los derechos humanos, la pluralidad y la multiculturalidad. Es así, como en medio de esa división de perspectivas políticas, el movimiento afrodescendiente se volcó a buscar el apoyo de sus demandas en el Partido Liberal, especialmente en las regiones donde también se hallaron como aliados influyentes a la iglesia, ONG y el movimiento indígena; con el último se pudo llegar a establecer acuerdos programáticos que les permitió poner las demandas afrodescendientes en la ANC de forma indirecta.

La capacidad del movimiento afrodescendiente de captar la apertura de la EOP le permitió esbozar una agenda política para la Asamblea Constituyente y tejer diversas relaciones con líderes, organizaciones eclesiales de base, procesos comunitarios y educativos, partidos políticos, algunos sectores de las nuevas fuerzas políticas de la



izquierda como la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19, líderes regionales del Partido Liberal, líderes indígenas y voceros del gobierno. A futuro el impacto de estas relaciones sobre el movimiento se vio reflejado de dos formas: 1) en lo institucional el movimiento logró obtener, en medio de la apertura parcial de las instituciones, la legitimidad para participar en escenarios políticos como Cámara de representantes, Consultivas de Alto nivel y los Consejos de Planeación nacionales y locales. 2) en lo organizativo, el movimiento dio un salto cualitativo de lo local a lo nacional, porque al ampliarse su interacción con otros sectores sociales, se fue ampliando su presencia en distintos escenarios y fue tejiendo redes de comunicación que traspasaron el ámbito local, hasta estructurar un movimiento con presencia, articulación, trabajo e impacto a nivel nacional.

Cada coyuntura crítica trae consigo un peso político que recae sobre los distintos movimientos sociales, ya sean estos viejos, nuevos o emergentes. Según el peso político que dejen las coyunturas sobre los movimientos sociales, pueden tener tendencia a deteriorar, inmovilizar, activar o hacer surgir un movimiento de acuerdo a la lectura que los actores hagan en ese momento y de los objetivos que estos tengan para activar su lucha.

La estructura de oportunidad política para el caso de la influencia del movimiento afrodescendiente en la ANC, permitió entender las formas en cómo se expresó la institucionalidad en medio del estallido de la política y la crisis del Estado colombiano en donde había poca estabilidad y unidad del bipartidismo político, es decir, los altos niveles de violencia son claves para entender la apertura de la participación política pero de forma parcial, combinada con el uso de la represión hacia la movilización y oposición política.

La EOP permitió que el movimiento tuviera la capacidad de identificar que tanto las relaciones como la estabilidad de las élites políticas estaba en un momento de fragilidad y crisis propicia para establecer la vía por la cual se podía luchar por sus demandas de reconocimiento identitario y territorial, además de encontrar allí la posibilidad de conseguir apoyo y aliados influyentes en la institucionalidad.

La EOP también permitió al movimiento afrodescendiente ver la imperiosa necesidad de interactuar con actores de la institucionalidad, voceros y delegados del gobierno y del bipartidismo, es decir, los afrodescendientes consideraron que para conquistar espacios de participación institucional era necesario interactuar con líderes

indígenas y del liberalismo que poseían diversas relaciones e influencias con la institucionalidad tanto en la esfera pública de lo local, lo regional y lo nacional.

## **2. La política de la influencia del movimiento afrocolombiano.**

Incidir en la esfera pública, supuso para el movimiento afrodescendiente un desafío que se evidencia en esta investigación a partir de identificar las primeras formas de organización del movimiento, basadas en procesos de asociativismo democrático que potenciaron el ejercicio deliberativo, en escenarios públicos que les permitió reclamar y posicionar derechos. A la luz de la categoría de política de la influencia, se pudo observar que el movimiento afrodescendiente aportó a la creación y apertura de escenarios públicos en donde se dieron procesos discursivos que informaron, tematizaron y alteraron las normas sociales, abriendo la posibilidad al cambio político.

La categoría de Esfera pública para el análisis de este actor, permitió dar cuenta de cómo a través del análisis de la asociatividad y de cómo se expresó sus demandas de territorialidad e identidad con la continuidad de acciones políticas en la esfera pública. Espacios pre-constituyentes, encuentros regionales, escenarios alternos nacionales de control de la política, fueron escenarios que permitieron ver que la comunicación y la construcción de las redes del movimiento con militantes de base en lo local y militantes que hacían parte de los encuentros y asambleas entre lo regional y lo local, que posibilitaron procesos de deliberación como las asambleas pre constituyentes, los encuentros de discusión en casas, escuelas, plazas de los pueblos, aportando con estos debates a la construcción de acciones y estrategias como movilizaciones, cantos y alabaos en sitios públicos como plazas, vías, iglesias, edificios de alcaldías que informaban y presionaban con sus demandas en la esfera pública.

Estas formas de manifestación, permitieron la consolidación de una estructura organizativa, y se convirtieron en modos de influenciar, presionar y desestabilizar actores y discusiones de la ANC.

Es así, como el movimiento afrodescendiente creó una forma de participación, fundamentada en un proceso de ida y vuelta de la información. Este proceso de circulación de información de lo local a lo nacional y viceversa, produjo diversas formas de tejido comunicativo basado en el trabajo de difusión por parte de los líderes que actuaron como

“correos humanos” desplazándose a territorios lejanos donde construyeron con las comunidades escenarios de deliberación, debate, talleres informativos y educativos, crearon acciones de propusieron tomas pacíficas con bloqueos a iglesias, vías y alcaldías. Varios de estos escenarios se replicaron en varias comunidades, localidades y regiones, lo que fue consolidando las bases fundamentales para potenciar tanto las demandas de identidad reconociéndolos como grupo étnico y reclamando su territorialidad. A su vez potenciaron su política de la influencia y obtuvieron espacios institucionales como: “la circunscripción electoral especial para los afrodescendientes que les permite tener dos representantes en la Cámara, instituyeron la Dirección de Asuntos de las Comunidades Negras (DACN) adscrita al Ministerio del Interior” y “crearon la división de étnoeducación en el Ministerio de Educación para garantizar que se de la enseñanza de la cultura negra en la educación colombiana”, “sus representantes afrodescendientes obtuvieron espacios en el Consejo Nacional Ambiental, en el Consejos Nacional, departamentales y municipal de Planeación, conformaron una comisión de estudios integrada por representantes de organizaciones para hacer cada cuatro años el Plan Nacional de comunidades negras que es una estrategia que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo” y finalmente “crearon la Consultiva de Alto Nivel que tiene como objeto hacerle seguimiento a la ley 70 de 1993”(Castillo,2007:209-216)

Desde la perspectiva del ejercicio democrático, se analiza que este fue un proceso complejo y altamente costoso, porque demandó gran esfuerzo y movilización, con muy pocos recursos para hacer parte del proceso constituyente sin estar en igualdad de condiciones económica, de reconocimiento político y cultural que los partidos dominantes.

La categoría de política de la influencia permitió en esta investigación conocer el conjunto de estrategias, acciones y espacios que implementaron en la esfera pública, para colocar sus demandas en la ANC. Esta categoría también permitió ver que el actor social tiene autonomía, capacidad de interrelación, de crear procesos de asociatividad, redes de comunicación, agendas programáticas con otros sectores sociales y acuerdos tanto en la sociedad civil y luego en la esfera institucional.

Las limitantes que se encontraron en esta investigación en torno a la política de la influencia del movimiento de cara a la sociedad y el gobierno fueron:1) el lastre de la política bipartidista en la región del Pacífico con fuerte presencia del clientelismo frente a

la alternativa política de “la defensa de la identidad negra” que implicó entender qué es lo afrodescendiente, qué es el territorio, que son zonas rurales, qué es el río...etc. Y 2) la equivocada interpretación cultural de “rescatar las raíces de lo negro” era volver físicamente al continente africano, más no se interpretaba cómo el retomar o no dejar perder las tradiciones y la cultura de los esclavos traídos de África al continente americano.

### **3. La trascendencia de la política de la influencia para el movimiento afrodescendiente en la esfera de la política institucional.**

La Asamblea Nacional Constituyente fue un referente histórico-político importante para la organización y la participación del Movimiento Afrodescendiente en la dinámica política colombiana. Es decir, lograr participación y representación así fuese de forma indirecta, otorgó ventajas para el movimiento como la identificación de sus propios ejes de lucha: reconocimiento como grupo étnico con identidad propia y la territorialidad, con lo cual el movimiento logró tener el estatus de Movimiento Social Afrodescendiente con presencia nacional.

Se transformó la forma de hacer la política para los afrodescendientes, porque se dio un cambio significativo, dando un salto desde una política de la dispersión basada en asociacionismo civil: del orden religioso, cultural pro defensa del derecho humanos ciudadanos a una política de movimiento social organizado con articulación, con líderes locales, regionales y nacionales que se identificaban con una plataforma de lucha en torno al reconocimiento de la identidad y la territorialidad de los afrodescendientes a nivel nacional. Este fue un punto de inflexión en donde el movimiento trascendió con la política de la influencia buscando legitimidad constitucional y reconocimiento social.

El impacto de la ANC para el movimiento afrodescendiente, posibilitó que en la apertura parcial de la participación, este se abriera al desafío de participar en escenarios institucionales y fortalecer su estructura con presencia nacional. La aprobación del artículo transitorio 55, permitió constitucionalmente que se introdujera la categoría de comunidades negras, de esta manera fueron reconocidos legalmente como grupo étnico con una identidad basada en prácticas tradicionales y ocupación ancestral del territorio, tanto de forma individual como colectiva.

El movimiento se proyectó como un actor social con capacidad de participación a nivel regional y nacional, incidiendo en la esfera pública. Para este fin, se empezaron a institucionalizar con la creación de la primera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en Tumaco en 1992 con dos objetivos puntuales: 1) Participar en la alta instancia gubernamental o comisión especial designada por el gobierno e 2) Incentivar una fuerte movilización con las comunidades afrodescendientes de la Costa Pacífica. Lograr que el gobierno nacional reconozca legalmente la Comisión Especial de Comunidades Negras (CECN), significó para las comunidades afrodescendientes la conquista de otro escenario de poder a través de instaurar las comisiones fijas y legitimadas por el gobierno en la esfera de la política institucional. Como lo indica Castillo (2007) “la institucionalización de esta comisión reforzó el reconocimiento constitucional del multiculturalismo y lo pluriétnico”, porque constitucionalmente los afrodescendientes tienen un escenario propio de participación, representación de cara al reconocimiento de su identidad y la defensa de la ocupación ancestral de sus territorios.

La construcción de una fuerte autonomía en el tema de lo político por parte del movimiento afrodescendiente de cara al proceso constituyente, logró que el tema de lo étnico se entienda desde una perspectiva de poder, es decir, los conceptos como: lo étnico, lo rural, el territorio, el río, las zonas ribereñas...etc. Fueron definidos por los afrodescendientes de acuerdo a la particularidad de contextos territoriales, dinámicas culturales, proyectos contextualizados y la implementación de las políticas obedece a las necesidades de las comunidades. Esta perspectiva política propia, permitió la conformación de consejos comunitarios con una visión identitaria de lo étnico que aportó al Estado y la sociedad otra forma de ver lo afrodescendiente y además contribuyó a dar fuertes argumentos para la aprobación de la ley 70 de 1993 y su respectiva titulación de los territorios colectivos.

Finalmente los aportes e impactos que se lograron tanto para este actor social como para la sociedad en general, en términos de la política del poder dentro de la normatividad institucional fue: lograr la aprobación de la ley 70 de 1993 y con ella obtener legalmente la

creación de ocho parques naturales<sup>72</sup>, la protección de 11 reservas naturales que incluían investigación científica, seguridad y defensa nacional. También obtuvieron la legalización de 137 resguardos indígenas, para completar 181 resguardos reconocidos por el INCORA<sup>73</sup>. Lo anterior fue la base de un amplio proceso que desplego y amplió el movimiento en los siguientes años: 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004 para continuar con la entrega de títulos colectivos a las comunidades que se ubicaban en zonas geográficas cercanas a los ríos y vertientes hidrográficas.

---

<sup>72</sup> Estos son: Isla Gorgona y Muchinque, Sanquianga , Farallones en Cali, Ensenada de Utría, los Katios y Tatamá y las orquideas.

<sup>73</sup> Instituto Colombiano de Reforma Agraria.

## BIBLIOGRAFÍA.

- Agúdelo, Carlos (1999). *Proyecto Cidse-Ird*. Cali-Colombia.
- Agúdelo, Carlos (1999). *Proyecto Cidse-Ird*. Cali-Colombia. P: 38
- Arato, Andrew (1999). Surgimiento, ocaso y reconstrucción del concepto de sociedad civil y lineamientos para la investigación futura”, pp. 113-132, en *La sociedad civil de la teoría a la realidad*, A. Olvera (coordinador), México: El Colegio de México.
- Archila, Mauricio y Mauricio Pardo (2001). *Los movimientos sociales, estado y democracia en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia. Centro de estudios sociales. Instituto colombiano de antropología e historia. Colombia. P: 549
- Avritzer, Leonardo (2001). *El nuevo asociacionismo latinoamericano y sus formas públicas; propuesta para un diseño institucional*. En A. Olvera, *La sociedad Civil* México: El Colegio de México. P: 362
- Bonnett, Diana, Michael Larosa y Mauricio Nieto (2010) *Colombia: Preguntas y respuestas sobre el pasado y su presente*. Bogotá Colombia. Editorial: Universidad de los Andes. P: 376
- Bourdieu, Pierre (2003). *Eloficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad : curso del Colláege de France 2000-2001*. Madrid. España: Anagrama S.A.
- Cajas, Juan (2000). *Educación para la Democracia: algunas Campañas y Experiencias de Educación Cívica para América Latina*. México. Instituto Federal Electoral.
- Castillo, Carlos (2007). *Etnicidad y Nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Cali-Colombia. editorial@univalle.edu.co.
- Cohen, Jean y Arato Andrew (2000). *Sociedad civil y teoría política*. Fondo de Cultura económica. México. P: 702
- Dagnino, Evelina, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (2006) *La disputa por la construcción Democrática en América Latina*, México: FCE-CIESAS-UV.P: 15-102
- De la calle, Humberto (2004). *Contra todas las apuestas. Historia íntima de la Constituyente de 1991*. Editorial: Planeta. Bogotá - Colombia P: 285
- Eisinger, Peter (1973). *The conditions of protest behaviour in American cities*. Revista Americana de Ciencias Políticas No 67. P:11-28.
- Fescol (1990). *Una Constituyente para la Colombia del futuro*. Universidad de los Andes. Bogotá Colombia. P: 215
- Granda Marín, Alberto (1994). *Asamblea Nacional Constituyente y Constitución Política de 1991*”. En: Revista Pensamiento Humanista, No. 2. Medellín-Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana.
- Grueso, Libia, Carlos Rosero, y Arturo Escobar (2001): “*El proceso de organización de comunidades negras en la región sureña de la Costa Pacífica de Colombia*. En Política Cultural y Cultura Política. Bogotá. Grupo Santillana. P: 437
- Herrera, Mauricio (2001). Modernidades, nueva constitución y poderes constituyentes. Instituto UNIJUS Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales serie teórica política y jurídica P: 238
- Ibarra, Güell, Pedro Gomá y Salvador Martí. (2002). *Los nuevos movimientos sociales. El estado de la cuestión*. En: Creadores de democracia radical, Barcelona-Icaria. P: 23-56

- Leal Buitrago, Francisco (1995). *Estabilidad macroeconómica e institucionalidad y violencia crónica*. Francisco Leal Buitrago (Comp.) PP. 331. Bogotá- Colombia. Editorial: Tercer Mundo S.A.
- Leal Buitrago, Francisco y Leon Zamocs (1990). *Estructura y coyuntura de la crisis política*. Francisco Leal y León Zamocs. (Eds.), Al filo del Caos. Crisis política en la Colombia de los años 80, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-IEPRI-Tercer Mundo. P: 36.
- Lechner, Norbert (1996). *La (problemática) invocación de la sociedad civil*, en Perfiles Latinoamericanos. No. 6, México: FLACSO
- McAdam, Dough., Jhon McCarthy y Mayer Zald (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid-España. Ediciones Istmo, S.A.
- Meyer, Lorenzo y Juan Reyna (1989) *Los sistemas políticos de América Latina*. Editorial Universidad de las Naciones Unidas. México. P: 390
- Mosquera, Juan de Dios (1998). *El Cimarronismo Contemporáneo*. Inédito.
- Olvera, Alberto (2001). *La sociedad civil. México*: El colegio de México.
- Olvera, Alberto (2003). *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina*: México: Fondo de cultura económica.
- Pardo, Mauricio (1996). *Entre la autonomía y la institucionalización*. En: Journal of Latin American Anthropology Arlington, EEUU: Society for Latin American Anthropology. v.7 n.2 P.60
- Pardo, Mauricio (1997). *Movimientos Sociales y Actores No Gubernamentales*. En M. V. Uribe y E. Restrepo (eds.). Bogotá. ICANH Antropología en la Modernidad P: 207-252
- Pardo, Mauricio (2001). *Acción colectiva y Estado y etnicidad en el pacífico Colombiano*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. P: 259
- Portaneiro, Juan Carlos (1999). *La sociedad civil en América Latina: entre autonomía y descentralización*. En Sociedad Civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad, P. Hengstenberg et. Al. (Editores), Caracas: Nueva Sociedad P: 31-38.
- Proceso de Comunidades Negras -PCN- (2011) *Genocidio del pueblo afrocolombiano: caso pacífico*. Editorial Iberoamericana: España. Madrid P: 328
- Ramírez, Franklin (2009). *Tendencias de la sociedad civil y la participación social en América Latina*”, en *Saúde e democracia: participacao política e institucionalida de democrática* Río de Janeiro: CEBES \*\*\*
- República de Colombia, (1991). *Constitución Política de Colombia*. Santafé de Bogotá. Editorial: ECOE.
- Restrepo, Eduardo y Axel Rojas (2004). *Conflicto e invisibilidad: Retos de los Estudios de la gente negra en Colombia*. Cali. Universidad del Cauca.P:34
- Rodríguez, Cesar (2009). *El desplazamiento afro: tierra, violencia y derechos de las comunidades negras*. Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, CIJUS Ediciones Uniandes. P lo étnico, lo rural, el territorio, el río, las zonas ribereñas...etc.: 27
- Sánchez, Enrique, Roque Ortega y María Sánchez (1993). *Derechos e Identidad. Los pueblos indígenas y negros en la constitución política de Colombia de 1991*. Bogotá- Colombia. Editorial: Presencia. P: 339



- Tarrow, Sidney (1997). *Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el estado moderno*. Capítulo: VI, Madrid: Alianza.
- Tarrow, Sidney (1994). *Power in movement, Social Movements, Collective action and mass politics in the modern state*. New York: Cambridge University Press.
- Tarrow, Sidney (1999). *Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. En McAdam, J. D. McCarthy, & M. N. Zald, *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Marid, España Ediciones Istmo. S.A..P:327
- Wabgou Maguemati, Jaime Arocha, Aiden Salgado y Juan Alberto Carabali (2012). *Movimiento Social Afrodescolombiana, negro, raizal y palenquero*. Editorial: Universidad Nacional de Colombia. Bogotá Colombia P:347
- WWW.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/reglamento.
- Wade, Peter (1992) *The Cultural Politics of Blackness in Colombia American Ethnologist* Vol. 22 Number 2 pgs 341-357
- Zamocs, Leon (2005). *El movimiento Indígena Ecuatoriano: de la política de la influencia a la política del poder*. En *La lucha por los derechos en América Latina* Quito: Editorial Abya - Yala.pg: 330
- Zonorsa, Yesid (2008). *El baile rojo: Relatos no contados de la UP*. Bogotá- Colombia Editorial: Nomos impresores. P: 275

## PERIÓDICOS.

**Nombre del periódico - (año) - “título de la nota” - sección - mes día.**

- Diario El Tiempo, 1990. “Colombia necesita de paz: obispos” Sección Política. Abril 12: 8A
- Diario El Tiempo, 1990. “El 18 de Abril será el Foro por la gran Constituyente” Sección Política: Abril 16: 6A
- Diario El Tiempo, 1990. “Cumbre ecológica en Paipa” Sección Vida de Hoy. Octubre 1: 2C
- Diario El Tiempo, 1990. “Colombia necesita de paz: obispos” Sección Política. 8A. Abril 12: 8A
- Diario El Tiempo, 1990. “Unión patriótica traza una nueva ruta política” Sección Política. Abril 11. 6A.
- Diario El Tiempo, “Guerrero paz y Up debaten el desmonte de las Autodefensas” Sección política. Abril 17. 6A
- Diario El Tiempo, 1990. “UP en contra de los acuerdos constituyentes”. Sección Política. Abril 25.7<sup>a</sup>
- Diario Regional El País. Diciembre 1990.

### ÍNDICE DE ENTREVISTAS.

Código	Nombre	Día-Mes-Año
<b>01</b>	<b>Libia Grueso:</b> Asesora en la ONU sobre la defensa DDHH de las comunidades afrodescendientes	<b>29 - 05 -2014</b>
<b>02</b>	<b>Carlos Rosero:</b> Director del Proceso de Comunidades Afrodescendientes (PCN) una de las organizaciones más importantes en la esfera política colombiana.	<b>27- 05- 2014</b>
<b>03</b>	<b>Jair Mena:</b> Líder en segundo nivel de procesos comunitarios, estuvo presente en el proceso constituyente y trabajo con las comunidades en el ámbito rural., actualmente trabaja con la ACNUR y el PCN en Buenaventura y Bogotá.	<b>04 -06- 2014</b>
<b>04</b>	<b>Luzmila Gutiérrez:</b> Fundadora de la Asociación de Afrodescendientes desplazados. (AFRODES) Sede - Buenaventura.	<b>16- 05- 2014</b>
<b>05</b>	<b>Eduardo Restrepo:</b> Antropólogo y profesor Titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Sus temas de investigación son los procesos organización de las negritudes.	<b>12 -06- 2014</b>
<b>06</b>	<b>Andrés Meza:</b> Antropólogo Investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.	<b>18- 06- 2014</b>
<b>07</b>	<b>Carlos Cardona:</b> Líder con más de 34 años de experiencia en procesos organizativos con las comunidades afrodescendientes en escenarios municipales y rurales.	<b>25 -06 -2014</b>